

# Colombia ante la encrucijada: progresismo o ultraderecha.

Revista Izquierda N° 128



15 DE JUNIO DE 2026



**ESPACIO CRÍTICO EDICIONES**

**Publicación auspiciada por**  
Espacio Crítico Centro de Estudios  
[www.espaciocritico.com](http://www.espaciocritico.com)

ISSN-2215-8332

**128**

junio de 2026  
BOGOTÁ, COLOMBIA

*Las opiniones emitidas por  
los autores no comprometen al  
Consejo Editorial de la Revista.*

**Director**

Jairo Estrada Álvarez

**Jefe de redacción**

Jesús Gualdrón Sandoval

**Consejo editorial**

Víctor Manuel Moncayo Cruz,  
Carolina Jiménez Martín,  
María Teresa Cifuentes Traslaviña,  
Sergio De Zubiría Samper,  
Ricardo Sánchez Ángel,  
Daniel Libreros Caicedo,  
Jorge Gantiva Silva,  
José Francisco Puello-Socarrás

*Todo el contenido de esta publicación  
puede reproducirse libremente,  
conservando sus créditos.*

**Consejo asesor internacional**

Beatriz Stolowicz (México),  
Julio Gambina (Argentina),  
Ricardo Antunes (Brasil),  
Antonio Elías (Uruguay),  
Marcello Musto (Canadá)

**Diseño y diagramación**

Andrea Daniela Donoso Méndez

**Programador**

Juan Sebastian Gaitán Zapata

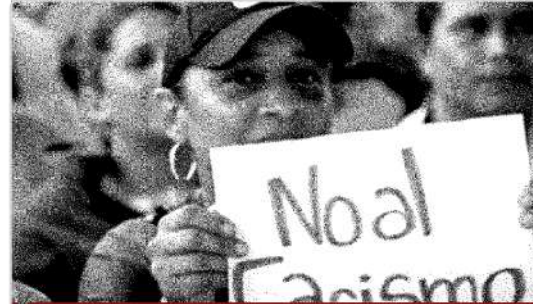
# CONTENIDO



## EN MEMORÍA

En memoria de Víctor Manuel, un imprescindible

Jairo Estrada Álvarez



## RÉGIMEN POLÍTICO

Elecciones presidenciales en Colombia: extrema derecha o neofascismo

Sergio De Zubiría Samper



## RÉGIMEN POLÍTICO

Ganar el gobierno, perder la dirección. Repolarización sin hegemonía en Colombia

Fabrizio Muñoz



## RÉGIMEN POLÍTICO

La internacional reaccionaria y la derecha neopatriotista en Colombia

Carolina Jiménez Martín



## CAPITALISMO HOY

Mercenarios colombianos en el mercado capitalista de la muerte

Renán Vega Cantor



## CAPITALISMO HOY

El balón en disputa. Una mirada marxista del fútbol

Francisco Javier Toloza Fuentes



## NUESTRA AMÉRICA

Bolivia en llamas: La rebelión de lo comunitario contra el fraude político

Pilar Lizárraga Aranibar y Carlos Vacaflores R.



## NUESTRA AMÉRICA

Compartiendo la derrota: Balance preliminar de siete meses de gobierno y conflictos en Bolivia

Hugo Moldiz Mercado



## NUESTRA AMÉRICA

La resistencia a la política de Milei y la ultraderecha

Julio C. Gambina



## NUESTRA AMÉRICA

Neoliberalismo y neoconservadurismo en Brasil: Implicaciones para la educación pública

María de Fátima Cássio, Vera María Vidal Peroni y Leonardo Dorneles Gonçalves

# En memoria de Víctor Manuel, un imprescindible

---

🕒 junio 15, 2026

📖 128

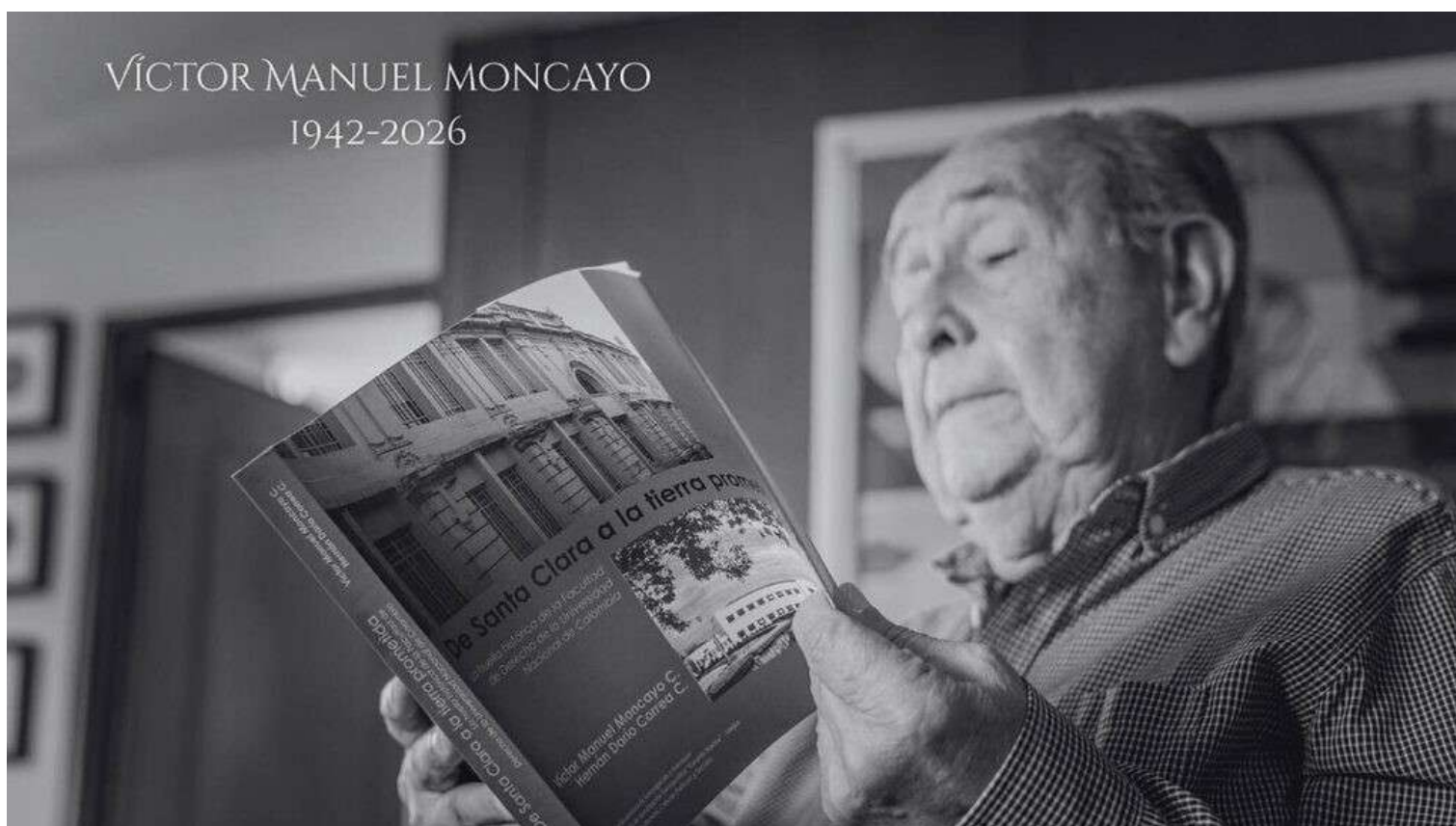


**Jairo Estrada Álvarez**

El pasado 19 de abril partió Víctor Manuel Moncayo Cruz, miembro del Consejo Editorial de nuestra *Revista Izquierda*, un verdadero imprescindible del pensamiento crítico y revolucionario nuestroamericano.

No hay palabras suficientes para dar las gracias por lo que ha representado su obra para las numerosas generaciones que tuvieron la oportunidad de conocerlo. Víctor Manuel desarrolló a lo largo de su vida una incesante producción intelectual, de indiscutible contribución al pensamiento rebelde y anticapitalista. Sus aportes, inspirados en el marxismo, tal y como se encuentran en su extensa y densa obra, han alentado y continuarán alentando los debates y la crítica al orden social vigente, y han merecido el mayor reconocimiento en el campo intelectual y político en Colombia y Nuestra América.

Víctor Manuel contribuyó a una comprensión compleja del derecho, su campo de formación profesional, que permitió trascender enfoques tradicionales e institucionales apegados a la reproducción del derecho dominante, brindar visiones alternativas, y propiciar el diálogo inter y transdisciplinario, así como otorgar -en medio de la rigurosa controversia- otro horizonte de formación y de trabajo a las abogadas y los abogados de nuestro país; al tiempo que fundamentó y promovió los estudios políticos y la Ciencia Política, y alimentó otras disciplinas de las ciencias sociales en Universidad Nacional, con influencias que se extendieron al sistema universitario en general.



<https://iymagazine.es/fotos/15/fallecio-victor-manuel-moncayo-exrector-profesor-emerito-e-investigador-de-la-unal-69e58e0dde8d9.jpg>

Con su dedicación y compromiso, bien sea como estudiante, o como profesor, o como decano, o desde la más alta dignidad como Rector, Víctor Manuel promovió la idea de una Universidad Nacional al servicio del país, concebida como bien común, alejada de intereses personales o corporativos. Hasta cuando la vida se lo permitió la Nacho y el rumbo que venía tomando hizo parte de sus preocupaciones, siempre compartidas con estudiantes, profesores y trabajadores de la Universidad. En el tiempo más reciente se erigió en estandarte de la autonomía universitaria, principio que por décadas ayudó a formular y construir; asimismo tuvo la convicción de la necesidad de explorar los caminos de una necesaria profundización democrática del quehacer académico y del gobierno universitario en todos sus niveles; por tal razón apoyó en su calidad de miembro del Consejo Superior Universitario el proceso constituyente promovido por importantes sectores de la comunidad universitaria. Nadie podría poner en duda que su vida fue también una vida por y para la Universidad Nacional de Colombia.

La política y el campo de lo político han contado y continuarán contando con los aportes de Víctor Manuel, con sus juiciosas elaboraciones y enriquecedores análisis. Su obra deja las enseñanzas propias de un genuino intelectual orgánico, distante de la impostura y del espectáculo que, de manera preocupante, se han venido abriendo paso en el presente. Víctor Manuel fue, además, un promotor de iniciativas de rebeldía dentro y fuera de la Universidad. Entre otras, aportó por décadas a la conducción intelectual y política del Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativo (ILSA); en primera su rectoría, se puso en marcha el Seminario Internacional Marx Vive, que se llevó a cabo en nueve ocasiones en un lapso de veinte años, con el concurso intelectuales y académicos de izquierda colombianos, nuestroamericanos y europeos y una muy amplia participación de jóvenes e integrantes de organizaciones sociales y populares. En tiempos de hegemonía neoliberal, el Seminario estimuló la crítica al capitalismo y la exploración de visiones alternativas de sociedad, que alimentaron las resistencias y las luchas. Víctor Manuel fue partícipe de procesos de formación política en numerosas organizaciones juveniles del campo de la izquierda. Asimismo, se erigió en pilar de la *Revista Izquierda*, uno de los pocos espacios actuales del pensamiento crítico en nuestro medio.



Para destacar igualmente está la incansable labor desarrollada para contribuir a los procesos de paz en Colombia. Muy conocida fue su participación en la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas; también su compromiso y dedicación con los diálogos de La Habana, a los que le dedicó largas jornadas de trabajo junto con otros intelectuales y las delegaciones negociadoras de las partes negociadoras, los representantes del gobierno de Juan Manuel Santos y de la extinta guerrilla de la FARC-EP. Su profundo conocimiento de la violencia y el conflicto social armado y, en general, de la realidad colombiana, quedaron vertidos en los diferentes puntos del Acuerdo de Paz de 2016. Entre otros, Víctor Manuel fue el real y verdadero inspirador de la solución de justicia que allí se encontró en la llamada jurisdicción especial para la paz. El maltrecho proceso de implementación de los acuerdos de 2016 le generó gran preocupación y cierto desencanto, sin que dejara de considerar la necesidad de una solución política a la cuestión de la violencia y la confrontación armada en nuestro país.

Víctor Manuel dejó el legado de la coherencia. Sus trabajos y elaboraciones los acompañó de la acción política. Sin estar adscrito a una organización política determinada, fue un militante de las causas sociales y populares; siempre estuvo del lado correcto de la historia, sin tibiezas ni elucubraciones para justificar lo injustificable; lo suyo estuvo del lado de los humildes y desposeídos. Quienes lo conocimos de cerca, compartimos sus preocupaciones por las necesarias transformaciones sustantivas del orden social vigente, más allá de los pantanosos terrenos del reformismo cuando este se convierte en fin último; asimismo, sus miradas sobre las preocupantes tendencias en los Estados Unidos y, en general, del capitalismo a escala planetaria, particularmente aquellas expresadas en los proyectos políticos de ultraderecha y el advenimiento de proyectos políticos fascistas. Siempre nos llamó la atención su insistencia en el éxodo, en la búsqueda de las fugas, de las salidas para las clases subalternas. Lo cual es propio del subversivo y revolucionario, del eterno joven que fue. Hizo suya la idea de que no se trata de contemplar el mundo, sino de transformarlo. Tuvo la convicción de que para ello también son necesarios la pasión y el deseo.

En tiempos en los que se ha hecho muy difícil tener verdaderos amigos, no es nada fácil contar con el gran amigo que fue Víctor Manuel. Hemos vivido cambios culturales por cuenta de los cuales el individualismo, el egoísmo, la competencia y la meritocracia han regado una espesa niebla sobre la posibilidad de la amistad genuina. Quienes lo conocimos, podemos proclamar que tuvimos la oportunidad de vivir y sentir un hombre amoroso, leal, incondicional, sincero, sencillo y solidario. Siempre encontramos en él la voz de aliento, la preocupación compartida, la recomendación respetuosa, el consejo paternal, incluso la gestión para ayudar a resolver problemas cotidianos. Vivir la vida fue también para Víctor Manuel, vivir para sus amigos.

Para la *Revista Izquierda*, la partida de Víctor Manuel deja un vacío irreparable. Honrar su memoria representa, para nosotros, la decisión de persistir en nuestro proyecto político y cultural de alentar y juntar la rebeldía.

¡Gracias infinitas, una vez más, Víctor Manuel, por lo vivido y por todo lo que nos dejaste!

# Elecciones presidenciales en Colombia: extrema derecha o neofascismo

🕒 junio 15, 2026

📖 128



**Sergio De Zubiría Samper**

Profesor Titular Doctorado en Bioética  
Universidad El Bosque

Presidente Fundación Walter Benjamin para la Investigación Social  
Colombia

Los resultados electorales de la primera vuelta presidencial en Colombia para el período 2026-2030 han exigido una respuesta reflexiva, pronta y exigente al pensamiento crítico. El letargo triunfalista de ciertos sectores del progresismo y la confirmación de las encuestas como herramientas sesgadas y falibles, obligan a mitigar la infodemia rememorando nuestra tradición de análisis del momento político.

Cinco claves subrayan Lenin y Gramsci en un análisis de situaciones políticas: (a) Las relaciones de fuerzas internacionales y el sistema-mundo imperialista de las relaciones de poder; (b) La relación de las fuerzas políticas nacionales, valorando su grado de homogeneidad, autoconciencia y organización de clases y grupos sociales, para acercarse al estado de las disputas por la hegemonía; (c) El carácter del Estado y del gobierno; (d) El grado de organización y de unidad del movimiento popular; (e) El estado de ánimo de las masas populares y su disposición a luchas por objetivos inmediatos y a largo plazo.

La dimensión internacional ha sido trabajada por Carolina Jiménez en su texto *Los autoritarismos americanos cierran filas con la derecha colombiana*, subrayando la articulación del núcleo duro de los proyectos autoritarios y reaccionarios en el continente americano con la expansión de un ideario securitista, militarista, disciplinamiento social y fiscal, defensa a ultranza del empresariado. El profesor Francisco Toloza postula la tesis de la consolidación de un *Plan Condor 2.0* del imperialismo norteamericano para Colombia. La problemática de la construcción de hegemonía desde las derechas ha sido analizada desde perspectivas bastante creativas en artículos de Omar Rincón, Lucas Ospina, Giovanni Libreros y Arturo Escobar. Para Rincón a “don Petro, el provocador moral y estético de Colombia, le salió uno más provocador, ignominioso y desesperante. Uno que también atrae a los medios, periodistas, clase medias arribistas, evangélicos, *new moneys* y agrede con demandas judiciales a quien ose descreer del éxito capitalista” (...), e introduce la imaginativa metáfora del “yopitalismo”, como la consolidación de una especie de capitalismo “yoico” en que ambos candidatos no se diferencian; para el investigador, las clases medias, ya sea por su abandono por el actual gobierno o su arribismo, son presas fáciles del discurso de extrema derecha, a través de un candidato “sin ideas ni verosimilitud política” diseñado con un 40 % de Milei, 30 % de Bukele, 20 % de Trump y 10 % de Bolsonaro.

El columnista y artista Lucas Ospina indaga cómo una empresa electoral “hackea” tu cerebro y cómo, en otras latitudes, se logra elegir un “fascista de verdad” invirtiendo la verdad y la mentira, cultivando actitudes transgresoras a través de una máquina de redes digitales muy bien aceiteada financieramente. No se trata de una excepción colombiana, sino de una empresa en cadena que lleva una década recorriendo el hemisferio con el “mismo manual de transgresión oral y digital, el mismo francotirador de datos, el mismo enemigo interno construido para unificar el descontento, la misma masculinidad. Colombia es la siguiente estación -y no la última” (...). Según el investigador Giovanni Libreros, el uso intensivo de la IA manifiesta una “nueva fase” de la guerra cultural y de la manipulación intensiva de los sentimientos como una especie de “infraestructura política”.



<https://www.tercerainformacion.es/wp-content/uploads/2024/11/antorchar-bandera-e1732454052842.jpeg>

Arturo Escobar profundiza en la función de la dimensión “patriarcal-mediática” del votante de extrema derecha, recordando cómo el patriarcado es la forma de jerarquía y dominación más antigua de la humanidad al establecer una cosmovisión que privilegia el control, el poder, la supresión de las diferencias, culminando siempre en la violencia y la guerra. Esta narrativa “asesina” es “reproducida *ad infinitum* por los políticos de derecha que predicán la guerra y el odio contra todo lo diferente proyectando una imagen del hombre fuerte que llega a reestablecer las jerarquías y a mantener el orden establecido a cualquier costo”.

Las anteriores reflexiones comparten algunas tesis relevantes para aproximarnos a valoraciones de la primera vuelta electoral. Destacamos la siguientes: (a) Las relaciones de las fuerzas internacionales condicionan ciertas tendencias y el papel del imperialismo norteamericano y la internacional reaccionaria desempeñan un papel sustancial; (b) En América Latina y el Caribe, en los últimos años, la extrema derecha ha aumentado su caudal electoral y ganado terreno en el “sentido común” de nuestras sociedades; (c) La problemática de la construcción de hegemonía por parte de las derechas ha sido analizada desde perspectivas diversas y creativas, tales como el papel de las clases medias, el uso de las redes sociales y los dispositivos digitales, la exacerbación de las dinámicas capitalistas, la manipulación del odio y el miedo, la violencia digital y la instrumentalización de los sentimientos, la guerra contra la diversidad, el ideario securitario, la mistificación de la guerra y de la fuerza, la matriz patriarcal, entre otras.

Tendremos que investigar la actual configuración del bloque de poder contrainsurgente y los reajustes de las clases dominantes, como también la mediación de los grupos oligopólicos en el poder político. También explorar la situación real de la movilización social, sus organizaciones, nivel de unidad y su disposición a luchar por objetivos inmediatos y a largo plazo.

### **Cinco claves subrayan Lenin y Gramsci en un análisis de situaciones políticas:**

- (a) Las relaciones de fuerzas internacionales y el sistema-mundo imperialista de las relaciones de poder;**
- (b) La relación de las fuerzas políticas nacionales, valorando su grado de homogeneidad, autoconciencia y organización de clases y grupos sociales, para acercarse al estado de las disputas por la hegemonía;**
- (c) El carácter del Estado y del gobierno;**
- (d) El grado de organización y de unidad del movimiento popular;**
- (e) El estado de ánimo de las masas populares y su disposición a luchas por objetivos inmediatos y a largo plazo.**

El presente escrito se limita a contribuir a un debate estratégico que enfrenta la izquierda planetaria y no limitado a los guarismos electorales en Colombia: ¿Se caracteriza el actual período por un avance de la “extrema derecha” o del “neofascismo” y qué tipo de respuesta debemos preparar para enfrentar esta situación política? En el contexto colombiano la caracterización del fenómeno *Firmes por la patria* y *Patria milagro* conforma un desafío central porque de esto dependen las acciones políticas, educativas, comunicativas y culturales para enfrentarlo. Dividimos el artículo en dos partes. La primera enfrenta las dificultades y límites para una caracterización del proceso electoral “Firmes por la patria”. La segunda indaga algunas orientaciones para confrontar la construcción de una hegemonía antifascista.

## ¿Extrema derecha o neofascismo?

El candidato y el electorado de “Firmes por la Patria”, antes de la primera vuelta presidencial, fueron caracterizados mediante un conjunto de lugares comunes que hoy resultan problemáticos. Con relación al candidato, predominó la reiteración de que era un “outsider” o un “showman”, y de que sería más fácil derrotarlo electoralmente que a la otra candidata de la “derecha civilista”. Por su parte, sus huestes electorales fueron presentadas como una simple vertiente de la “nueva derecha” o de la “extrema derecha”. A ello se sumó la idea de que el uso del término “fascismo” podría producir “miedo” y “pánico” en la población colombiana.

La *Revista Cambio*, en una columna publicada el 4 de junio, mantiene, una vez decantados los resultados de la primera vuelta, la noción del ascenso de la “nueva derecha” en Colombia. La caracteriza como una “amalgama de corrientes conservadoras, libertarias y nacionalistas que, al rechazar las castas políticas y los partidos tradicionales, desafía las estructuras de poder institucional y la ineficacia del Estado, al tiempo que busca construir nuevos paradigmas” (...), respaldada por el universo digital, los memes y el activismo pop.

El lugar común del “outsider” ha sido desmontado por detalladas etnografías y biografías que evidencian la proximidad del candidato al establecimiento y a los círculos del poder legal e ilegal. Asimismo, la supuesta condición de liderazgo “showman” se desvanece al recordar que el presidente de Estados Unidos condujo durante catorce años el programa televisivo *El aprendiz*. El seudo *show* terminó traducándose en la guerra perpetua y el genocidio. La polémica persistirá en torno a la pertinencia de caracterizar a “Firmes por la Patria” como una simple expresión de la “nueva derecha” o de la “extrema derecha”, o bien reconocer en el despliegue de ese movimiento una tendencia hacia la fascistización de la sociedad y de su sentido común.

El mejor consejo es recuperar ciertas tesis del pensamiento crítico para afrontar esa decisión teórica y política, cuyas consecuencias resultan decisivas para una praxis revolucionaria. La primera: con Gramsci y W. Benjamin, nunca atenuar la gravedad de la amenaza y el peligro. La segunda: con T. Adorno y Horkheimer, reiterar que en todo momento histórico siguen vigentes las condiciones sociales que hacen posible el fascismo y que constituye una forma más amenazante de fascismo aquella que se presenta como “democrática” que aquella que se muestra abiertamente contraria a la democracia. La tercera: con Gramsci, promover análisis que reconozcan las distintas fases de todo movimiento fascista: su “fase de ascenso”, su conversión en política de Estado y su metamorfosis en “régimen” e “ideología”.

Recuperar las tesis anteriores exige despabilarse frente a ciertos argumentos negacionistas del fascismo, tales como postular su inexistencia porque no se recurre al terror físico directo de los campos de concentración o a prácticas sistemáticas de exterminio; asumir que la existencia de una “democracia liberal formal” constituye un antídoto suficiente contra el fascismo; o sostener que este fenómeno solo es pertinente para los países europeos y para la década de 1930. El negacionismo confirma la vigencia de la advertencia de T. Snyder: el fascismo triunfa cuando la gente “le teme o no lo reconoce”.

La academia internacional ha reconocido hace una década el avance del fascismo como tendencia planetaria, y la bibliografía sobre la problemática ha crecido vertiginosamente.

También existe una intensa “disputa terminológica” sobre cuál es la categoría más adecuada para comprender el fenómeno; un debate que no se limita a asuntos academicistas, sino que involucra diagnósticos sobre los síntomas de nuestra época y orientaciones para la acción. La educadora argentina Chinthia Wanschelbaum expresa esta angustia de época de manera pedagógica: “Que debatamos si lo que estamos viviendo es o no es fascismo ya habla del contexto político contemporáneo” (Wanschelbaum, 2025). Asimismo, propone una clasificación del debate que busca sistematizar la discusión teórica.

Un primer grupo de intelectuales no duda en llamar “fascismo” a lo que estamos viviendo y sostiene que, aunque el contexto histórico sea diferente, las características y dinámicas de las actuales fuerzas políticas comparten similitudes con el fascismo del siglo XX (A. Badiou, J. Butler, N. Chomsky y M. Lazzarato).

Un segundo grupo considera problemático o insuficiente el término “fascismo” para captar las complejidades del fenómeno político actual y propone categorías complementarias, como “postfascismo”, o mantiene nociones como “nuevas derechas” o “extrema derecha” (E. Traverso, S. Forti, C. Mudde, Y. Camus, C. Mouffe y W. Brown).

Un tercer grupo analiza las novedades de la derecha subrayando sus configuraciones históricas para identificar tanto las características persistentes del fascismo como sus transformaciones y adaptaciones a las circunstancias contemporáneas, priorizando la categoría de “neofascismo” (D. Harvey, D. Feierstein, A. Borón y R. Carbone). Nos situamos próximos a este último grupo interpretativo porque reconoce rasgos de continuidad con el “fascismo histórico”, pero asume el desafío de indagar también sus características particulares y las rupturas respecto de ese tipo de fascismo, evitando las “homologías” compulsivas.

Postular que toda la masa de votantes de “Firmes por la Patria” es fascista o neofascista sería incorrecto desde el punto de vista metodológico, social, político y cultural; tampoco implica que todos los votantes de derecha sean fascistas. Todo movimiento social real es heterogéneo y diverso, pues en su interior coexisten perspectivas de vida y de sociedad en disputa. También en los grupos progresistas y de izquierda germinan posiciones fascistas, como lo constata M. Foucault en su texto *Una introducción a la vida no fascista*, al aludir a los “burócratas de la revolución” y los “funcionarios de la Verdad”.

Sin embargo, desconocer que en el núcleo dirigente de ese movimiento existen perspectivas fascistas y neofascistas consolidadas sería una ingenuidad histórica y política. Ya existe una “internacional” de la extrema derecha (México, 2024), denominada Acción Conservadora, nombre que busca edulcorar el fascismo. Hasta que los fenómenos amenazantes e inquietantes no son nombrados, en cierto sentido no existen o no revelan plenamente el peligro que representan.

Empiezan a aparecer investigaciones periodísticas en *La Silla Vacía* y otros medios sobre el “círculo de poder” del candidato, las cuales muestran la proximidad de algunos de sus integrantes a propuestas autoritarias y fascistas. Su programa de gobierno amenaza, desde el primer día, con la utilización de “estados de excepción” para imponer decretos y proyectos de ley sin deliberación ni control por parte de los demás poderes públicos; su visión carcelaria de la seguridad pretende imponerse por la “razón o la fuerza”, y se alinea con el denominado “Escudo de las Américas” de Trump para expandir el militarismo en todo el continente.

Cabe recordar que entre las elecciones del 5 de marzo de 1933 en la Alemania nazi y la expedición de la Ley Habilitante, que suspendió las libertades democráticas, transcurrieron apenas dieciocho días. Su artículo primero afirmaba: “El gobierno del Reich puede hacer leyes sin pasar por el Reichstag”.

Asistimos, posiblemente, en Colombia de forma embrionaria a lo que algunos estudiosos califican como “fascismo democrático”, entre ellos C. Amlinger, O. Nachtwey y R. Griffin. Algunos de sus rasgos, siempre adaptados y resignificados a las particularidades nacionales son: (a) La reconfiguración de un “núcleo mítico” ligado al imaginario del renacimiento de nación en forma de ultranacionalismo populista, en ciertos casos como “nativismo”; una especie de “Patria milagro”; (b) Un comportamiento político marcado por la preocupación obsesiva por el declive, la humillación y la victimización de las poblaciones, que debe ser compensada mediante la unidad, la energía y la pureza, pero, sobre todo, mediante la violencia dirigida contra los adversarios políticos y las minorías étnicas, sexuales y culturales. Esa violencia transgresora reconcilia a sus artífices consigo mismos; permanecen constantemente obsesionados con la existencia de enemigos; (c) Invocan constantemente la verdadera democracia y la defensa firme de las instituciones, acusando a todos los otros de antidemocráticos, pero pueden usar en cualquier momento la fuerza y la violencia para -supuestamente- defender ese eslogan de la democracia; basta evocar al pensador reaccionario C. Schmitt, quien considera que la democracia no debe confundirse con el sufragio universal o el debate parlamentario, sino con la absoluta identidad entre gobernantes y gobernados; (d) Su objetivo neofascista no es la creación de un “Estado totalitario” sino la restauración de una sociedad jerárquica neoautoritaria, en la que las clases, razas y sexos ocupen el lugar que “deben tener”.

**Cultivando su autonomía crítica, los movimientos sociales subrayan tres causalidades relevantes del ascenso del fascismo y las acciones que deben corregirse. La primera es que no se trata únicamente de la capacidad de movilización de la derecha, sino que también deben considerarse las limitaciones de la alternativa. La segunda es que los gobiernos alternativos han creado condiciones que favorecen el retorno de las fuerzas reaccionarias. La tercera es que la confrontación con el fascismo no se libra mediante discursos retóricos, sino transformando aquellas políticas públicas de los gobiernos progresistas que generan “frustración social”. Estas orientaciones deben ser tenidas en cuenta de manera permanente en la lucha antifascista.**



<https://www.eluniversal.com.co/resizer/v2/abelardo-de-la-espriella-4S5E2Q7IXFBWHFGG6RRCDDASOE.jpeg?auth=848e36f33344f935c374063aeab066c74368760b5111fe512134021fc56c902f&smart=true&width=1200&height=800&quality=70>

La caracterización de “Firmes por la patria” en su núcleo central como extrema derecha o neofascismo tiene consecuencias para la táctica y la estrategia de la acción política en su conjunto. También es un fenómeno heterogéneo y en desarrollo, pero tampoco es simplemente una variante estridente de la “derecha convencional”. No es lo mismo confrontar la extrema derecha que el neofascismo, como también es relevante valorar su arraigo social de masas o su condición coyuntural electoral.

## La respuesta y la lucha antifascista

Más allá de la coyuntura electoral colombiana, el reconocimiento del avance del neofascismo en el sentido común de las sociedades contemporáneas implica no subestimar la amenaza. La respuesta en nuestro continente, desplegada por diversos movimientos sociales, ha consistido en prepararse para comprender y combatir sus nuevas expresiones; una región que cuenta con largas y profundas experiencias de lucha contra el imperialismo y el fascismo.

La Conferencia Internacional Antifascista (abril de 2026), reunida en Porto Alegre, ha develado conclusiones que conviene tener en cuenta: (a) el auge de la extrema derecha no puede explicarse únicamente por su capacidad de movilización, sino también por las limitaciones y decisiones de los gobiernos que se presentan como su alternativa; (b) el ascenso de la ultraderecha no solo obedece a un cambio ideológico, sino también a la frustración que emerge cuando gobiernos elegidos con apoyo popular comienzan a gobernar en contra de las clases trabajadoras y populares; gobiernos que surgieron como alternativa terminaron abriendo espacios para el retorno agresivo de fuerzas reaccionarias; y (c) el avance de la extrema derecha no se frenará con retórica, sino mediante una ruptura nítida con aquellas políticas que generan frustración social.

Cultivando su autonomía crítica, los movimientos sociales subrayan tres causalidades relevantes del ascenso del fascismo y las acciones que deben corregirse. La primera es que no se trata únicamente de la capacidad de movilización de la derecha, sino que también deben considerarse las limitaciones de la alternativa. La segunda es que los gobiernos alternativos han creado condiciones que favorecen el retorno de las fuerzas reaccionarias. La tercera es que la confrontación con el fascismo no se libra mediante discursos retóricos, sino transformando aquellas políticas públicas de los gobiernos progresistas que generan “frustración social”. Estas orientaciones deben ser tenidas en cuenta de manera permanente en la lucha antifascista.

**La confrontación antifascista siempre estará mediada por las dimensión moral, educativa y cultural de las formas de vida cotidiana y no puede limitarse a los ámbitos estatal y gubernamental. Recuperar las categorías gramscianas de “batalla cultural” y “lógicas de construcción de hegemonía”, forjadas al calor de las luchas de los oprimidos contra el fascismo italiano, seguirá siendo fundamental. Se trata de reconocer las huellas ínfimas del fascismo, ya instaladas o en proceso de instalarse en los cuerpos, para poder construir un “arte de vivir contrario a todas las formas del fascismo” (M. Foucault).**

Los desafíos actuales son inmensos porque enfrentamos el momento político con incertidumbres y falencias. No podemos enumerarlos todos, pero existen algunos que consideramos relevantes. Tendremos que seguir explorando colectivamente estos retos.

El primero consiste en concentrar esfuerzos en el estudio del fascismo histórico a escala internacional, latinoamericana y nacional, con el propósito de develar las estrategias y dispositivos de los fascismos contemporáneos. Todo ello, siempre en clave de las posibles luchas y resistencias de las organizaciones y los pueblos de América Latina y el Caribe. La situación actual de las fuerzas sociales populares para la confrontación y la resistencia frente a una fase reaccionaria es desigual e incierta en nuestro continente. Ningún movimiento social puede confrontar aquello que no comprende ni ha logrado caracterizar; pero tampoco, como afirmamos desde nuestra tradición revolucionaria, puede hacerlo sin valorar si existe un estado organizativo y de ánimo capaz de sostener luchas inmediatas y de largo plazo. Las luchas contrahegemónicas antifascistas comienzan a instaurarse como una tarea estratégica. La gran interrogante en nuestro país es cuál es la situación de los movimientos sociales después del período del gobierno progresista.

El segundo es aprender de las luchas de los militantes antifascistas latinoamericanos, como lo han sistematizado M. Bray y A. Toscano en Europa y Estados Unidos, en sus textos *Manual Antifascista* y *Fascismo tardío*. De las diversas lecciones que sistematizan estos pensadores, dos son asombrosas por su contundencia. La primera, los militantes antifascistas no están de acuerdo con pedirle al Estado que prohíba las formas “extremas” de política porque esas legislaciones terminan en general afectando a las izquierdas y no a la derecha; defienden categóricamente un antifascismo autonomista y de acción directa (Bray). La segunda, aquellos que no están dispuestos a hablar de anticapitalismo deberían también callarse sobre el antifascismo (Toscano).



<https://www.nodal.am/wp-content/uploads/2023/02/Neofascismos-y-ultraderechas-Nota.png>

El tercero es que la confrontación antifascista siempre estará mediada por la dimensión moral, educativa y cultural de las formas de vida cotidiana y no puede limitarse a los ámbitos estatal y gubernamental. Recuperar las categorías gramscianas de “batalla cultural” y “lógicas de construcción de hegemonía”, forjadas al calor de las luchas de los oprimidos contra el fascismo italiano, seguirá siendo fundamental. Se trata de reconocer las huellas ínfimas del fascismo, ya instaladas o en proceso de instalarse en los cuerpos, para poder construir un “arte de vivir contrario a todas las formas del fascismo” (M. Foucault). A sesenta años de la publicación de *Dialéctica negativa* (1966), debe resonar con fuerza la sentencia de T. Adorno: “Hitler ha impuesto a los hombres un nuevo imperativo categórico para su actual estado de esclavitud: el de orientar su pensamiento y acción de modo que Auschwitz no se repita, que no vuelva a ocurrir nada semejante” (Adorno, 1975, p. 365).

Cuarto, contribuir a consolidar una Internacional Antifascista de Nuestra América, articulada con otros esfuerzos planetarios, que oriente su acción política a la confrontación del capitalismo, el imperialismo y el neofascismo. Estos constituyen los rostros contemporáneos de la dominación, la expoliación y la explotación de los pueblos del mundo. Como lo plantea la Conferencia Antifascista de Porto Alegre, solo priorizando la lucha en las calles podrá garantizarse la soberanía real de los pueblos; nunca como hoy la lucha contra el imperialismo y el fascismo ha sido tan actual y necesaria.

# Referencias bibliográficas

Adorno, T. (1984). *Dialéctica Negativa*. Madrid: Taurus.

Amlinger, C., y Nachwey, O. (2026). Asistimos al ascenso del fascismo democrático. *Revista Jacobin*.

Bray, M. (2023). *Manual Antifascista*. México: Capitán Swing.

Escobar, A. (2026, 6 de junio). Elecciones en Colombia: “Hijo de tigre sale pintado”. *Revista Raya*. <https://revistaraya.com/elecciones-en-colombia-hijo-de-tigre-sale-pintado.html>

Gramsci, A. (1979). *Sobre el fascismo*. México: Era.

Jiménez Martín, C. (2026, 4 de junio). Los autoritarismos americanos cierran filas con la derecha colombiana. *Revista Raya*. <https://revistaraya.com/carolina-jimenez/1666-los-autoritarismos-americanos-cierran-filas-con-la-derecha-colombiana.html>

Libreros, G. (2026, 1 de julio). Del espectáculo electoral a la guerra cultural. *Rebelión*. <https://rebellion.org/del-espectaculo-electoral-a-la-guerra-cultural/>

Ospina, L. (2026, 29 de mayo). El pequeño Abelardo te está mirando (o cómo la empresa electoral de La Espriella ‘hackea’ tu cerebro). *La Silla Vacía*. <https://www.lasillavacia.com/opinion/el-pequeno-abelardo-te-esta-mirando-o-como-la-empresa-electoral-de-de-la-espriella-hackea-tu-cerebro/>

Rincón, O. (2026, 2 de junio). El triunfo del yopitalismo. *Revista Anfibia*. <https://www.revistaanfibia.com/el-triunfo-del-yopitalismo/>

Toscano, A. (2025). *Fascismo Tardío*. Madrid: Akal.

Wanschelbaum, C. (2025). *El proyecto político-pedagógico del neofascismo*. Calas.

# Ganar el gobierno, perder la dirección. Repolarización sin hegemonía en Colombia

junio 15, 2026

128



**Fabricio Muñoz**

Investigador y analista de la Corporación CRISÁLIDA

*La real comprensión crítica de sí mismo ocurre a través de una lucha de hegemonías políticas,  
de direcciones contrastantes.*

Antonio Gramsci

La primera vuelta presidencial de 2026 ha sido interpretada como una nueva expresión de la creciente polarización política colombiana. Sin embargo, cuando la atención se desplaza de los resultados inmediatos hacia las relaciones de fuerza que estos permiten observar, emerge un problema distinto. La coyuntura que revela no es únicamente la existencia de dos bloques enfrentados, sino la dificultad de ambos para establecerse en una dirección nacional estable. Detrás de la disputa electoral asoma una crisis más profunda ligada al debilitamiento de antiguos consensos, a la fragmentación de las identidades políticas tradicionales y a la ausencia de un proyecto capaz de articular de forma duradera las principales demandas de la sociedad colombiana.



La hipótesis de este trabajo sostiene que las elecciones presidenciales expresan una situación de repolarización sin hegemonía. La formulación dialoga con una preocupación clásica del pensamiento de Antonio Gramsci (1981), pues mientras la polarización remite a la confrontación entre fuerzas políticas consolidadas, la hegemonía supone la capacidad de una de ellas para trascender sus propios límites y presentarse como dirección intelectual, moral y política del conjunto social. Los resultados electorales sugieren una situación inversa, el progresismo acumuló durante los últimos años una importante fuerza institucional, pero no logró convertirla en una dirección política más amplia. Las derechas, por su parte, avanzaron sobre el desgaste del ciclo anterior y reorganizaron importantes sectores sociales alrededor de las demandas de orden y seguridad, aunque tampoco consiguieron convertirse en una nueva voluntad nacional.

Como advertía Nicos Poulantzas (1979), el Estado no constituye un sujeto autónomo situado por encima de la sociedad, sino una condensación de relaciones de fuerza. Esta observación resulta útil para comprender la coyuntura colombiana, ya que la conquista de posiciones institucionales no modifica por sí misma las correlaciones sociales existentes que estructuran la sociedad civil ni garantiza la construcción de nuevas formas de dirección política. En una dirección semejante, las reflexiones de Beatriz Stolowicz (2007) sobre los límites de los progresismos latinoamericanos, los trabajos de Massimo Modonesi (2010) acerca de los procesos de subjetivación política y las investigaciones recientes sobre neofascismos y disputa cultural en América Latina permiten advertir que la crisis actual no puede reducirse a una competencia electoral entre proyectos rivales. Lo que está en juego es la potencia de construir sentidos colectivos, articular demandas dispersas y producir nuevas formas de dirección política.

Desde esta perspectiva, la primera vuelta presidencial interesa menos por sus resultados inmediatos que por los procesos históricos que contribuye a iluminar. El análisis se concentrará en cuatro fenómenos estrechamente vinculados. Los límites de la acumulación institucional progresista como estrategia de construcción hegemónica; el agotamiento del ciclo político organizado alrededor de la paz y su desplazamiento por la seguridad; la reorganización de las derechas en el marco de una crisis más amplia de dirección política, y, finalmente, las implicaciones estratégicas que esta repolarización sin hegemonía plantea para la acción política en la Colombia contemporánea.

## **La paradoja progresista. Acumulación institucional y construcción hegemónica**

Las recientes elecciones, tanto las legislativas como las presidenciales, pusieron de manifiesto una paradoja que atraviesa buena parte del ciclo político abierto en 2022. El progresismo llega a esta coyuntura después de conquistar el gobierno nacional, ampliar de manera significativa su representación institucional e impulsar importantes reformas, aunque sin construir una ventaja hegemónica equivalente. Más que una derrota o una victoria electoral, los resultados permiten observar los límites de una estrategia que logró ocupar posiciones dentro del Estado sin transformar en la misma medida los equilibrios de poder presentes en la sociedad.

La relevancia de esta cuestión radica en que la coyuntura no expresa el agotamiento del progresismo. Una fuerza capaz de movilizar millones de votos y disputar la presidencia conserva un alcance político considerable, aunque tampoco ha logrado constituirse en una nueva mayoría histórica. Entre ambas situaciones emerge el problema central que revela el escenario electoral y que permite comprender buena parte de las tensiones del momento actual.

**La primera vuelta presidencial interesa menos por sus resultados inmediatos que por los procesos históricos que contribuye a iluminar. El análisis se concentrará en cuatro fenómenos estrechamente vinculados. Los límites de la acumulación institucional progresista como estrategia de construcción hegemónica; el agotamiento del ciclo político organizado alrededor de la paz y su desplazamiento por la seguridad; la reorganización de las derechas en el marco de una crisis más amplia de dirección política, y, finalmente, las implicaciones estratégicas que esta repolarización sin hegemonía plantea para la acción política en la Colombia contemporánea.**

situaciones emerge el problema central que revela el escenario electoral y que permite comprender buena parte de las tensiones del momento actual.

Gramsci (1981) señalaba que la hegemonía supone algo más que la administración del gobierno, pues implica la aptitud de producir consensos duraderos, organizar culturalmente a la sociedad y construir una dirección intelectual y moral capaz de trascender las coyunturas inmediatas. Desde esta perspectiva, una de las dificultades del progresismo colombiano consistió en asumir, de forma explícita o implícita, que la conquista del gobierno podía acelerar procesos que responden a una temporalidad más extensa. Como advertía Poulantzas (1979), el Estado no constituye un instrumento que cambia de orientación según quienes ocupen sus instituciones, sino una condensación de relaciones de fuerza construidas históricamente y sometidas a disputa permanente.

La experiencia colombiana parece mostrar con claridad esa tensión. Durante estos años se produjo una importante acumulación institucional, pero parte de la energía social que hizo posible ese avance terminó desplazándose hacia la gestión estatal. Lo que había surgido como una dinámica de movilización social tendió a transformarse en una dinámica de administración gubernamental, mientras una porción significativa de la potencia transformadora que acompañó el ascenso progresista fue absorbida por las exigencias de la institucionalidad. Como resultado, amplios sectores populares dejaron de actuar como sujetos activos de transformación y pasaron a ocupar el lugar de apoyos externos de procesos conducidos desde el Estado. Lo que aquí denominamos privatización de la movilización social no remite a la desaparición de la acción colectiva, sino a la separación creciente entre las dinámicas institucionales del cambio y las capacidades autónomas de organización popular.

**Quizá la principal enseñanza de esta coyuntura consista en obligar a replantear las preguntas que orientan la acción política. Durante demasiado tiempo la discusión giró alrededor de la conquista del gobierno, las reformas institucionales o las estrategias electorales. Sin desconocer la importancia de estas dimensiones, los resultados electorales sugieren que el problema decisivo se encuentra en otro lugar. La cuestión central vuelve a ser la construcción de hegemonía entendida como la capacidad de articular organización social, producción cultural, conflicto político y dirección colectiva alrededor de un proyecto capaz de trascender los límites de sus propias bases inmediatas.**



<https://cdn.colombia.com/sdi/2022/10/10/se-registro-una-nueva-masacren-el-cauca-tres-personas-fueron-asesinadas-por-hombres-armados-1073700.jpg>

Esta situación se expresó con especial claridad en el terreno de las reformas. Aunque varias de ellas registraron avances importantes, fueron concebidas y presentadas ante todo como iniciativas gubernamentales, jurídicas o administrativas, mientras su dimensión política quedó subordinada a las negociaciones parlamentarias y a los procedimientos institucionales. El problema no radica solo en las limitaciones del gobierno, sino también en las dificultades de un movimiento social que, salvo excepciones puntuales, no logró convertir las reformas en escenarios de organización, deliberación y ampliación de capacidades colectivas. Con frecuencia, la reforma apareció más como política pública que como proceso de construcción de poder social.

Social.

Beatriz Stolowicz (2007) ha insistido en que los cambios gubernamentales no deben confundirse con transformaciones profundas de las relaciones de poder, y la coyuntura abierta tras la primera vuelta parece confirmar esa advertencia. La acumulación institucional avanzó con mayor rapidez que la construcción hegemónica, mientras la ampliación de la representación política no estuvo acompañada por un fortalecimiento equivalente de la organización social. Es en esa distancia entre gobierno y hegemonía donde comienza a configurarse la repolarización sin hegemonía que caracteriza el momento colombiano actual.

## Del horizonte de la paz al paradigma de la seguridad

Las recientes elecciones permitieron observar una transformación que venía gestándose desde tiempo atrás y cuyas implicaciones exceden ampliamente la coyuntura electoral. Durante más de una década, desde el inicio de los diálogos entre el gobierno nacional y las FARC, la paz ocupó el lugar de principal horizonte de la política colombiana. No se trataba solo de una negociación o de una política pública específica, pues funcionaba como un principio de inteligibilidad de la realidad nacional a partir del cual se interpretaban los conflictos del país, se evaluaban los proyectos políticos y se discutían las posibilidades de transformación social. Incluso quienes se opusieron a los acuerdos debieron hacerlo dentro de un campo político estructurado por la cuestión de la paz.

La coyuntura abierta en este escenario sugiere que ese ciclo comienza a mostrar signos de agotamiento. No porque las demandas de paz hayan desaparecido ni porque las causas históricas de la violencia hayan sido resueltas, sino porque la paz parece haber perdido parte de su facultad para ordenar el debate público nacional. Allí donde durante años la pregunta central estuvo asociada a las condiciones necesarias para superar la guerra, comienza a imponerse otra preocupación ligada al orden, el control territorial y la seguridad. Lo significativo no reside en el cambio de tema, sino en la modificación del principio que orienta la interpretación de la crisis colombiana.

Sería un error atribuir este proceso de forma exclusiva a la ofensiva ideológica de las derechas. La seguridad no desplazó a la paz porque existiera una narrativa conservadora más eficaz, ya que el fenómeno hunde sus raíces en las contradicciones del propio ciclo progresista. La Paz Total<sup>1</sup> surgió como un intento de prolongar y profundizar el imaginario político abierto por La Habana mediante negociaciones simultáneas, reformas territoriales y estrategias de integración social. Sin embargo, su desarrollo estuvo atravesado por una tensión persistente entre la promesa de una transformación política del conflicto y la permanencia de una arquitectura estatal organizada históricamente bajo lógicas contrainsurgentes.

Esa contradicción se expresó de múltiples maneras. Mientras el discurso gubernamental insistía en la necesidad de construir soluciones negociadas y enfrentar las causas estructurales de la violencia, la acción estatal continuó recurriendo a dispositivos militares, operaciones ofensivas y mecanismos de control territorial inscritos en una larga tradición de administración armada del conflicto. La Operación Perseo<sup>2</sup> constituye quizá la expresión más visible de esta tendencia. Presentada como una intervención integral destinada a recuperar la gobernabilidad en regiones estratégicas, terminó reproduciendo una lógica de guerra de movimientos basada en ocupaciones militares, despliegues ofensivos y control coercitivo del territorio. Más allá de sus resultados, estas intervenciones reforzaron la centralidad de la seguridad como criterio privilegiado de intervención estatal.

Es en este contexto en el que adquiere sentido la noción de progresismo contrainsurgente<sup>3</sup>. No porque exista una identidad entre el actual gobierno y los proyectos políticos que durante décadas condujeron la guerra, ni porque la Paz Total pueda reducirse a una continuidad de las doctrinas de seguridad precedentes. El concepto permite señalar un problema más específico. La dificultad del progresismo para construir una alternativa estable a las formas históricas mediante las cuales el Estado colombiano ha gestionado el conflicto. La promesa de una transición hacia una lógica de construcción hegemónica terminó coexistiendo con dispositivos que seguían interpretando amplios sectores del territorio y de la conflictividad social a través de categorías securitarias y contrainsurgentes.

La consecuencia política de este proceso fue profunda. La paz comenzó a perder potencia para estructurar el sentido común nacional, mientras la seguridad ocupó de forma gradual ese espacio. La persistencia de la guerra, la reconfiguración territorial del conflicto y las limitaciones de la propia Paz Total erosionaron la fuerza articuladora del principio articulador inaugurado por La Habana. La seguridad dejó entonces de ser una política sectorial para convertirse en una categoría capaz de condensar demandas de autoridad, estabilidad, eficacia estatal y protección frente a la incertidumbre.

La importancia de este desplazamiento radica en que modificó el terreno mismo sobre el cual se desarrolla la disputa política contemporánea. Las nuevas derechas no produjeron esta transformación. La encontraron en marcha y supieron interpretarla con mayor eficacia que sus adversarios. La fortaleza que exhiben en la coyuntura actual no puede explicarse únicamente por sus liderazgos o estrategias comunicativas. Debe entenderse también como resultado del agotamiento de un ciclo histórico en el que la paz funcionó como horizonte de la vida política nacional. Cuando ese horizonte comenzó a debilitarse, la seguridad emergió como el nuevo lenguaje privilegiado para interpretar la crisis colombiana. Sobre ese terreno se reorganizan hoy las correlaciones de fuerzas existentes que caracterizan la repolarización sin hegemonía.

hoy las correlaciones de fuerzas existentes que caracterizan la repolarización sin hegemonía.



<https://media.elcomercio.com/wp-content/uploads/2022/10/paz-total.jpg>

## Neofascismos y reorganización conservadora

Este episodio electoral permite observar no solo el agotamiento relativo del ciclo político organizado alrededor de la paz, sino también la consolidación de una nueva configuración del campo conservador. Su principal novedad no radica en el retorno de la derecha como actor competitivo, pues esta nunca abandonó el escenario político colombiano. Lo novedoso reside en la forma que adquiere su reorganización en el contexto actual.

Esta transformación hunde sus raíces en la tradición conservadora colombiana y, de manera particular, en la experiencia uribista, de la cual hereda la centralidad de la seguridad, la construcción permanente de enemigos internos y la asociación entre autoridad, nación y orden. Sin embargo, no puede entenderse como una simple continuidad. La reorganización conservadora incorpora elementos que la conectan con fenómenos observables en distintas regiones del mundo y, sobre todo, en América Latina, donde diversas expresiones neoconservadoras combinan demandas de orden con discursos antisistema, liderazgos personalistas, batalla cultural y una movilización constante de afectos asociados al miedo, la incertidumbre y el resentimiento.

En este sentido, resulta más adecuado hablar de una reorganización conservadora con tendencias neofascistas<sup>4</sup> que de una restauración tradicional. No porque exista un fascismo consolidado ni porque las experiencias contemporáneas reproduzcan de manera mecánica las formas históricas del siglo XX, sino porque comparten algunos de sus mecanismos fundamentales. La construcción de amenazas permanentes, la deslegitimación de las mediaciones democráticas, la producción política del miedo y la promesa de restaurar un orden supuestamente perdido constituyen rasgos recurrentes de estas configuraciones políticas.

**La repolarización sin hegemonía no constituye solo un diagnóstico. Constituye también una advertencia estratégica. Mientras ninguna fuerza logre construir una dirección capaz de organizar de manera estable las aspiraciones, temores y expectativas que atraviesan la sociedad colombiana, la disputa política continuará desarrollándose sobre un terreno inestable, abierto y conflictivo. Es allí donde reside el principal desafío del tiempo que comienza.**

La fuerza reciente de esta reorganización conservadora no proviene únicamente de sus liderazgos o de sus estrategias comunicativas. Surge también de su facultad para interpretar una transformación previa del campo político. A medida que la paz perdió centralidad como horizonte organizador y la seguridad ocupó ese lugar, se abrió un espacio susceptible de ser articulado por actores capaces de convertir la demanda de orden en proyecto político. Estas fuerzas no produjeron ese desplazamiento. Lo encontraron en marcha y consiguieron construir una narrativa capaz de darle forma y dirección.

Sin embargo, sería prematuro interpretar este proceso como la consolidación de una nueva hegemonía. El momento político actual pone de manifiesto una situación diferente: por un lado, las derechas lograron convertirse en las principales intérpretes de una crisis de dirección política que permanece abierta; y, por otro, su crecimiento expresa tanto su capacidad de articulación como las dificultades de sus adversarios para construir nuevos horizontes colectivos. Precisamente por ello, su avance constituye uno de los síntomas más visibles de la repolarización sin hegemonía que caracteriza la coyuntura colombiana.

## Más allá de la polarización. La repolarización sin hegemonía

La hipótesis de este trabajo no consiste en afirmar que Colombia atraviesa una simple polarización electoral ni en sostener que una nueva hegemonía conservadora se encuentre en proceso de consolidación. Los resultados electorales permitieron observar algo distinto. El agotamiento simultáneo de dos expectativas que organizaron buena parte del ciclo político reciente. Por un lado, la expectativa progresista según la cual la acumulación institucional conduciría a una nueva dirección nacional. Por otro, la expectativa conservadora que suponía que el desgaste gubernamental bastaría para restaurar un orden político estable.

La coyuntura actual sugiere que ninguna de estas hipótesis logró verificarse plenamente. El progresismo conserva una importante fuerza electoral e institucional, aunque encuentra dificultades para convertir esa fuerza en organización social, producción de consensos y dirección cultural. Las derechas, por su parte, han interpretado con eficacia el desplazamiento de la paz hacia la seguridad y han reorganizado importantes sectores sociales alrededor de la demanda de orden. Sin embargo, su crecimiento tampoco expresa la consolidación de una nueva hegemonía. Este proceso deja entrever una disputa intensa por la dirección política de una sociedad cuyos principios tradicionales de articulación han comenzado a debilitarse.

Esta constatación posee implicaciones que trascienden el calendario electoral. Independientemente de lo que ocurra en la segunda vuelta presidencial, los procesos descritos en estas páginas seguirán formando parte de la realidad política colombiana. La distancia entre gobierno y hegemonía no desaparecerá con una victoria progresista, como tampoco el agotamiento del ciclo de la paz o la reorganización conservadora se resolverán mediante una alternancia en el poder. La primera vuelta debe leerse menos como un acontecimiento cerrado que como una ventana desde la cual observar transformaciones de mayor duración.

Quizá la principal enseñanza de esta coyuntura consista en obligar a replantear las preguntas que orientan la acción política. Durante demasiado tiempo la discusión giró alrededor de la conquista del gobierno, las reformas institucionales o las estrategias electorales. Sin desconocer la importancia de estas dimensiones, los resultados electorales sugieren que el problema decisivo se encuentra en otro lugar. La cuestión central vuelve a ser la construcción de hegemonía entendida como la capacidad de articular organización social, producción cultural, conflicto político y dirección colectiva alrededor de un proyecto capaz de trascender los límites de sus propias bases inmediatas.

Desde esta perspectiva, la repolarización sin hegemonía no constituye solo un diagnóstico. Constituye también una advertencia estratégica. Mientras ninguna fuerza logre construir una dirección capaz de organizar de manera estable las aspiraciones, temores y expectativas que atraviesan la sociedad colombiana, la disputa política continuará desarrollándose sobre un terreno inestable, abierto y conflictivo. Es allí donde reside el principal desafío del tiempo que comienza.

## Referencias bibliográficas

Gramsci, A. (1981). *Cuadernos de la cárcel*. Era.

Modonesi, M. (2010). *Subalternidad, antagonismo y autonomía*. CLACSO.

Poulantzas, N. (1979). *Estado, poder y socialismo*. Siglo XXI Editores.

Stolowicz, B. (2007). *El debate actual. Posliberalismo o anticapitalismo*. CLACSO.

Franco Restrepo, V. L. (2009). *Orden contrainsurgente y dominación*. Siglo del Hombre Editores.

Gómez, R. (2024). *Los neofascismos mediatizados y mid cult como lógica política y cultural del lumpen-capitalismo latinoamericano*. CLACSO.

---

<sup>1</sup> Política impulsada por el gobierno de Gustavo Petro orientada a combinar la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 con procesos de diálogo y negociación con distintos actores armados.

<sup>2</sup> Operación militar desarrollada por el gobierno colombiano en octubre de 2024 para recuperar el control territorial de El Plateado, en el departamento del Cauca, entonces bajo influencia del Estado Mayor Central.

<sup>3</sup> La noción de progresismo contrainsurgente sigue las elaboraciones desarrolladas por Vilma Liliana Franco Restrepo en *Orden contrainsurgente y dominación* (2009), donde analiza la persistencia de dispositivos de control territorial, gestión del conflicto y producción de orden que trascienden los cambios de gobierno y se inscriben en formas históricas de dominación estatal.

<sup>4</sup> El uso de la categoría neofascismo sigue las elaboraciones de Rodolfo Gómez en *Los neofascismos mediatizados y mid cult como lógica política y cultural del lumpen-capitalismo latinoamericano* (2024). El concepto remite a formas contemporáneas de reorganización conservadora que articulan autoritarismo, construcción permanente de enemigos, movilización afectiva y discursos antisistema sin reproducir mecánicamente los fascismos clásicos del siglo XX.

# La internacional reaccionaria y la derecha neopatriotista en Colombia

🕒 junio 15, 2026

📖 128



## Carolina Jiménez Martín

Politóloga

Doctora en Estudios Latinoamericanos

Los resultados electorales del último lustro alertan sobre el crecimiento de fuerzas políticas reaccionarias alrededor del mundo. En Italia, Finlandia, Nueva Zelanda, Suecia, Portugal, República Checa, Croacia, Bélgica y Grecia, coaliciones de extrema derecha constituyen mayorías parlamentarias. En los Estados Unidos, Donald Trump regresó a un segundo mandato en 2025 y, en Latinoamérica, las propuestas neopatriotistas han logrado el control del poder ejecutivo en El Salvador, Argentina, Chile, Costa Rica, Honduras, Panamá, Bolivia y Ecuador.

En medio de las diferencias a las que responden, propias de las formaciones sociogeohistóricas en las que emergen, estas fuerzas comparten algunos idearios comunes, entre los que se destacan:

(...) un marcado nacionalismo, el identitarismo o el nativismo, la recuperación de la soberanía nacional, una crítica profunda al multilateralismo (...) el antiglobalismo, el antiprogresismo, la defensa de los valores conservadores, la defensa de la ley y el orden, la islamofobia, la condena de la inmigración tachada de "invasión", la crítica al multiculturalismo y a las sociedades abiertas, el antiintelectualismo (...) en muchas de las derechas latinoamericanas hay también una alteridad que se rechaza, la representada por las poblaciones indígenas (...) todas estas formaciones se suelen centrar en cuatro temas principales en su discurso y en sus propuestas políticas: inmigración, seguridad, corrupción y política exterior<sup>1</sup>.

Esta suerte de red transnacional reaccionaria, nucleada en torno a las ideas de la extrema derecha, alerta sobre los riesgos que enfrenta la vida democrática. La gramática política de estos gobiernos polariza a la sociedad y siembra confusión en amplias capas sociales; se presentan como antisistema, distantes de la clase política tradicional y como los auténticos defensores de la democracia; además, generan un sentimiento social en el que la alteridad se define desde la lógica amigo-enemigo, azuzando una especie de guerra cultural<sup>2</sup>.

Su estrategia político-electoral se sustenta en las nuevas tecnologías de la posverdad. Su presencia digital es apabullante e invierten ingentes recursos económicos para que el algoritmo cumpla su función disciplinadora. A través de la política de las emociones, moldean el miedo, prometen orden y seguridad y, haciendo uso de la narrativa aspiracional, venden la idea del ascenso social.

Ahora bien, una rápida mirada al balance de la práctica gubernamental de algunos de estos países desmiente el compromiso efectivo de estos gobiernos con el crecimiento económico, la seguridad, el orden, la lucha contra la corrupción y el nacionalismo económico. En el caso específico del gobierno de Trump, vale la pena destacar su mediocre crecimiento económico -que no supera el 1,6 % anual-, explicado, entre otras razones, por el impacto negativo del incremento de los aranceles y el aumento de la deuda pública; el encarecimiento del costo de vida de la población, acompañado de una de las tasas de inflación más altas de los últimos años<sup>3</sup>; una fracasada guerra contra Irán; y una política migratoria violatoria de los derechos humanos, que ya ha cobrado la vida de varias personas. Una de las imágenes más dramáticas se conoció hace algunas semanas, cuando salió a la luz el video en el que el joven colombiano Bryan Rayo Garzón, quien permanecía bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde el 25 de marzo de 2025, atentó contra su vida y posteriormente falleció.

**Los resultados electorales del último lustro alertan sobre el crecimiento de fuerzas políticas reaccionarias alrededor del mundo. En Italia, Finlandia, Nueva Zelanda, Suecia, Portugal, República Checa, Croacia, Bélgica y Grecia, coaliciones de extrema derecha constituyen mayorías parlamentarias. En los Estados Unidos, Donald Trump regresó a un segundo mandato en 2025 y, en Latinoamérica, las propuestas neopatriotistas han logrado el control del poder ejecutivo en El Salvador, Argentina, Chile, Costa Rica, Honduras, Panamá, Bolivia y Ecuador.**



[https://media.licdn.com/dms/image/v2/D4E12AQGuWVgWfqmVxA/article-cover\\_image-shrink\\_720\\_1280/B4EZziV86lHQAI-/0/1773323934062?e=2147483647&v=beta&t=2IlhuhsN6XWioZWOBligeuP22fr6UkGBaPnKUHZ5yew](https://media.licdn.com/dms/image/v2/D4E12AQGuWVgWfqmVxA/article-cover_image-shrink_720_1280/B4EZziV86lHQAI-/0/1773323934062?e=2147483647&v=beta&t=2IlhuhsN6XWioZWOBligeuP22fr6UkGBaPnKUHZ5yew)

En el caso de El Salvador, diferentes organizaciones han denunciado la violación sistemática de los derechos humanos. El presidente Bukele, figura admirada por el candidato De la Espriella, en articulación con el poder legislativo, adoptó un régimen de excepción constitucional que le ha permitido restringir libertades ciudadanas, configurando una suerte de autocracia electoral encarnada en la figura de un presidente supremo.

En Argentina, el escenario es particularmente dramático. Al respecto, tras 28 meses de ajuste económico, los economistas Gambina y Castiglioni señalan que los grandes beneficiarios han sido los grandes capitales vinculados al agronegocio y a los sectores energético y financiero; como correlato, los perdedores han sido las amplias capas populares, debido a "las dificultades para sostener la tendencia a la baja de la inflación, la profundización de una recesión que alimenta el cierre de empresas y el desempleo, junto a la caída del consumo popular"<sup>4</sup>. Aunado a lo anterior, se destacan los casos de corrupción denunciados que involucran a Manuel Adorni (jefe del gabinete) y a Karina Milei (hermana del presidente), el desacato a la ley de financiamiento de las universidades y el incremento de los casos de feminicidio.

En el caso finlandés, país con una larga tradición de políticas socialdemócratas, el gobierno liderado por Petteri Orpo ha significado la implementación de un ajuste fiscal, una reforma laboral orientada a reducir los costos asociados al despido de trabajadores, el incremento de gravámenes sobre la canasta básica y un férreo control migratorio; acciones que contrastan con las políticas impulsadas por su antecesora, Sanna Marin.



<https://globalter.com/wp-content/uploads/2025/01/Musk-1.jpg>

Este bloque de autoritarismos no logra dar una respuesta efectiva a las necesidades de la gente del común. Por el contrario, el panorama es muy sombrío: propone salidas reaccionarias que ponen en cuestión las garantías democráticas conquistadas tras siglos de luchas de las clases trabajadoras en el mundo. De este modo, cierra el régimen político tanto al cumplimiento de derechos ya conquistados como a la incorporación de nuevos derechos. La paradoja social radica en que, bajo estos gobiernos, las luchas sociales quedan atrapadas en problemas que en otros tiempos parecían ya resueltos.

Esta internacional reaccionaria ha sido denunciada incluso desde el corazón mismo del poder mundial. En el reciente Foro de Davos, el primer ministro canadiense señalaba: “El mundo está en medio de una ruptura, no de una transición (...) la ruptura del orden mundial, el fin de la grata ficción y el amanecer de una realidad brutal en la que la geopolítica de las grandes potencias no tiene freno (...) el orden basado en normas se está desvaneciendo. Los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben”.

En el caso específico de América Latina, este bloque de neopatriotistas<sup>5</sup> ha mostrado con claridad su realineamiento con un hegemon en declive. Estados Unidos pretende paliar su crisis y pérdida de liderazgo mundial recuperando espacios de influencia en la región. De ahí su estrategia de consolidar una gran coalición militar en el continente, la cual fue socializada en la Cumbre del Escudo de las Américas, realizada en Miami. A ello se suma la intervención en asuntos electorales mediante promesas formuladas en caso de resultar elegido el candidato de su preferencia. El presidente Trump se ufana de haber contribuido a los logros electorales en Chile del recién posesionado José Antonio Kast y al fortalecimiento en el Congreso argentino de las fuerzas apoyadas por Milei en octubre de 2025.

Sin embargo, lo sorprendente es la forma subordinada en que se acoge este apoyo. En el caso argentino, el respaldo recibido en las pasadas elecciones legislativas ya ha comenzado a pasar factura. Precisamente, durante la primera semana de junio se desarrolló la denominada “Trump Mission”<sup>6</sup>, que hace referencia a la visita de Luke Lindberg, subsecretario de Agricultura para Comercio y Asuntos Exteriores de Estados Unidos, quien negoció asuntos relacionados con la ley de patentes, la desregulación del ingreso de mercancías provenientes del país del norte y nuevas oportunidades de exportación para los agricultores estadounidenses.

Esta forma de intervención electoral ya ha cobrado vigencia en las elecciones colombianas. La candidatura de Abelardo de la Espriella ha recibido el respaldo público del presidente Donald Trump (Estados Unidos) y del secretario de Estado, Marco Rubio.

**En el caso específico de América Latina, este bloque de neopatriotistas ha mostrado con claridad su realineamiento con un hegemon en declive. Estados Unidos pretende paliar su crisis y pérdida de liderazgo mundial recuperando espacios de influencia en la región. De ahí su estrategia de consolidar una gran coalición militar en el continente, la cual fue socializada en la Cumbre del Escudo de las Américas, realizada en Miami. A ello se suma la intervención en asuntos electorales mediante promesas formuladas en caso de resultar elegido el candidato de su preferencia.**

(...) Abelardo tendría un enorme éxito en llevar a Colombia a hacer crecer la economía, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, tomar medidas enérgicas contra el crimen y las drogas y restaurara la ley y el orden” (Donald Trump).

Vamos a ser muy forzados en asegurar que haya una elección libre y justa en Colombia, y hacer todo lo que esté en nuestro poder para asegurarnos de que eso suceda (Marco Rubio).

Mensajes que fueron respondidos en los siguientes términos:

Estoy muy honrado de recibir el apoyo decidido del presidente Donald Trump y su gobierno y sé que, en la era del Tigre, haremos una llave como nunca antes la ha tenido Colombia con Estados Unidos.

De esta manera, Colombia aspira a ingresar a la internacional reaccionaria, con los costos económicos, sociales, políticos y humanitarios ya expresados de manera dramática en Argentina y El Salvador, y que comienzan a evidenciarse en Chile.

Lo anterior ofrece más certezas que incertidumbres sobre lo que representaría el ingreso de Colombia a esta red gubernamental transnacional reaccionaria; de ahí el valor de estas elecciones, no solo en el plano doméstico, sino también en el internacional. Para Nuestra América, se trata de una contención progresista frente a la amenaza de extinción de la vida democrática.



<https://elordenmundial.com/wp-content/uploads/2025/09/blitz-israel-estados-unidos-orden-internacional-1.jpg>

---

<sup>1</sup> Forti, S. (2025). *Extrema derecha 2.0: Cómo combatir la normalización global de las ideas ultraderechistas*. Siglo XXI Editores. p. 94.

<sup>2</sup> En eslogan de la campaña de Abelardo de la Espriella “El milagro de los nunca. Esto somos nosotros: los que nunca hemos robado un peso de plata pública, los que nunca hemos hecho politiquería, los que nunca hemos traicionado al pueblo, los que nunca dejaremos de estar firmes por la patria”.

<sup>3</sup> *The Economist* presenta un breve análisis de lo que han sido los primeros 500 días de la administración de Trump. Véase: <https://www.economist.com/interactive/trump-approval-tracker/economy>

<sup>4</sup> Gambina, J. C., y Castiglioni, L. (s. f.). *28 meses de ajuste y reaccionaria reestructuración* [Publicación de Instagram]. Instagram.  
<https://www.instagram.com/p/DXbwKm0EWnA/>

<sup>5</sup> “El ascenso de las derechas neopatriotas en América Latina no es solo una reacción contestataria al anterior ciclo de gobiernos progresistas enmarcada en el tradicional clivaje izquierda-derecha. En esas nuevas derechas se expresa también el nuevo clivaje normativo entre nacionalismo y cosmopolitismo presente en otras latitudes y, en particular, entre una posición favorable o contraria frente a la globalización y el orden liberal internacional (...) Las nuevas derechas neopatriotas se caracterizan por mostrar un perfil ultranacionalista y soberanista, así como una fuerte retórica antiglobalista. Y más que a los sectores medios y altos, que se sienten más cómodos con la apertura económica y cultural, logran movilizar a quienes se sienten amenazados por la globalización, sea por razones socioeconómicas o por sus implicaciones socioculturales –rechazo a las sociedades abiertas y a la diversidad cultural, étnica o de orientación sexual–, especialmente a clases medias y medias bajas. Recurre a un discurso nacionalista y populista y, en algunos casos, se asocia a actores religiosos que reivindican valores tradicionales y un discurso de «ley y orden» relacionado con la remilitarización de la política (Verdes-Montenegro, 2019). (...) En el ámbito económico, estas derechas tienen una relación ambivalente con el mercado global, como en el caso de Brasil, en el que mantienen el enfoque neoliberal arraigado en las derechas latinoamericanas (Cannon, 2016) coexistiendo con el rechazo, en clave nacionalista, a las instituciones regionales o globales de las que dependen los mercados abiertos”.

<sup>6</sup> <https://www.fas.usda.gov/newsroom/usda-launches-trump-mission-argentina-and-ecuador-expand-market-access-american-farmers>

# Mercenarios colombianos en el mercado capitalista de la muerte

🕒 junio 15, 2026

📖 128



**Renán Vega Cantor**

Investigador independiente

*Necesitamos guerreros que no le hagan asco a ese verbo de cinco letras tan sucio y desagradable: ¡matar!*

David Grossman, Teniente coronel retirado del Ejército de Estados Unidos, y fundador del Killogy Research Group [algo así como Grupo de Investigación en la ciencia de matar], citado en Jeremy Scahill, *Blackwater. El auge del ejército mercenario más poderoso del mundo*, Paidós, Barcelona, 2008, p. 203.

*Estas fábricas de mercenarios colombianos que son exportados como mercancías por el mundo, como emisarios de la muerte, causando desasosiego, terror, miedo y aniquilación de todo "posible enemigo", han conseguido que Colombia se ubique entre los principales países del mundo en exportación de estas mercancías del terror.*

Jairo Arango Gaviria, "Mercenarios colombianos en las guerras del mundo", en [elopinadero.com.co](http://elopinadero.com.co)

## Introducción

El tema de los mercenarios colombianos, regados por el mundo como una peste, se menciona cada cierto tiempo en los medios convencionales de desinformación (prensa, radio, televisión). El asunto reaparece cuando se confirma la muerte o captura de algunos de estos mercenarios en algún país. Luego, el hecho se olvida momentáneamente, deja de ser noticia de primer plano y se disipa en el maremágnum de información que se genera a diario. Cierta tiempo después vuelve a hablarse inevitablemente de los mercenarios colombianos.

Por ejemplo, en agosto de 2025, el tema trascendió cuando se supo que el Ejército de Sudán había derribado un avión, en el que se encontraban unos 40 mercenarios de origen colombiano. En un video, Kamel Idris, primer ministro de Sudán, se dirigió a los colombianos hablando en español. En ese momento afirmó: el “mundo hispanohablante ha brindado a la humanidad obras que van desde el arte de Pablo Picasso, hasta la poesía de Pablo Neruda, la narrativa de García Márquez ...”. Luego añadió, para enfatizar el carácter contradictorio de nuestro país, que en él puede producirse lo más excelso del arte literario junto a las peores formas de criminalidad: “Con esa misma experiencia de creatividad, solidaridad y compromiso con la paz hago un llamado al pueblo colombiano y a todas las comunidades de habla hispana para que se mantengan firmes con nosotros para [...] detener la exportación y envío de mercenarios a nuestra tierra”<sup>1</sup>. Estas palabras provienen del habitante de un país situado en el noreste de África, de Sudán, a una distancia de 11.500 kilómetros de nuestro país, cuyo nombre jamás ha sido escuchado por la mayoría de los colombianos, pero donde mercenarios de este país si van a matar y a destruir sin miramientos de ninguna especie.

En la misma dirección, a comienzos de mayo de 2026 circuló un video en el que aparece el exmilitar colombiano de 24 años de nombre William Andrés Gallego Orozco, quien fue detenido en su condición de mercenario en el frente de Kupiansk, en Ucrania, por el ejército de Rusia. Fue el único sobreviviente de un grupo de 17 mercenarios. En el video aparece rodeado por tropa rusa mientras se escucha la frase: “Bienvenido a Rusia”<sup>2</sup>.

Para ir más allá de hechos coyunturales -ya sea de tal o cual mercenario colombiano que muere o es capturado en algún lugar del mundo- es necesario examinar el asunto en el contexto de la transformación de la guerra por parte del imperialismo y el capitalismo, en donde los mercenarios desempeñan un papel de primer orden. Después, se analiza el caso específico de Colombia, tratando de indagar en sus razones estructurales y, sobre todo, refiriéndose a un aspecto nunca considerado: el de la mentalidad traqueta que se ha impuesto en este país en las últimas décadas.

## El mercado internacional de la muerte y la privatización de la guerra

A la hora de analizar el auge del mercenarismo como un componente central de las guerras del capitalismo actual, debe subrayarse que es un resultado de las transformaciones experimentadas por el propio capitalismo como una máquina de guerra y de muerte.

El capitalismo y el imperialismo han empleados mercenarios desde su mismo origen en la época de acumulación originaria y expansión colonial europea. De esa expansión viene, por ejemplo, el término *cipayo*, para referirse soldados de origen indio que actuaba al servicio de las potencias coloniales, a la cabeza de las cuales se encontraba Gran Bretaña. De ahí proviene el carácter despectivo del vocablo *cipayo*, usado en general para referirse tanto a mercenarios como a los políticos vendepatrias que defienden los intereses de las grandes potencias, los cuales proliferan en Colombia y en Nuestra América.

En el siglo XX, el imperialismo continuó recurriendo a los mercenarios, que fueron utilizados a gran escala en África después de 1945, cuando cobraron fuerza la descolonización y la liberación nacional. En ese continente, los mercenarios de Inglaterra, Sudáfrica y Estados Unidos -que actuaban contra los movimientos de liberación nacional para defender los intereses del mundo capitalista occidental- adquirieron una triste celebridad, representada en el cine y la literatura. No obstante, cuando la descolonización del continente concluyó a mediados de la década de 1970, el mercenarismo pareció llegar a su fin. Pero eso fue una ilusión, porque, tras la primera guerra del Golfo Pérsico, a comienzos de la década de 1990, Estados Unidos le dio un nuevo aire al mercenarismo, hasta convertirlo en un componente central de las guerras contemporáneas, tendencia que se reforzó aún más después del 11 de septiembre, cuando Estados Unidos dio comienzo a su eterna “guerra contra el terrorismo”, calculada por sus mismos impulsores para durar cien años.

El uso de los mercenarios por el capitalismo en los contextos mencionados era restringido por varias razones: era un complemento o un apoyo a las fuerzas militares convencionales de los Estados, para realizar determinadas “tareas sucias” (matar líderes políticos o militares, realizar atentados, quemar aldeas...); por lo general, los Estados no presumían del uso de mercenarios y mantenían encubiertas sus labores; no se reconocía la existencia de ejércitos privados al servicio de los Estados, ni estos los patrocinaban o respaldaban a vasta escala; los mercenarios se usaban en labores estrictamente militares y no hacían parte de actividades de logística o labores complementarias; se privilegiaba el reclutamiento de tropas nacionales por los Estados para afrontar las guerras en el extranjero, como hizo Estados Unidos durante la guerra de Vietnam.

**Asistimos a la formación de ejércitos y corporaciones militares privadas que hacen la guerra en vinculación directa con un determinado Estado, pero que se desempeñan de manera independiente y autónoma, en mutuo acuerdo con los Estados, para suplantar la labor que antes realizaban de forma permanente e integral los ejércitos estatales y para defender -de eso no cabe la menor duda- los intereses del capitalismo allí donde se encuentren, tanto en términos geográficos y espaciales como en cuanto a sectores económicos (minerales, petróleo, tierras raras, inversiones transnacionales...), o para el control de infraestructura y zonas estratégicas de producción o suministro de materiales, energía y mercancías.**

Tras el fin de la Guerra Fría esto cambió drásticamente y el capitalismo redefinió los asuntos militares en concordancia con dos fenómenos complementarios: las transformaciones geopolíticas y las mutaciones internas del capitalismo. En cuanto a lo primero, en 1989-1991 todo cambió en el plano geopolítico y esto supuso que quedaran vacantes miles de militares de los ejércitos de la Guerra Fría, y muchos de estos empezaron a buscar "empleo" en nuevos frentes como individuos capacitados en diversas labores del ámbito militar (logística, inteligencia, combate directo, acciones encubiertas, matar, torturar...). Esto generó una gran oferta de personal especializado en la "industria de la muerte", a un precio relativamente bajo, para abastecer el nuevo nicho de mercado, de la guerra y de la violencia. En cuanto a lo segundo, el capitalismo privatizó la guerra, los ejércitos y la muerte, en consonancia con su proyecto de mercantilizar y privatizar todo lo existente.

No es casualidad que, tras el fin de la Guerra Fría, en la primera guerra de amplio espectro que realizó Estados Unidos contra Irak, haya recobrado importancia el uso de mercenarios, pero con unas lógicas diferentes a las de la época de los cipayos o de los mercenarios en África en tiempos de liberación nacional y descolonización.

Los cambios están relacionados con las transformaciones de la máquina de la guerra del binomio capital-Estado, la más importante de las cuales radica en que los Estados imperialistas, y esa pauta la marca claramente Estados Unidos como hegemón, van a mantener las guerras en el mundo para preservar su acceso a materiales, energía, mercados, zonas estratégicas, corredores y cadenas de suministro y para eso necesitan gran cantidad de fuerza de trabajo militar y asesina, la cual va a ser suplida en gran parte con la financiación de ejércitos privados y de mercenarios.

En ese sentido, asistimos a la formación de ejércitos y corporaciones militares privadas que hacen la guerra en vinculación directa con un determinado Estado, pero que se desempeñan de manera independiente y autónoma, en mutuo acuerdo con los Estados, para suplantar la labor que antes realizaban de forma permanente e integral los ejércitos estatales y para defender -de eso no cabe la menor duda- los intereses del capitalismo allí donde se encuentren, tanto en términos geográficos y espaciales como en cuanto a sectores económicos (minerales, petróleo, tierras raras, inversiones transnacionales...), o para el control de infraestructura y zonas estratégicas de producción o suministro de materiales, energía y mercancías<sup>3</sup>.

Para empezar, se introduce un cambio en el lenguaje: ya no se habla de mercenarios o cipayos, sino de "emprendedores" y "contratistas" que desempeñan labores al servicio de los Estados, pero adscritos a empresas privadas, que operan de la misma forma que lo hacen los capitalistas y los trabajadores en cualquier empresa capitalista; esto es, unos organizan, controlan, planifican y ordenan y otros actúan sobre el terreno, lo que significa dedicarse a matar, destruir y despejar territorio para los Estados a los que sirven y para las empresas transnacionales, sin importar su origen.

Entre paréntesis, y aunque pueda resultar discutible, debe recalcarse que tanto los militares como los mercenarios realizan un trabajo, pero un trabajo sucio, una de cuyas principales características radica en que sus actividades están ocultas, lo cual "facilita a la 'gente de bien' no verlo ni pensar en ello". Ahondando en sus características, el trabajo sucio

Para empezar [...] causa daños considerables, ya sea a otras personas, a animales no humanos o al medio ambiente. En segundo lugar, requiere que sea algo que la 'gente de bien' (es decir, los miembros respetables de la sociedad) vea como algo malo, moralmente comprometedor. En tercer lugar, es un trabajo perjudicial para las personas que lo hacen, lo que las lleva a sentirse despreciadas y estigmatizadas por los demás o a sentir que están traicionado sus propios valores e ideales más arraigados. Por último, y lo que es más importante, está supeditado a un mandato no verbalizado de la "gente de bien", que lo considera un trabajo necesario para mantener el orden social, pero no lo aprueba explícitamente y, llegado el caso, puede desvincularse de las responsabilidades que conlleva. Para que esto sea factible, el trabajo tiene que recaer sobre 'otras' personas: por eso el mandato se basa en la creencia de que alguien se ocupará del trabajo pesado día tras día<sup>4</sup>.

Ahora bien, el trabajo de los mercenarios es, si se quiere, doblemente sucio, pues dentro de las características señaladas en este intento de caracterización no se ajustan a la número 3, relativa al daño moral que les produce el hecho de matar. O más precisamente: esos mercenarios no alteran sus valores cuando matan, porque los mercenarios colombianos han sido formados en antivalores de muerte y depredación de seres humanos y de la naturaleza. Claro, puede darse el caso -y de hecho se da- de que esos mercenarios sean presa del sentimiento de culpa, pero lo que debe quedar claro es que, cuando van a matar, no profesan la defensa de la vida, el bien común o algo por el estilo.

Volviendo al hilo de la argumentación, los Estados, y en eso Estados Unidos va a la vanguardia, se han dado a la tarea de privatizar las diversas labores de la guerra, y no solo las relativas al campo de batalla. Así, la logística, tareas de mantenimiento (cocina, aseo, transporte...) han sido cedidas a empresas privadas. De tal manera, que en las bases militares de los Estados Unidos (una mil, regadas por los cinco continentes) gran parte del personal que allí se encuentra, originario de Estados Unidos o de otros países, no es empleado a sueldo de ningún Estado, sino asalariados de empresas privadas, muchos de ellos en condiciones de semiesclavitud porque se les roban sus pasaportes, no les pagan las sumas de dinero ofrecidas y, en muchos casos, los envían al matadero sin dotación adecuada. Todos estos individuos forman parte del ramo de los "contratistas".

El vocablo contratista es muy genérico y poco clarificador, si se considera que bajo esa denominación se incluye personal que desempeña labores no directamente militares, aunque necesarias e indispensables para que los soldados estatales y paraestatales hagan la guerra, hasta los que operan aviones, helicópteros, drones o forman parte de grupos especiales de combate o de tortura. Al respecto, valga recordar que entre los torturadores de la prisión de Abu Ghraib en Irak se encontraban contratistas privados y, en varias ocasiones, cuando se han atacado bases y estaciones militares de los Estados Unidos, han muerto cocineros, contratistas o empleados de oficina, y esas muertes, con toda razón, han sido legitimadas por parte de los atacantes como objetivos militares que integran la tropa mercenaria que opera en un determinado territorio. Esto indica que el mercenarismo tiene diferentes niveles, que incluye a personal que no participa directamente en acciones militares ni en combates directos, que son una minoría, porque la mayoría está formada por los mercenarios puros y duros, contratados para que maten y hagan daño según las ordenes de sus patrones.

El ejemplo más sonado al respecto, con amplia participación de exmilitares colombianos, fue el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, el 7 de julio de 2021. Ese crimen fue perpetrado por un grupo de 31 mercenarios, 26 de los cuales eran colombianos, incluyendo al capitán Germán Rivera, retirado del ejército colombiano, quien fue el reclutador y organizador operativo del magnicidio. A ellos los contrató la empresa privada de seguridad CTU Security, con sede en Miami, Estados Unidos<sup>5</sup>. Entre bambalinas, se vislumbra que el crimen fue organizado por la CIA, la cual esta vez acudió a intermediarios, una empresa privada de Estados Unidos, y como ejecutores a sicarios colombianos del Ejército, seis de los cuales habían sido alumnos aventajados en la Escuela de las Américas, de los Estados Unidos<sup>6</sup>.

La privatización del Ejército de los Estados Unidos se ha hecho con varios propósitos: abaratar costos y reducir la burocracia estatal; disminuir el riesgo de muerte o heridas de militares profesionales directamente ligados al Estado, por los cuales normalmente ese Estado debe responder; evitar escándalos, ruido y movilización dentro del país para cuestionar el envío de soldados para morir en el exterior; realizar labores sucias sin cortapisas legales, judiciales y económicas que los Estados deben tratar de mantener en términos formales, como violar, maltratar, torturar y asesinar sin restricción legal de ninguna índole.

Esto ha dado pie al surgimiento de Private Military Contractors (PMC) [Contratistas Militares Privados] en los Estados Unidos, un nuevo sector "industrial" en continua expansión. Allí se encuentran empresas que se dedican a construir las instalaciones militares y mantener la infraestructura (edificios, carreteras, hangares, aeropuertos), otras se ocupan de las labores de aseo, cocina, higiene y limpieza en general, otras más suministran personal capacitado (que maneja aviones, helicópteros, conduce tanques), para operaciones especiales, entre ellas matar, torturar y desaparecer adversarios y a otros se envía directamente al terreno para invadir y agredir a las poblaciones locales.

Donald Rumsfeld, Secretario de Defensa en el gobierno de George Bush Jr., escribió en 2002 un artículo titulado la "Transformación del Ejército", en donde aseguró: "debemos promover un *enfoque más empresarial* que favorezca que nuestra gente actúe de forma más preventiva que reactiva y se comporte menos como una burocracia y más como *una entidad de capital de riesgo*"<sup>7</sup>. Cuando Rumsfeld habla de capital de riesgo el término debe entenderse en un doble sentido: de una parte, las labores de la guerra deben ser asumidas por particulares, aunque el Estado siga siendo su principal financiador; y, de otra parte, el negocio de la guerra mercenaria supone un riesgo, literalmente hablando, porque los mercenarios al ser de carne y hueso, y no máquinas robotizadas de latón y vidrio, pueden ser heridos, capturados o morir en cualquier combate. Aquí el capital riesgo asume un carácter que no es metafórico, como el que se le atribuye a una inversión en un banco o en el mercado bursátil, dado que las compañías de mercenarios saben, aunque eso no lo digan ni en su propaganda ni en los cursos que les dictan a sus sicarios, que estos arriesgan la vida, hasta tal punto de que muchos mueren y sus cadáveres regresan, si es que regresan, envueltos en bolsas negras de plástico para ser enterrados en cualquier esquina, sin ningún tipo de honor militar.

Entre esas compañías se encuentra Blackwater, cuyo nombre original ha sido modificado varias veces y hoy se denomina Constellis Holding. Fue fundada en 1997, y tiene al mismo tiempo -porque las dos cosas son complementarias- un abultado nivel de negocios y ganancias anuales, junto con un tenebroso historial de muerte y criminalidad. Ha estado involucrada en torturas, asesinatos y matanzas indiscriminadas de civiles en Irak. Esta empresa conforma el ejército privado de mercenarios más importante del mundo y ha sido puntal en la "guerra contra el terrorismo" de los Estados Unidos. Cuenta con 40 mil soldados privados desplegados en el mundo, tiene una base de datos de más de veinte mil exmiembros de fuerzas especiales de Estados Unidos y dispone de una flota privada de aviones y helicópteros de combate<sup>8</sup>.

El personal de estas PMC de los Estados Unidos procede de diversos lugares: unos son originarios de Estados Unidos o de países de Europa occidental o de Australia y otros provienen de países del mundo periférico. Entre los dos hay diferencias notables: en términos de clase y de raza, por decirlo así, porque a un estadounidense o a un británico se le paga mejor que a un colombiano o a un chileno; aunque todos se reclutan en el sector militar oficial de los países, se destinan a diferentes misiones, y lo normal radica en que los altos mandos sean de los Estados Unidos y provengan del Ejército de ese país y hayan formado parte de comandos especiales o de la CIA, hayan sido boinas verdes y ahora actúen de cazarecompensas, mientras que a los mercenarios periféricos se les destina a las labores de combate directo sobre el terreno; otra diferencia fundamental es de tipo jurídico, porque los mercenarios de nacionalidad estadounidense gozan de los mismos niveles de impunidad que cualquier soldado de los Estados Unidos, mientras a cualquier mercenario no se le garantiza la cobertura legal de algún Estado. En síntesis, los mercenarios

Ganan verdaderas fortunas, hasta 1000 o 1500 dólares diarios dependiendo no solo de la experiencia y el tipo de tarea que cumplen, sino también de la nacionalidad, su origen, dado que sus honorarios difieren notablemente si se trata de un exmiembro de la SAS británica, de los DEAL o los Delta Force norteamericanos, de un *gurka* nepalí, un guerrero de las islas Fidji, un exparamilitar colombiano, o un exmiembro de la DINA chilena, de un 'grupo de tareas' de la dictadura argentina o un exmiembro de una falange cristiana libanesa. El racismo está muy presente en este tipo de organizaciones<sup>9</sup>.

Debe recalcar que se está desarrollando una *división internacional del trabajo de la guerra, la muerte y la crueldad*. Una de sus características radica en que Estados Unidos, como país imperialista dominante y principal agente internacional de guerra y violencia en el mundo, está sustituyendo a sus militares por mercenarios, la mayor parte de los cuales procede de otros países. En la invasión de Irak (2003-2011), por ejemplo, participaron 160.000 mercenarios, cuyo número superaba al de las tropas oficiales de Estados Unidos. Y en la ocupación de Afganistán (2002-2021) intervinieron 90 mil mercenarios, procedentes de diversos lugares del mundo, incluyendo a matones originarios de Colombia<sup>10</sup>.

A estos mercenarios se los lleva directamente al matadero de los campos de combate de sus guerras o de las guerras de sus proxis -como en Ucrania- porque les resulta más barato contratar mercenarios del sur global que a sus propios connacionales, y eso también conlleva menos inconvenientes jurídicos y legales. Esto no solo responde a costos económicos, sino también políticos, pues a la opinión pública estadounidense no le resulta aceptable enterarse de la muerte de sus propios soldados en el extranjero (fenómeno conocido como el síndrome de Vietnam). En cambio, los mercenarios extranjeros son carne de cañón barata, abundante y por quienes los ciudadanos de Estados Unidos no derraman una sola lágrima. En este contexto, Estados Unidos actúa con la lógica de minimizar los costos internos de las guerras que libra en el exterior y, para ello, externaliza su violencia mediante actores intermediarios, ya sean milicias locales, mercenarios o contratistas.

Y aquí es donde se presenta un efecto diferenciador de la división internacional de la guerra, un claro *intercambio desigual, económico y humano*, en el que las grandes corporaciones de Estados Unidos, ligadas a su Complejo militar-industrial-financiero-tecnológico, obtienen fabulosas ganancias, mientras que las naciones del mundo periférico proporcionan mercenarios, lo cual contribuye a generar o perpetrar la violencia interna que asola a estos países, como sucede con el caso de Colombia, además de acentuar los vínculos de dependencia y pérdida de soberanía con respecto al imperialismo.

Es un *colonialismo militar* que debe entenderse mirando los dos polos de la ecuación: lo que hace el imperialismo en su casa y lo que realizan sus socios y agentes activos en el mundo periférico, como Colombia, donde existe una oferta permanente de carne de cañón, que es abastecida por intermediarios, militares de la alta oficialidad activos o en retiro, a través de sus propias empresas o de las fachadas que utilizan las grandes compañías de mercenarios de los Estados Unidos. En ese sentido,

(otros países) imitan el modelo estadounidense y cada día surgen nuevos grupos militares privados de países como Rusia, Uganda, Irak, Afganistán y Colombia. Sus servicios son más robustos que los de Blackwater, ofrecen un mayor poder de combate y la voluntad de trabajar para el mejor postor con escasa consideración por los derechos humanos. Son mercenarios en todos los sentidos de la palabra<sup>11</sup>.

En cuanto a los mercenarios procedentes de Nuestra América los más apetecidos a comienzos de la década de 1990 eran militares chilenos de la época

**La principal cantera de los mercenarios colombianos se encuentra en las Fuerzas Armadas de Colombia (en la que se incluye el Ejército), cuya formación y adiestramiento ha corrido por cuenta de los Estados Unidos en los últimos 80 años. Solo basta con constatar el registro de militares y policías colombianos que han ido a capacitarse en las labores de muerte, tortura y desaparición forzada en los Estados Unidos, en sus tristemente célebre Escuela de las América, o como la llamaba Eduardo Galeano la "fábrica de dictadores". Miles han pasado por esas "aulas" de entrenamiento y han sido adiestrados con los manuales especializados en guerra psicológica, tortura, lucha contra el "enemigo interno", hacer desaparecer a rebeldes y comunistas... No por casualidad, un alto porcentaje de los militares responsables de los mal llamados *falsos positivos* fueron adiestrados en los Estados Unidos.**

En cuanto a los mercenarios procedentes de Nuestra América los más apetecidos a comienzos de la década de 1990 eran militares chilenos de la época de la dictadura de Pinochet. Estos eran codiciados por su larga experticia de casi dos décadas en perseguir, torturar y matar trabajadores, estudiantes, campesinos y a todos aquellos que hubieran simpatizado o hecho parte del gobierno de la Unidad Popular. Pero pronto esa oferta se quedó rezagada y “desactualizada”, en la medida en que pasaba el tiempo y esos exmilitares iban envejeciendo y no eran reemplazados por nuevo personal de las filas del Ejército chileno, que ya no actuaba con la sevicia e impunidad generalizada de los tiempos de Pinochet, y no porque no quisieran, sino porque no lo podían hacer por las nuevas reglas de regreso a la seudodemocracia.

En ese momento, Blackwater y otras compañías de mercenarios fijaron su atención en Colombia, al que consideran un país con una oferta abundante de personal para convertirse en mercenarios, con una guerra contrainsurgente activa -que perdura hasta hoy- y un laboratorio real de las guerras presentes y futuras que el imperialismo libra en diversos lugares del mundo.

Así, Colombia se ha convertido en el primer proveedor de mercenarios a nivel mundial, con características envidiables en el mercado de la muerte: los mercenarios están altamente capacitados, no requieren formación adicional y la mayor parte de los oficiales habla inglés (porque han sido formados en la Escuela de las Américas de los Estados Unidos); existen unos 100 mil soldados de fuerzas especiales que han sido educados en el anticomunismo cerril, la violación de derechos humanos y el desprecio de los pobres; muchos de los exmilitares están capacitados con estándares técnicos del Primer Mundo de la Muerte (como Estados Unidos e Israel), en habilidades como pilotear helicópteros y manejar inteligencia y sistemas informáticos; gran parte de los militares se están pensionando, quedan cesantes, y están dispuestos a seguir matando fuera del país, donde los contraten...<sup>12</sup>.

Pero, ojo, los mercenarios colombianos no se les contrata solamente para actuar en las guerras convencionales, sino que también tienen como destino actividades propias del capitalismo, que son presentadas en forma demagógica como “ilegales”, tales como lavado de dinero, tráfico de estupefacientes, trata de blancas y conformación de grupos paramilitares de asesinos, como se evidencia en México, un ramo en el que también desde Colombia se brinda una amplia experiencia, si recordamos que militares y paramilitares han mantenido nexos profundos desde hace décadas.

Ya desde la Segunda Guerra del Golfo contra Irak, que comenzó en 2003, entraron los mercenarios colombianos en acción, con la participación de 120 al servicio de Blackwater. En 2006, se conoció la protesta de decenas de guardias colombianos en Irak a los que se les escamoteaba el sueldo prometido. Al respecto, un capitán del Ejército Nacional relató: “Me encontré con un sargento que me dijo ‘Mi mayor, están reclutando gente para mandar a Irak. Pagan buena plata, como 6000 y 7000 dólares mensuales libres, vamos y pasemos las hojas de vida’. El militar llevo su *hoja de muerte* a la sede de una empresa, ID Systems, una tapadera o subsidiaria de Blackwater, donde se encontró con un grupo de militares en servicio activo que iban a enrolarse como mercenarios. Lo revelador es que, en la Escuela de Caballería, en el norte de Bogotá, se oficializó la conversión en mercenarios de los exmilitares y militares. Esa instalación fue facilitada por el gobierno colombiano, allí se les instruyó en lo básico y se les informó sobre los enemigos que iban a enfrentar. Es decir, el gobierno y el Ejército de Colombia sabían lo que estaban haciendo, le facilitaron instalaciones oficiales del Estado a una empresa privada de Estados Unidos para capacitar como mercenarios a militares activos y todo por “sugerencia” del gobierno de los Estados Unidos que avaló a la subsidiaria de Blackwater<sup>13</sup>.

Lo que disparó la demanda de mercenarios de Colombia para el mercado mundial de la muerte, por la influencia estadounidense, fue el Plan Colombia, cuando nuestro país se convirtió en el tercer lugar del mundo por la inversión militar directa de Estados Unidos, en lo que se incluía presencia de oficiales e instructores de Estados Unidos, entre ellos contratistas privados, venta de aviones y artefactos bélicos y aumentó simétricamente la presencia de oficiales colombianos de la policía y el Ejército en la tristemente célebre Escuela de las Américas, en Estados Unidos, donde se enseña a matar, torturar, odiar y deshumanizar a todos aquellos que son considerados enemigos. Algo que no debe perderse de vista cuando se habla de los mercenarios, puesto que deshumanizar al adversario es una condición para convertirse en un matón sin patria ni ley, al servicio del imperialismo y del capital.

Ahora bien, dado que Colombia ha tenido un conflicto militar interno de larga data, y ha sido un laboratorio de contrainsurgencia *Made in USA*, y cuyas tropas de militares y policías cuentan con un dilatado prontuario de terror y de muerte (o si no, recuérdese no más, a los asesinatos de Estado conocidos de manera eufemística con el apelativo benigno y neutro de “falsos positivos”). En estas condiciones existe una oferta permanente de militares y exmilitares, dispuestos a venderse a cualquier postor. Este es uno de los pivotes del mercenarismo en nuestro país, con amplio reconocimiento por parte de los mercaderes de la guerra y de la violencia a nivel mundial, entre los cuales sobresalen Estados Unidos e Israel, con los cuales las fuerzas armadas de este país tienen afinidades delictivas.



## Colombia: capitalismo traqueto y fábrica mundial de mercenarios

El rol de Colombia como proveedor de mercenarios no ha caído del cielo ni es una maldición divina o algo por el estilo, sino que se explica si examinamos, así sea someramente, las características del capitalismo realmente existente a nivel planetario y sus conexiones con el capitalismo traqueto a la colombiana. Esto es algo que muy pocos mencionan y la mayor parte de “analistas” del fenómeno acude a explicaciones banales, siendo la más mencionada aquella de que el mercenarismo se explica porque los militares colombianos tienen un muy bajo ingreso de jubilados y, por eso, se ven obligados a vender sus servicios a cualquier postor en el mercado internacional de la muerte. Al respecto, y solo para mencionar un ejemplo, el senador Ariel Ávila afirma: “La última ola de mercenarios son en su mayoría exmilitares, gente que salió pensionada tras prestar 20 años de servicio, que está muy bien entrenada, pero que recibe una pensión que no alcanza los 400 dólares”<sup>14</sup>.

Esta es la explicación que dan los mismos mercenarios, voceros del Ejército colombiano y falsimedia local, que es muy frágil por varias razones: ser pensionado en Colombia ya de por sí es un privilegio al que accede una porción reducida de la población y los militares son algunos de esos privilegiados que cuentan con pensión y que se jubilan en promedio a los cuarenta años; las pensiones de los pocos colombianos que la alcanzan son, en general, reducidas, tanto que son inferiores a las de los militares, aunque esos pensionados hayan sido trabajadores activos durante décadas; la oferta de mercenarios no cobija al conjunto de colombianos pobres, con bajos ingresos, sin empleo fijo o con malas pensiones, sino que corresponde a un rubro muy específico y segmentado: el de los militares, y en menor medida los paramilitares, lo cual controvierte la idea que se pretende imponer de que los mercenarios colombianos son unos soldados pobrecitos y desamparados, especies de víctimas etéreas de la guerra, que para no morir de hambre deben ir a matar al exterior; los mercenarios colombianos están enterados exactamente de las tareas criminales que van a realizar en el exterior, puesto que solo saben hacer una cosa, que aprendieron con lujo de detalles con las fuerzas armadas de Colombia, de Estados Unidos e Israel: matar y causar daño y aunque eso lo realicen por dinero, esa no es la principal motivación sino una más, inscrita en la doctrina del enemigo interno en que han sido maleducados y que van a seguir aplicando donde quiera que puedan ir: en Sudán, Ucrania, Yemen, Arabia Saudita, o donde sea.

Por esta razón, deben examinarse otros aspectos, que no se reduzcan al asunto del ingreso económico, porque esto ni siquiera araña la superficie del mercenarismo, que en el caso de nuestro país tiene múltiples tentáculos, que no pueden ser soslayados, no solo para comprenderlo sino para enfrentarlo.

El primer asunto que debe mencionarse es que existe un nexo directo entre el neoliberalismo y la cultura traqueta que se ha impuesto en Colombia en las últimas décadas. Del neoliberalismo seguramente no es necesario decir mucho, puesto que sus características son de sobra conocidas, pero de la cultura traqueta si deben mencionarse unas cuantas cosas, ya que la misma denominación puede resultar extraña e incomprensible para nuestros lectores. El término traqueto es un producto lingüístico del bajo mundo delincuencial del Medellín de la década de 1980, asociada originalmente con el tra-ca-ta tra-ca-ta de las ametralladoras que usaban los sicarios para matar adversarios o “enemigos”. Estos jóvenes sicarios, de origen humilde, eran y son contratados por algunos “lavaperros”, esto es, por sectores ligados al tráfico de cocaína. Así, el vocablo traqueto está asociado al narco, al traficante de alucinógenos, pero también al matón, sicario o asesino a sueldo, a los que se contrata para llevar a cabo “sus trabajitos”, primero en Medellín y luego en cualquier lugar de Colombia.

El traqueto estuvo localizado por poco tiempo en algunos lugares de Antioquía, pero luego se difundió a nivel nacional, hasta el punto de que sus voceros y/o representantes llegaron a las altas esferas del poder político, económico y mediático, incluyendo la presidencia de la República, a la que otra vez puede acceder un traqueto aparentemente refinado que vive en Miami y que ha anunciado que va a “destripar” y erradicar a toda la izquierda porque “esa plaga no merece un trato diferente”. Esas son las palabras de un típico traqueto colombiano, no importa que tenga ínfulas de ser un tenor y desprecie las comidas populares y a los pobres.

El traqueto adquirió una amplia legitimación social y se convirtió en un símbolo cultural, en un ícono, que genera admiración y deseos de emulación por una parte significativa de la sociedad colombiana. El deseo se fomenta porque los traquetos, luego convertidos en grandes capos del narcotráfico, acumularon grandes fortunas, logrando un acelerado e impresionante ascenso social, que se manifestó en que compran todo con dinero, incluyendo reinas de belleza, e imponen su ley a punta de sangre y plomo. Eso llevó a la consolidación de una cultura y de una estética traquetas, como puede observarse hoy en día en cualquier lugar de Colombia, en donde en las tiendas, en los centros comerciales, en los lugares turísticos se venden con orgullo imágenes de Pablo Escobar (el traqueto más conocido a nivel mundial, incluso más que otro traqueto que llegó a la Presidencia de la República y hoy es un vulgar expresidiario). Esa imagen se encuentra en camisetas, gorras, pocillos y cualquier souvenir que se compra para coleccionar. En pocas palabras, “el traqueto pasó a ser uno de los tipos característicos que hoy nos identifican como nación”<sup>15</sup>. Que somos un país traqueto es difícil negarlo, lo cual no quiere decir que todas las personas que nacieron o viven en Colombia sean traquetos, simplemente que lo traqueto es un patrón cultural, con sus características, símbolos, rituales y manifestaciones estéticas y que es típico de importantes porciones de la población colombiana. Se caracteriza por el culto al dinero fácil, al enriquecimiento rápido y al ascenso social vertiginoso, al exhibicionismo y arribismo, a la idolatría de los ricos y poderosos, al consumo ostentoso, al acallamiento brutal de los “enemigos”, a la acumulación de tierras urbanas y rurales, al culto a los toros y caballos, a la reducción de la mujer a una simple mercancía sexual que se compra con dinero y se consolida un modelo de belleza, en el que prima la superficialidad, las formas voluptuosas y el exhibicionismo grotesco (de reinas de belleza, presentadoras de televisión, cantantes y muchas de las dirigentes políticas) y a la reivindicación de la ignorancia y a la pobreza en el lenguaje. Y, como cereza del pastel, todo ello viene acompañado de una violencia brutal que se exalta y abarca todos los aspectos de la vida cotidiana. La cultura traqueta rechaza y se opone a cualquier acción colectiva y reivindicativa y por eso está permeado de un acendrado imaginario anticomunista, que predica que a todos los que son de izquierda o pertenecen a alguna organización política que pudiera tener algún viso crítico deben ser barridos, exterminados, fumigados o eliminados de la faz de la tierra.

El componente traqueto es propio de los grupos paramilitares que se crearon en el país desde comienzos de la década de 1980 y cuyos nexos con los militares están bien establecidos. Porque debe subrayarse que la mentalidad y cultura traquetas han irradiado a las Fuerzas Armadas del Estado y a la policía, y no solo por las prácticas de represión, sino por su forma de pensar, que no se distingue, en general, de la de cualquier traqueto de los bajos fondos, y que se resume en un anticomunismo visceral, en un culto a la riqueza y a los multimillonarios y en una ostentación de la violencia y de la impunidad. Este es un elemento que debe tenerse en cuenta a la hora de analizar el mercenarismo criollo, y es que los militares, influidos de manera directa por la cultura traqueta (esta es una influencia doméstica, junto con una de tipo internacional, como es la lógica neoliberal), buscan alcanzar dinero fácil, y una oportunidad se presenta con el mercado internacional de mercenarios, que hoy impulsan Estados y empresarios privados en diversos lugares del mundo.

Téngase en cuenta la fusión de que hablamos entre neoliberales y traquetos para configurar un neoliberalismo traqueto, un producto típicamente colombiano, aunque ya se está replicando en otros países del continente (entre ellos México y Ecuador). Por eso a Colombia puede denominarsele *traquetalandia* (literalmente, la tierra de los traquetos).

Este neoliberalismo traqueto une, entonces, lo propio del programa privatizador, individualista, egoísta y competitivo de Milton Friedman y compañía, con la lógica de que todo eso puede alcanzarse con la violencia y el odio contra sus semejantes, para llegar a la cúspide de los triunfadores y exitosos. El neoliberalismo traqueto a la colombiana es algo así como la fusión de la práctica criminal de Pablo Escobar con las doctrinas individualistas de Friedrich von Hayek.

Entre los éxitos con lo que suelen ostentar los militares se encuentran su deleite público cuando bombardean campamentos de insurgentes o matan a cualquiera de sus comandantes. Esto tiene, además, un trasfondo histórico reciente: cientos de militares, paramilitares y sicarios participaron directamente en el exterminio de la Unión Patriótica y fueron los mismos que asesinaron a miles de personas durante el régimen de la (in)Seguridad (anti)Democrática y participaron en operaciones criminalmente infames, como la Operación Orión en Medellín en 2002 y en miles de masacres. En pocas palabras

la reputación de los mercenarios colombianos ha sido construida muerte a muerte. Su crueldad ha sido alabada, por ejemplo, mediante los relatos de mercenarios que publicó el año pasado el diario colombiano *El Espectador*. Se les recluta, tal como lo hacen los clubes de fútbol con sus jugadores. Se contrata para matar bajo órdenes de empresas militares privadas (EMP), como Blackwater (ahora Academi) o DynCorp (famosa en Colombia, porque, además del mercado de mercenarios, se encargaba oficialmente de proveer y asperjar el glifosato)<sup>16</sup>.

Los mercenarios colombianos llevan consigo tanto una experiencia de violencia de varias décadas como una cultura traqueta, en la que no hay límites para hacer todos los “trabajitos” que les encomienden, sin importar dónde ni cuándo, ni contra quién. Simplemente, se asesina allí donde lo contraten, sin importar que hay detrás o quienes están tras bambalinas.

Como para que esta afirmación no parezca gratuita o demasiado genérica, vamos a citar un ejemplo concreto, de algo brutal acaecido en Sudán. Aunque no hay datos precisos, se calcula que en ese país hay 2000 mercenarios colombianos. Han llegado allí como resultado de la acción de redes de reclutamiento, que son manejadas por oficiales retirados del Ejército. Al respecto el relato de un mercenario es elocuente. Primero describe con detalle la forma cómo se le contactó, se le contrató y realizó el viaje y llegó a Sudán:

Nos contactamos con el sargento Alexander Gutiérrez, quien de inmediato nos puso en contacto con el coronel Prada, comandante de los colombianos en Sudán y mano derecha del coronel (r) del Ejército Álvaro Quijano. Nos dijo que necesitaban enfermeros, que el pago era de 2800 a 3000 dólares mensuales y que no estaríamos en la primera línea, que nuestro trabajo sería solo como enfermeros. Viajamos desde Colombia el 2 de mayo en un grupo de 35 colombianos, de los cuales 5 íbamos como enfermeros y el resto como tropa de combate. El trayecto fue Colombia, Madrid; Madrid, Etiopía; Etiopía, Bosaso; Bosaso, Nyala.

Estando en Sudán, empezó su labor de mercenario y empezó a destacarse por su brutalidad un excoronel colombiano, quien reafirmó que se iba a matar o a morir:

Allí recibimos instrucciones y nos llevaron a un edificio adecuado como puesto de salud. Estuvimos allí hasta agosto del año pasado, luego nos trasladaron a una aldea cerca de la ciudad de Armenia, el Fasher, donde nos bombardeaban todos los días. Entre el 25 y el 30 de septiembre, murieron 10 colombianos, de los cuales 6 quedaron completamente calcinados. El 3 de octubre llegó el coronel Prada e hizo que nos entregaran el armamento, indicando que teníamos que entrar a la primera línea. Tres se negaron porque eran civiles y no tenían formación militar ni conocimiento en armas. Este señor los trató mal, los llamó cobardes, dijo que no les pagaría sueldo y que los entregaría a los locales, que necesitaban gente valiente para pelear porque se tomarían la ciudad a sangre y fuego, y que estar allí era para matar o ser asesinados.

Luego, el excoronel como si estuviera en los campos colombianos, con sangre fría y suma crueldad ordenó que fueran bombardeados la población civil y hospitales, muy al estilo estadounidense e israelí:

Este coronel llevaba el mando y ordenó la toma de El Fasher; *ordenó el bombardeo con drones estratégicos a la ciudad sin importar la población civil. Bombardearon un hospital donde había niños.* Cuando le dijimos que no estábamos de acuerdo y que solicitábamos nuestro retiro, dijo que nos pagaban para eso y que cómo habíamos decidido ir a una guerra si éramos tan cobardes. Afirmó que, si no se mataba a esa gente, los muertos podíamos ser nosotros. *El coronel Prada ordenaba los bombardeos con drones, ataques con artillería e infantería a las aldeas y ciudades. Los pilotos de los drones estratégicos, como el TB1 y TB2, son el coronel Beltrán Ardilla José, el cabo Juan Carlos Vargas Mogollón y un civil que estuvo en Ucrania, De León Castillo Daniel, quienes atacaban con el avión no tripulado siguiendo órdenes del coronel Prada, sin importar la población civil que no tenía nada que ver en el conflicto.* A los 5 enfermeros nos dieron el retiro el 26 de diciembre y salimos. Varias personas estamos dispuestas a dar declaraciones, siempre y cuando se nos brinde seguridad y se garantice nuestra integridad y la de nuestras familias, ya que el coronel Prada amenazó de muerte a un compañero que dio unas declaraciones [...] <sup>17</sup>.

Y para recalcar que los mercenarios colombianos no tienen límites morales debe mencionarse que se han involucrado en el reclutamiento y sometimiento de niños. Al respecto valga mencionar que uno de esos mercenarios en Sudán manifestó que iban expresamente a entrenar “niños para que los maten”. Un exmilitar, que se hace llamar César continuaba su crudo relato: “Con todos mis compañeros allá uno hablaba de eso: ‘qué pesar de esos niños’. Porque a ellos los matan en el frente rapidito”. Pero, con la mentalidad cruda y pragmática de un mercenario sin patria ni ley sostenía que “Toca entrenarlos, lastimosamente así es la guerra” <sup>18</sup>.



Niños y hombres sudaneses en un campo de entrenamiento con mercenarios colombianos, en Sudán. Fuente: La Silla Vacía.

Es muy difícil justificar estas acciones criminales, realizadas con saña contra poblaciones absolutamente indefensas, civiles, y que pertenecen a sociedades totalmente ajenas a nuestro país, y que nunca nos han hecho nada, para decir que, por lo menos existirán pretextos, como los que acá se inventan para “estripar enemigos”. Eso no tiene que ver sólo con dinero, está referido a algo peor y mucho más preocupante: que personas nacidas en tierras colombianas, formadas en el Ejército, con una mentalidad traqueta y contrainsurgente que alienta el matar enemigos, actúe con plena impunidad para causar daño a seres humanos y territorios con los que no tiene ningún nexo real, ni siquiera saben su idioma ni conocen nada de su cultura y sus formas de vida. De manera lacónica, puede decirse que:

La guerra que comenzó en Colombia no ha terminado. Solo cambió de idioma, de geografía, de víctimas. Pero mantiene el mismo sello: la negación de la vida como principio. Y mientras los responsables sigan impunes -dentro y fuera del país- los niños seguirán muriendo con un fusil en las manos. Esta vez, a miles de kilómetros, pero con una bandera invisible bordada en sus uniformes: “Hecho en Colombia” <sup>19</sup>.



### Mercenarios, otra exportación no tradicional de Colombia

Si tenemos en cuenta uno de los presupuestos tradicionales del neoliberalismo sobre el libre comercio, que pregona que en países como el nuestro, deben aprovechar las ventajas comparativas para fortalecer exportaciones no tradicionales, en el mercado mundial de la muerte encontramos un nicho apetecido y apetecible, en el que contamos con esas ventajas, como resultado de una guerra interna de ochenta años, de la conformación de grupos de asesinos (por recomendación de Estados Unidos con participación directa de Israel), desde comienzos de la década de 1980, en donde siempre participaron militares activos de las fuerzas armadas del Estado. Entre esas *ventajas comparativas* se cuenta con hombres relativamente jóvenes, pensionados del Ejército o la policía, adiestrados en contrainsurgencia, que no se detienen ante nada para matar a cambio de dinero y, para completar, han sido adiestrados en la doctrina del enemigo interno en forma directa por los Estados Unidos y todo eso está reforzado por la cultura traqueta que los permea de pies a cabeza. Eso ha hecho que en Colombia haya surgido una novedosa “*exportación no tradicional*”, la de los mercenarios, hacia otro nicho de mercado del capitalismo que los absorbe rápidamente en sus múltiples guerras en todo el mundo.

Esas *ventajas comparativas*, todas reunidas, difícilmente se encuentran hoy en otro lugar del mundo, y mucho menos en América Latina. Por eso, los mercenarios colombianos son una mercancía de primer nivel, apetecida por las grandes empresas de mercenarios, que, a su vez, son manejadas por oficiales o suboficiales del ejército colombiano, que tienen nexos con militares y exmilitares o miembros de los servicios de inteligencia de Estados Unidos o de otros países. En conclusión, *con la mentalidad traqueta se está preparado para matar en Colombia o en cualquier lugar del mundo, a cambio de dinero; es la lógica de los sicarios, que surgió en los barrios marginales de Medellín en la década de 1980, llevada al plano mundial.*

A esto hay que agregarle la contribución particular del neoliberalismo traqueta a lo país, porque el matarife mayor desde la presidencia exaltó la importancia de las exportaciones no tradicionales para diversificar la economía colombiana, siendo un resultado de esa política que desde este país se impulsara la exportación de mercenarios, paramilitares y asesinos a servir a los poderosos en cualquier lugar del mundo.

Como, además, el ejército colombiano y en sus proxis paramilitares están formados por miles de miembros está garantizado que desde acá se sigan nutriendo las arcas del terror y de la muerte, donde quiera que se necesiten mercenarios y, por eso, como puede verse en el Mapa No. 1 cada vez está más diversificado el destino de los condotieros criollos, que van sin duda alguna a donde se les requiera para matar y causar daño, porque así lo exige y lo dictamina un capitalismo cada vez más gore.

En resumen, entre lo traqueta y el neoliberalismo existen *afinidades delictivas* de indudable alcance: los dos pregonan el individualismo, el darwinismo social, el sálvese quien pueda, el aplastar a cualquiera que se encuentre en el camino con tal de lograr el éxito y posicionarse bien en el mercado de los ganadores, que en este caso son los empresarios de la guerra y de la muerte, que personifican al capitalismo y al imperialismo.



## Contrainsurgencia *Made in USA* y Colombia abastecedor de mercenarios

La principal cantera de los mercenarios colombianos se encuentra en las Fuerzas Armadas de Colombia (en la que se incluye el Ejército), cuya formación y adiestramiento ha corrido por cuenta de los Estados Unidos en los últimos 80 años. Solo basta con constatar el registro de militares y policías colombianos que han ido a capacitarse en las labores de muerte, tortura y desaparición forzada en los Estados Unidos, en sus tristemente célebre Escuela de las Américas, o como la llamaba Eduardo Galeano la “fábrica de dictadores”. Miles han pasado por esas “aulas” de entrenamiento y han sido adiestrados con los manuales especializados en guerra psicológica, tortura, lucha contra el “enemigo interno”, hacer desaparecer a rebeldes y comunistas... No por casualidad, un alto porcentaje de los militares responsables de los mal llamados *falsos positivos* fueron adiestrados en los Estados Unidos<sup>20</sup>. Y para comprobar su participación en la formación de mercenarios, baste recordar que una treintena de exmilitares colombianos, convertidos en mercenarios asesinaron al presidente de Haití en 2021, y seis de ellos habían sido “capacitados” para matar en los Estados Unidos. Y los otros, aunque no hayan ido directamente a la Escuela de las Américas, si han recibido su influjo, porque las doctrinas militares que se siguen enseñando en Colombia, están basadas en la lógica contrainsurgente del “enemigo interior”, del anticomunismo, de la “seguridad nacional” hecha en Estados Unidos.

Esa misma lógica contrainsurgente sigue caracterizando al ejército y la policía colombianos hasta el momento actual, y nada ha cambiado en ese terreno en el gobierno del Pacto Histórico. Peor aún, el gobierno de Petro sigue aplicando la doctrina de la contrainsurgencia dictada por los Estados Unidos, como puede apreciarse en las zonas donde hacen presencia movimientos insurgentes.

Otra fuente de los mercenarios en Colombia proviene directamente del Ejército, aunque difuminada en las mal llamadas “escuelas de seguridad”, en las cuales entrenan a miles de colombianos, gran parte de ellos también exmilitares o expolicías, como celadores, guardianes o escoltas. Muchos de estos “estudiantes” se vinculan a academias como la Swat Bodyguards de Colombia, la mayor escuela de seguridad privada de América Latina, con sede en 27 ciudades del país y a la que denominan “La Harvard de los escoltas”. Algunos de los que estudian allí sueñan con ser guardaespaldas de multimillonarios, grandes capos o políticos de extrema derecha. Incluso a las academias colombianas de seguridad viene a estudiar extranjeros, convencidos de que “Nadie sabe más de seguridad que los colombianos”. Muchos de los colombianos que desfilan por estas Academias terminan siendo mercenarios en diversos lugares del mundo, en donde se requiera carne de cañón barata, bien preparada y formado en el odio a los pobres y a los humildes, que es algo que se destila en Colombia, desde las filas del Ejército y la Policía, y que por supuesto se reproduce con lujo de detalles en las academias privadas de seguridad, un nombre eufemístico para no hablar de escuelas organizadas del crimen y para el crimen, con alcance transnacional. Un sargento del Ejército colombiano ha dicho al respecto: “Estamos acostumbrados a trabajar como un animal, algo que un soldado inglés o español no ha hecho en su vida”<sup>21</sup>.

Las escuelas de seguridad privada tienen miles de graduados lo que genera una gran oferta de mercenarios. Una gran parte de ellos, miles de personas, se ocupan como celadores y guardianes en edificios, oficinas y empresas; otros se emplean en la seguridad privada de “colombianos de bien” (cantantes, actores, empresarios, políticos, traquetos...). Pero la demanda interna no es suficiente para asimilar la gran cantidad de exmilitares, expolicías y personal civil militarizado que es solicitado en el mercado internacional de la guerra y la muerte, un mercado en continua expansión. El negocio de la seguridad privada es muy rentable, en la medida en que brinda personal para el mercado interno y para el mercado externo de la guerra y de la muerte. Y es controlado mayoritariamente por altos oficiales del Ejército, ya pensionados, que tienen contactos internacionales con los Estados Unidos y sus empresas de mercenarios, los que les abre un amplio universo geográfico si se tiene en cuenta que Estados Unidos libra diversas guerras, directas, indirectas y proxis en todos los continentes.

No se sabe con precisión cuántos mercenarios de origen colombiano hay desperdigados en el mundo. Según datos de la ONU, muy por debajo de la realidad, 10 mil colombianos han sido reclutados en forma voluntaria para participar en diversos conflictos y guerras (Ucrania, Sudán, Yemen, República Democrática del Congo) y otros entran a formar parte de redes criminales en diversos lugares del continente (México, Ecuador, Brasil, Perú, Estados Unidos...). Por supuesto, tampoco está establecido el número de los que han muerto en esas guerras. Solamente señalar, que la mayor parte de mercenarios muertos en Ucrania proceden de Colombia. La cifra se estima en unos 550<sup>22</sup>.

**En términos prácticos el asunto es quién le pone el cascabel al gato, es decir, quién se va a atrever a tocar las empresas nacionales y transnacionales del mercenarismo, en donde participan en forma directa exmilitares de la alta oficialidad. Téngase en cuenta que se está hablando de un negocio lucrativo y estratégico en el funcionamiento del capitalismo realmente existente, que genera unos 100 mil millones al año y que en Colombia genera unos 6,7 billones de pesos, (unos 1.660 millones de dólares), lo que representa el 1 % del PIB y emplea, por lo menos, a medio millón de personas.**

Unidos<sup>20</sup>. Y para comprobar su participación en la formación de mercenarios, baste recordar que una treintena de exmilitares colombianos, convertidos en mercenarios asesinaron al presidente de Haití en 2021, y seis de ellos habían sido “capacitados” para matar en los Estados Unidos. Y los otros, aunque no hayan ido directamente a la Escuela de las Américas, si han recibido su influjo, porque las doctrinas militares que se siguen enseñando en Colombia, están basadas en la lógica contrainsurgente del “enemigo interior”, del anticomunismo, de la “seguridad nacional” hecha en Estados Unidos.

Esa misma lógica contrainsurgente sigue caracterizando al ejército y la policía colombianos hasta el momento actual, y nada ha cambiado en ese terreno en el gobierno del Pacto Histórico. Peor aún, el gobierno de Petro sigue aplicando la doctrina de la contrainsurgencia dictada por los Estados Unidos, como puede apreciarse en las zonas donde hacen presencia movimientos insurgentes.

Otra fuente de los mercenarios en Colombia proviene directamente del Ejército, aunque difuminada en las mal llamas “escuelas de seguridad”, en las cuales entrenan a miles de colombianos, gran parte de ellos también exmilitares o expolicías, como celadores, guardianes o escoltas. Muchos de estos “estudiantes” se vinculan a academias como la Swat Bodyguards de Colombia, la mayor escuela de seguridad privada de América Latina, con sede en 27 ciudades del país y a la que denominan “La Harvard de los escoltas”. Algunos de los que estudian allí sueñan con ser guardaespaldas de multimillonarios, grandes capos o políticos de extrema derecha. Incluso a las academias colombianas de seguridad viene a estudiar extranjeros, convencidos de que “Nadie sabe más de seguridad que los colombianos”. Muchos de los colombianos que desfilan por estas Academias terminan siendo mercenarios en diversos lugares del mundo, en donde se requiera carne de cañón barata, bien preparada y formado en el odio a los pobres y a los humildes, que es algo que se destila en Colombia, desde las filas del Ejército y la Policía, y que por supuesto se reproduce con lujo de detalles en las academias privadas de seguridad, un nombre eufemístico para no hablar de escuelas organizadas del crimen y para el crimen, con alcance transnacional. Un sargento del Ejército colombiano ha dicho al respecto: “Estamos acostumbrados a trabajar como un animal, algo que un soldado inglés o español no ha hecho en su vida”<sup>21</sup>.

Las escuelas de seguridad privada tienen miles de graduados lo que genera una gran oferta de mercenarios. Una gran parte de ellos, miles de personas, se ocupan como celadores y guardianes en edificios, oficinas y empresas; otros se emplean en la seguridad privada de “colombianos de bien” (cantantes, actores, empresarios, políticos, traquetos...). Pero la demanda interna no es suficiente para asimilar la gran cantidad de exmilitares, expolicías y personal civil militarizado que es solicitado en el mercado internacional de la guerra y la muerte, un mercado en continua expansión. El negocio de la seguridad privada es muy rentable, en la medida en que brinda personal para el mercado interno y para el mercado externo de la guerra y de la muerte. Y es controlado mayoritariamente por altos oficiales del Ejército, ya pensionados, que tienen contactos internacionales con los Estados Unidos y sus empresas de mercenarios, los que les abre un amplio universo geográfico si se tiene en cuenta que Estados Unidos libra diversas guerras, directas, indirectas y proxis en todos los continentes.

No se sabe con precisión cuántos mercenarios de origen colombiano hay desperdigados en el mundo. Según datos de la ONU, muy por debajo de la realidad, 10 mil colombianos han sido reclutados en forma voluntaria para participar en diversos conflictos y guerras (Ucrania, Sudán, Yemen, República Democrática del Congo) y otros entran a formar parte de redes criminales en diversos lugares del continente (México, Ecuador, Brasil, Perú, Estados Unidos...). Por supuesto, tampoco está establecido el número de los que han muerto en esas guerras. Solamente señalar, que la mayor parte de mercenarios muertos en Ucrania proceden de Colombia. La cifra se estima en unos 550<sup>22</sup>.

**En términos prácticos el asunto es quién le pone el cascabel al gato, es decir, quién se va a atrever a tocar las empresas nacionales y transnacionales del mercenarismo, en donde participan en forma directa exmilitares de la alta oficialidad. Téngase en cuenta que se está hablando de un negocio lucrativo y estratégico en el funcionamiento del capitalismo realmente existente, que genera unos 100 mil millones al año y que en Colombia genera unos 6,7 billones de pesos, (unos 1.660 millones de dólares), lo que representa el 1 % del PIB y emplea, por lo menos, a medio millón de personas.**



## **El mercenarismo no se enfrenta solo con leyes**

En Colombia, un país de un enquistado cretinismo jurídico de tipo santanderista, se supone que para combatir el fenómeno del mercenarismo solo basta con aprobar leyes que lo persigan y lo condenen. A esa vía le ha apostado el gobierno del Pacto Histórico, logrando la aprobación de la Ley 2569 de marzo de 2026.

Allí se establecen sanciones contra quienes financien o entrenen a mercenarios, los cuales se definen como todos aquellos que participen directamente en hostilidades armadas en otro territorio, sin ser nacionales de ese país (porque puede haber colombianos nacionalizados) y que estén motivados por una compensación económica. La Ley ratifica íntegramente, punto por punto, la “Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios”, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 4 de diciembre de 1989.

En Colombia existe un dicho que afirma “hecha la ley, hecha la trampa” que pone de relieve que, aunque en este país se dictan leyes para lo divino y lo humano, su aplicación práctica es mínima, por dos razones fundamentales: una justicia inoperante, de clase, a favor de los poderosos, y una impunidad generalizada. Si estos dos elementos se aplican al estamento militar no son muchas las esperanzas que puede dejar la sola aprobación de una ley.

El asunto es más profundo, como hemos tratado de mostrarlo en este ensayo: se trata de considerar las consecuencias nefastas en la sociedad colombiana de una cultura traqueta, que se ha enquistado en el sentido común de una buena parte de los colombianos, como emerge en estos momentos por parte de la extrema derecha y su candidato presidencial, donde se incita el odio y se llama a liquidar a los oponentes, entre los cuales sobresalen todos los que seamos de izquierda.

El camino es más peliagudo que una simple legislación, porque se trata de impulsar, en términos gramscianos, una *reforma cultural*, una construcción de otros valores que superan la mentalidad traqueta. Eso supone cambios en los medios de comunicación, en los mensajes que circulan por las redes antisociales, en la educación a todos los niveles, en la denuncia y el combate real a los responsables internacionales del mercenarismo, que están en los Estados Unidos. En este sentido, es preciso romper la dependencia militar con el Comando Sur, la fuente nutricia en términos ideológicos, operativos y doctrinarios del mercenarismo en Colombia. También es necesaria una transformación interna del Ejército y la Policía, nudos centrales del mercenarismo. Debe ser abandonado, y este momento no hay visos de que eso esto ocurriendo, la doctrina militar colombiana del enemigo interno, la cantera real para la formación de mercenarios.

Y de la misma forma, debe afrontarse la cultura traqueta, con sus lógicas de enriquecimiento fácil e inmediato, el individualismo agresivo, el anticomunismo visceral, y la profusión de otro tipo de valores. Se trata de desarmar en realidad y de una vez por todas el paramilitarismo

En términos prácticos el asunto es quién le pone el cascabel al gato, es decir, quién se va a atrever a tocar las empresas nacionales y transnacionales del mercenarismo, en donde participan en forma directas exmilitares de la alta oficialidad. Téngase en cuenta que se está hablando de un negocio lucrativo y

estratégico en el funcionamiento del capitalismo realmente existente, que genera unos 100 mil millones al año y que en Colombia genera unos 6,7 billones de pesos, (unos 1.660 millones de dólares), lo que representa el 1 % del PIB y emplea, por lo menos, a medio millón de personas.



Fuente: elopinadero.com.co

---

<sup>1</sup> Iniciativa Africana – agencia de noticias. *El primer ministro de Sudán pidió detener el envío de mercenarios colombianos al país.*

<sup>2</sup> RT en Español. (2026, junio 1). *Video | Colombiano fue capturado por tropas rusas mientras combatía en Ucrania.*  
<https://actualidad.rt.com/actualidad/607889-dejaron-morir-mercenario-colombiano-capurado>

<sup>3</sup> Azzellini, D. (2005). *El negocio de la guerra* (pp. 213 ss.). Txalaparta: Tafalla.

<sup>4</sup> Press, E. (2023). *Trabajo sucio. Los trabajos esenciales y los estragos de la desigualdad* (pp. 20-21). Madrid: Capitán Swing.

- <sup>5</sup> Página 12. (2021, agosto 21). La reconstrucción del asesinato del presidente de Haití: los mercenarios colombianos confesaron paso a paso cómo fue el magnicidio.
- <sup>6</sup> Ver: Vega, R. "La industria de la muerte made in Colombia". *Rebelión*.
- <sup>7</sup> Citado en Scahill, J. (2008). *Blackwater. El auge del ejército mercenario más poderoso del mundo* (p. 23). Barcelona: Paidós.
- <sup>8</sup> La mayor parte de este texto forma parte de la presentación de mi libro *Estados Unidos, un imperialismo sanguinario y sin máscaras. Brutalidad, idolatría y racismo*, Editorial Teoría & Praxis, Bogotá, 2026, próximo a publicarse y que será presentado en la próxima Feria del Libro de Bogotá.
- <sup>9</sup> Montoya, R. (2006). *La impunidad imperial*. La Habana: Ciencias Sociales.
- <sup>10</sup> Restrepo, M. H. (2025, marzo 13). *Mercenarios de guerra convertidos en contratistas*. En *Mercenarios: Criminales de guerra convertidos en contratistas*. El Quinto.
- <sup>11</sup> BBC News Mundo. (2021, julio 21). Jovenel Moïse: la vieja industria de mercenarios colombianos que presuntamente está detrás del asesinato del presidente de Haití.
- <sup>12</sup> Sputnik Mundo. (2025, abril 25). Mercenarios de Colombia: "El norte usa al sur global como carne de cañón".
- <sup>13</sup> El relato se encuentra en J. Scahill, *op. cit.*, pp. 258 ss.
- <sup>14</sup> Ver respecto de esta postura el artículo en que se citan las palabras de Ariel Ávila: Zúñiga, D. (2025, agosto 18). Mercenarios colombianos en el mundo: "Una tragedia nacional". *DW*.
- <sup>15</sup> Arana, B. et al., (2024). *Cartografía verbal del odio en Colombia. Un manual para desarmar las palabras* (p. 200). Bogotá: Fondo de Cultura Económica-Universidad Nacional.
- <sup>16</sup> M. H. Restrepo, *op. cit.*
- <sup>17</sup> El relato se encuentra en: SARGENTO DEL EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA. (2026, abril 20). El reclutamiento de militares colombianos como mercenarios en otros países, junto con los testigos que solicitan protección para ellos y sus familias, podría revelar una profunda verdad sobre engaños y la participación en masacres. Asunto: Denuncia sobre Reclutamiento bajo [<https://t.co/tqo2xkOJaj>]. X.
- <sup>18</sup> Rodríguez Álvarez, S. (2025, agosto 3). Mercenarios colombianos entrenan a niños soldados en Sudán. *La Silla Vacía*.
- <sup>19</sup> Prensa Mercosur. (2025, agosto 7). Colombia | Revelación devastadora: exmilitares colombianos entrenan a menores para la guerra en Sudán.
- <sup>20</sup> Movimiento de Reconciliación y Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos. (2014). "Falsos positivos" en Colombia y el papel de la asistencia militar de Estados Unidos, 2000-2010 (pp. 70 y ss.). Bogotá.
- <sup>21</sup> Mahtani, N. (2026, mayo 11). Escoltas 'made in' Colombia: "Se pelean por nosotros en el extranjero". EL PAÍS.
- <sup>22</sup> Pardo, J. (2026, febrero 25). Colombianos lideran la lista de mercenarios extranjeros muertos en Ucrania: van más de 300. *Infobae*.

# El balón en disputa. Una mirada marxista del fútbol

🕒 junio 15, 2026

📖 128



**Francisco Javier Toloza**

Docente Departamento de Ciencia Política  
Universidad Nacional de Colombia

El mejor árbitro africano, el somalí Omar Artan, no podrá dirigir partidos del Mundial tras ser rechazado por las autoridades migratorias estadounidenses sin razón alguna. La selección de Irán se ve obligada a refugiarse en México y a entrar y salir de Estados Unidos el mismo día de sus encuentros, mientras que sus aficionados han perdido incluso el derecho a asistir a los partidos con entradas de cortesía. La FIFA, por su parte, vetó la camiseta oficial de Haití porque conmemora la Batalla de Vertières de 1803, decisiva en el proceso que convirtió al país en la primera nación independiente de Nuestra América. Mientras Rusia fue excluida de las competiciones futbolísticas oficiales desde 2022, Gianni Infantino otorga un premio de la paz a Donald Trump en medio de intervenciones militares estadounidenses en distintas regiones del mundo. Todo ello ocurre a cambio de un Mundial que, según estimaciones oficiales, facturará cerca de 8.911 millones de dólares y dejará un 56 % de ganancias a la mafia capitalista que lo organiza. Pese a todo lo anterior, la matriz mediática dominante insiste en que no debe mezclarse el fútbol con la política, como si tal separación fuera realmente posible.

## La historia del fútbol es la historia de la lucha de clases

El fútbol es hijo del capitalismo, como el cine, las mafias o la clase obrera. No es posible que exista un fenómeno social -y menos uno tan masivo como el balompié- que no esté atravesado por la omnipresente lucha de clases. Ya Friedrich Engels, en su célebre obra *La situación de la clase obrera en Inglaterra*, relataba cómo aquel campesinado artesano y relativamente autónomo, que había dejado de ser siervo pero aún no se había convertido en proletario, se recreaba jugando con el balón al aire libre entre comarca y comarca, en una práctica precursora del fútbol moderno. Participaban hombres, mujeres, niños y ancianos; todo el pueblo, sin exclusión alguna. Era el llamado Shrovetide football o fútbol de carnaval, que, como su nombre lo indica, constituía una celebración popular, plebeya y festiva. Precisamente por ello fue censurado y perseguido por la Corona británica y por las autoridades religiosas.

Este placer popular fue expropiado a las pobrerías británicas por un doble proceso. Por un lado, por la larga y extenuante jornada laboral impuesta por el capitalismo fabril. Por otro, el juego fue apropiado por los elitistas colegios y universidades de la Inglaterra victoriana. En palabras de E.P. Thompson: “El obrero medio inglés se volvió más disciplinado, más sujeto al ritmo productivo del reloj. Los deportes tradicionales fueron sustituidos por pasiones más sedentarias, dejando en desuso la lucha libre, el viejo fútbol medieval”. Mientras tanto, en Cambridge el fútbol era transformado para ser privatizado. En 1848 se decretaron las reglas del fútbol moderno, rompiendo con su pasado falta de glamour, separándolo de otros deportes y restringiendo cualquier aspecto que les pareciese vulgar a los señoritos ingleses. A imagen y semejanza de la naciente sociedad burguesa, el balompié del capitalismo decimonónico estaba reservado para hombres blancos, ricos, europeos y cristianos, cuya heterosexualidad se asumía como indiscutible.

El balompié era un símbolo de la virilidad, la civilización, la distinción y el control social que enarbolaba el colonialismo británico. Sin embargo, hoy se patea el balón en los cinco continentes, entre personas de todas las clases sociales, géneros, orientaciones sexuales, creencias religiosas y razas.

Sin embargo, al *establishment* futbolístico original se le salió su deporte de las manos, como al peor de los arqueros. El fútbol no exigía costosos implementos, salvo un esférico pateable que se acercase a un balón. Servían césped, tierra, cemento, barro, charcos, arena o baldosas, mientras cualquier objeto marcaba los arcos. Sus reglas sencillas eran aún más simplificables para masificar su práctica. Tampoco era como el golf o el tenis que se conforman con la competencia individual: necesitaba equipos de jugadores y colectivos concentrados que arrastraran masas para jugar y vibrar con los goles. En fábricas, puertos, ferrovías y barcos los encontró. También en las nacientes barriadas y suburbios populares, así como en los conventillos y pensiones de migrantes, pero siempre obligado a romper con las barreras aristocráticas.

El fútbol se hizo plebeyo: se convirtió en la diversión de clases y barrios populares, pueblos oprimidos, razas y credos discriminados. Un equipo de obreros textiles del suburbio industrial de Blackburn se coló en la excluyente FA Cup en 1883 y rompió un primer cerco. La lucha por la jornada laboral de ocho horas, por el descanso dominical y el llamado “sábado inglés”, fue de la mano con la expropiación del balompié a las élites. La clase obrera utilizó sus conquistas para recuperar el balón. En medio de la insalubridad laboral que se expandía con el capitalismo, el ejercicio físico y la recreación eran reivindicaciones de clase, que incluían poder jugar fútbol. Para el comunista Gramsci el fútbol era un reino de la libertad humana ejercida al aire libre, que se definía como la antítesis de los insalubres juegos y vicios de taberna con los que se encadenaba al proletariado.

El gran historiador marxista Hobsbawm reseñará la adopción de los deportes, y en particular del fútbol, como culto proletario de masas: “El carácter urbano y obrero de las multitudes del fútbol es patente. Entre mediados del decenio de 1870, como fecha más temprana, y mediados o finales del de 1880 el fútbol adquirió todas las características institucionales y rituales con las que todavía estamos familiarizados: el profesionalismo, la Liga, la Copa, con su peregrinación anual de los fieles para las manifestaciones de triunfo proletario en la capital, la asistencia regular al partido del domingo, los «hinchas» y su cultura, la rivalidad ritual, normalmente entre mitades de una ciudad o conurbación industrial (Manchester City y United, Notts County y Forest, Liverpool y Everton). El fútbol, que fue creado como deporte de aficionados y edificante por las clases medias de las escuelas privadas, pero se proletarizó rápidamente (antes de 1885) y, por tanto, se profesionalizó”.

**Todo el balompié se convirtió en un lucrativo renglón de acumulación por desposesión, donde las aficiones son tratadas como clientelas obligadas a pagar por todo, mientras los grandes capitales legalizan sus fortunas y obtienen beneficios mediante operaciones especulativas que, según sus críticos, hacen palidecer incluso a la banca y al narcotráfico. En la financiarización, la pelota también infla la burbuja especulativa y los capitales ficticios. El fútbol se convirtió en zona de penumbra para la gran acumulación capitalista, flirteando entre la legalidad y la ilegalidad, siendo ya un auténtico renglón de acumulación por despojo propio de la gran crisis económica en curso. Solo 13 grandes clubes europeos vendieron jugadores por más de mil millones de euros durante este siglo, mientras miles de entidades deportivas quebraron en este mismo periodo en todo el planeta. Pero los sueldos de los futbolistas son ínfimos frente al valor que producen con sus goles, del que se apropian los grandes capitales.**



<https://media.biobiochile.cl/wp-content/uploads/2023/05/social-palestino-keffiyeh-1200x633.jpg>

No alcanzan las líneas para hablar de los clubes fundados por obreros, anarquistas o sindicatos, como parte de la lucha contrahegemónica a principios del siglo XX. Exiliados anarquistas fundaban un 1.º de mayo el Barcelona S.C. de Guayaquil, empezando con la casaca negra de la bandera libertaria antes de ponerse los colores de la estelada catalana. Con uniforme rojo se creaba en La Paternal, el equipo “Mártires de Chicago” que fusionado con “Sol de la Victoria” daría origen a la actual “Asociación Atlética” Argentinos Juniors por lo que aquello de club social les pareció excluyente; mientras tanto, al otro lado del Río de la Plata el hoy club Defensor Sporting de Montevideo era fundado por obreros del vidrio de Punta Carretas bajo el nombre “Defensores de la Huelga”. Su difusión y promoción hacia las más amplias masas en la URSS y los estados socialistas merecerían capítulo aparte, pero no queda duda de la adscripción ideológica de clubes fundados bajo nombres como Partisano, Estrella Roja, Revolución de Octubre, Stalinistas, Stajanovistas o Espartaco.

Como la clase obrera, el balón también llegaba con el colonialismo del Reino Unido al mundo entero, pero cada día era menos británico y más plebeyo. Con el capital inglés y sus empresas, la pelota rodó por toda Europa entrando por los mares y el Danubio; desembarcaba con las tropas de Su Majestad en las costas africanas y asiáticas de sus dominios de ultramar; mientras cruzaba el Atlántico hacia Nuestra América llamándose todavía *foot-ball*, favorecido además por la pretensión anglófila de las élites criollas. Fue promovido como parte de un modelo educativo que veía en el fútbol -como en todo lo inglés- una institución disciplinadora y civilizadora. Entró al Perú y al Río de la Plata con los equipos de críquet, clubes y colegios inicialmente circunscritos a escoceses e ingleses, o a Brasil con los clubes de remo y regatas del patriciado blanco de Río de Janeiro; con algo de retraso llegó por barco al puerto de Barranquilla y por ferrocarril a Cúcuta junto a trabajadores e ingenieros de estos enclaves, que terminarán fundando los dos equipos centenarios del fútbol colombiano. Pero pronto los locales se le metieron a la cancha a los aristócratas europeos fundando sus propios equipos para originarios, como el Alianza Lima o el Nacional de Uruguay, eliminando las barreras raciales -como se logró en torneo carioca en 1923- y abandonando los anglicismos obligatorios para la práctica de este deporte, de los que, no obstante, quedan huellas indelebles en los nombres de los clubes, tradiciones futboleras y hasta en los dejos de los narradores.

Pese al machismo imperante, las mujeres también entraron a la cancha. Se datan partidos y equipos femeninos en la semiclandestinidad desde las postrimerías del siglo XIX, organizados por figuras legendarias de las que ni siquiera tenemos certeza de sus nombres reales, porque debían usar seudónimos para su seguridad. Luchadoras ligadas al naciente movimiento sufragista y por los derechos de las mujeres, como “Nettie Honeyball” (Mary Hutson) o “Mrs. Graham” (Hellen Matthews) fundaron en 1894 el British Ladies Football Club, presidido nada más y nada menos que por la escritora precursora del feminismo Florence Dixie. Este club será pionero no solo en romper las barreras de género del fútbol, sino de raza, al incluir a Emma Clarke, la primera futbolista negra, 20 años antes de que en Brasil el goleador Friedenreich todavía tuviera que echarse polvo de arroz en su rostro y alisarse el pelo para que no fuera descalificado por mulato.

Exploradora, luchadora por la igualdad de género y adelantada a su época pese a su origen noble, Dixie tenía claro el carácter subversivo del fútbol practicado por mujeres: “Es el pasatiempo que les garantizará salud y ayudará a destruir ese monstruo de cabeza de hidra que es el vestido actual de la mujer”, afirmaba en plena era victoriana. Con estas palabras aspiraba a demostrar que las mujeres no eran las criaturas ‘ornamentales e inútiles’ que los hombres habían imaginado y que no existía razón alguna para que no pudieran jugar al fútbol y hacerlo bien, siempre que abandonaran el atuendo que, como una camisa de fuerza, la moda les imponía.

Con la mayor proletarización de las mujeres europeas, acelerada durante la I Guerra Mundial, se inició la popularización del fútbol entre las trabajadoras británicas y la irrupción de equipos de obreras, como había sucedido con el balompié masculino. Mientras los hombres eran absorbidos en la guerra interimperialista de trincheras, trabajadoras textiles, de la industria bélica y la metalurgia llenaban estadios en sus partidos y destinaban los fondos para sus hermanos de clase que regresaban lisiados del combate de un conflicto que no era el suyo. Por celos y patriarcado, las mujeres tuvieron que enfrentar la prohibición expresa de la FA inglesa desde 1921 -que les vetó el uso de instalaciones oficiales e impuso sanciones a los clubes masculinos que se las facilitaran-, así como el desconocimiento de la FIFA hasta la década de 1980 y del Comité Olímpico hasta Atlanta 1996. Que las proletarias jugaran al fútbol fue considerado pernicioso para el *statu quo*, que apelaba a falsos criterios de salud cuando en realidad solo operaban prejuicios de burda moralina. Ver a mujeres proletarias jugando al aire libre y sin faldas rompía con el ideal de dama burguesa ligada al hogar y la maternidad. Así, en Inglaterra no solo se inventó el fútbol, sino también su prohibición para la mitad de la población; una proscripción a la que se sumaron Alemania -desde Hitler hasta los años setenta-, Francia durante las mismas décadas y Brasil hasta la caída de la dictadura militar.

## El negocio redondo

El mismo capital que convirtió en mercancía todo cuanto tocó no podía hacer menos con el fútbol. La profesionalización, una conquista de los futbolistas sin linaje -que no podían vivir para la pelota sin vivir de la pelota-, dio paso también a la plena mercantilización del deporte y al progresivo desplazamiento del amateurismo y del juego como simple diversión. Así nació una clase obrera del balón que, pese a sus relativamente buenos ingresos, fue sometida tempranamente a formas semiesclavas de contratación. El deporte dejó de ser solamente deporte y fue poseído por la lógica de la competencia capitalista para un mercado masificado de consumo. Tras algo más de medio siglo, el balompié giró de diversión de ricos a pasión de masas y, por ello, fue prontamente convertido en lucrativo negocio capitalista. Con la plusvalía extraída a la clase trabajadora, las empresas capitalistas crearon y compraron clubes, de la Bayer a Postobón, de la Hyundai a Televisa, de la Phillips a la FIAT, de la franquicia de los equipos Red Bull a los carteles de la cocaína, de la Samsung a la Volkswagen, de los clubes-estado de los petrojeques árabes a las denominadas “sociedades anónimas deportivas” que promueve Milei para Argentina.

Todo el balompié se convirtió en un lucrativo renglón de acumulación por desposesión, donde las aficiones son tratadas como clientelas obligadas a pagar por todo, mientras los grandes capitales legalizan sus fortunas y obtienen beneficios mediante operaciones especulativas que, según sus críticos, hacen palidecer incluso a la banca y al narcotráfico. Lucro y exclusión suelen ir de la mano. Por eso, la quimera neoliberal de liquidar al proletariado incluye también despojar al fútbol de su sello de clase, como lo señalara Mark Fisher. Así lo evidenció Thatcher en los años ochenta, al quebrar la tradición obrera de la Premier League, reconvertida desde entonces en un torneo progresivamente gentrificado en su competitividad, sus propietarios, su público, el origen de sus protagonistas, sus sistemas de transmisión, sus salarios e incluso sus escenarios deportivos. Entradas de más de 10.000 dólares para partidos del Mundial, paquetes televisivos de costos leoninos, privatización de estadios -como el caso del “Nuevo Campín” de Bogotá para el Grupo Aval-, un arsenal de artículos de mercadeo de dudosa utilidad, la creciente elitización de los implementos básicos para la práctica futbolística, la creación de mercados especializados de videojuegos y aplicaciones, o la conversión de los jugadores en anuncios ambulantes, constituyen apenas la punta del iceberg de este lucrativo negocio.

La producción de fuerza de trabajo calificada es un renglón más potente. Los futbolistas ahora solo pueden ser “producidos” por lo consorcios que subsisten en un mercado cada vez más oligopólico. Los grandes clubes europeos compran niños tercermundistas o hijos de migrantes por un puñado de dólares para venderlos por varios millones antes de cumplir 18 años. En la financiarización, la pelota también infla la burbuja especulativa y los capitales ficticios. El fútbol se convirtió en zona de penumbra para la gran acumulación capitalista, flirteando entre la legalidad y la ilegalidad, siendo ya un auténtico renglón de acumulación por despojo propio de la gran crisis económica en curso. Solo 13 grandes clubes europeos vendieron jugadores por más de mil millones de euros durante este siglo, mientras miles de entidades deportivas quebraron en este mismo periodo en todo el planeta. Pero los sueldos de los futbolistas son ínfimos frente al valor que producen con sus goles, del que se apropian los grandes capitales.

**Ni futbolistas ni hinchadas -por lo menos no sus mayorías- tienen responsabilidad alguna en los retorcidos manejos de la mafia del balompié o del uso abusivo del orden social vigente de la pasión de multitudes. Puede haber fútbol sin directivos, nunca sin jugadores ni jugadoras; tampoco sin fanaticada; hinchas y deportistas son la esencia del juego, no los mercachifles ni los politiqueros. Quienes nos emocionamos pateando un balón o viéndolo correr, inicialmente solo buscábamos recreación que eclipsara el hambre en medio de una sociedad excluyente, salud física ante el trabajo enajenado y repetitivo, o libertad en medio del adoctrinamiento ideológico del sistema educativo. Hoy es válido soñar con que otro juego es posible: el fútbol para quienes lo crean y lo transpiran en canchas y tribunas. La pelota como derecho y disfrute, y no como opio del pueblo.**



Solo en 2015 se transfirieron casi 14.000 jugadores desde América Latina hacia el exterior; el 80 % recaló en equipos europeos, sobre todo de las cinco grandes ligas. La asimetría financiera y el intercambio desigual entre centro y periferia en el fútbol actual es tal, que, en el ranking de clubes más vendedores del siglo XXI, solo hay tres sudamericanos entre los 50 primeros y todos después del puesto 44. Según las normatividades de FIFA el club vendedor se queda con el 75 % del valor de la venta de un jugador, éste apenas con el 15 % y los equipos e instituciones que lo formaron desde su infancia hasta el profesionalismo reciben menos del 5 %. Sin embargo, durante los últimos años, este porcentaje apenas ha llegado al 1,5 %. Pareciera que la sentencia de Marx sobre la apropiación privada del producto del trabajo social tuviera como ejemplo al mercado del fútbol.

Las grandes casas de apuestas dueñas de clubes, futbolistas y hasta de torneos completos, hacen realidad el sueño financiarizado del capitalismo de casino, influyendo en los resultados como lo hacía la mafia desde el siglo pasado. Los emporios mediáticos han privatizado la transmisión de los partidos -y hasta de los goles-, en negociaciones fraudulentas que solo ceban los réditos de los magnates del balón. Ha irrumpido una facción de clase parasitaria de agentes y mercachifles del fútbol, que insuflan precios de pases de sus apoderados fletando prensa, entrenadores y directivas, sin preocuparse en nada por el desempeño deportivo, condiciones médicas o adaptación de los jugadores. Burócratas que jamás han pateado una pelota maquinan por un Mundial cada 2 años y con participación de 64 países, y una sarta de torneos sin sentido alguno para saturar aún más el ya extenuante calendario y dejar sin piernas a futbolistas, que como los gladiadores romanos detrás de su fama y comodidad seguían siendo esclavos. Coimas y sobornos delirantes a políticos -y de políticos-, empresarios y dirigentes deportivos. Operaciones de blanqueo de capitales, especulación y genuinas burbujas de valores soportan hoy que el fútbol sea el “deporte rey” de la actual época histórica, que logró transfigurar en imagen y semejanza del capitalismo financiero.

## Fútbol y política, política y fútbol

De la Guerra del Fútbol -donde la eliminatoria rumbo a México 70 sirvió de mera excusa para un conflicto bélico entre dictadorzuelos bananeros de Honduras y El Salvador- al «partido fantasma» de 1973, el vergonzoso repechaje disputado con la cancha vacía en el Estadio Nacional de Santiago, cuando la URSS se negó a jugar contra Chile en un campo de concentración apenas días después del golpe de Estado.

El fútbol es el tristemente mítico Partido de la Muerte, donde los cesantes futbolistas soviéticos del Dinamo de Kiev, refugiados en un equipo de panadería, derrotaron en 1942 a los invasores de la Fuerza Aérea nazi y luego pagaron con sus vidas; pero también es la Tregua de Navidad de 1914, cuando británicos y alemanes, que se mataban por defender intereses ajenos, disputaron un partido para recordar que, como decían Rosa Luxemburgo y James Connolly, la guerra no era entre los pueblos.

La pelota va de la selección argelina del FLN, que entre 1958 y 1962 hizo diplomacia anticolonial en plena guerra de liberación con franco-argelinos fugados de la selección gala a las puertas del Mundial de Suecia, a los magnates politiqueros como Berlusconi, Macri, Char, Peña Nieto o Piñera, que se encumbraron electoralmente desde el gansterismo futbolístico que compra clubes para manipular aficiones y conseguir electores.

Es el paraíso fiscal -y de toda índole- con estatus diplomático pactado por la dictadura paraguaya de Stroessner para la CONMEBOL en Luque, pero también el club Saint Pauli alemán izando la bandera pirata anticapitalista, antifascista, antirracista y defensora de los derechos LGTBIQ+ en la Bundesliga.

Va de Caszely gambeteando a Pinochet en un metro cuadrado, dejándolo con la mano estirada y denunciando la tortura de su madre en la campaña del NO, a Neymar arrodillado ante Bolsonaro para favorecer la perpetuación de sus privilegios fiscales.

El fútbol es la «democracia corinthiana», con Sócrates y Casagrande a la cabeza, donde hasta el personal médico, de aseo y de utilería votaba en igualdad de condiciones con el plantel y las directivas. Se decidía colectivamente desde la táctica de juego hasta los horarios de trabajo. “Ganar o perder, pero siempre en democracia”, decía el Timão en un Brasil sometido a la dictadura; pero el fútbol también son los sobornos de los petrodólares del emir de Qatar para comprar su Mundial, con todo y FIFA-Gate.

Va de los ultras fascistas de la Lazio, el Dinamo Zagreb, el Legia Varsovia o los sionistas del Beitar Jerusalem, a las hinchadas de izquierda del Livorno, el Omonia Nicosia, el Hapoel Jerusalem o las célebres barras Green Brigade, Bukaneros, Garra Blanca y Los de Abajo.

Son las futbolistas colombianas, sin liga profesional, entrando a la cancha con el puño en alto y realizando grandes actuaciones en todas las categorías, frente a los patriarcas de Jesurún, Alzate y la Federación Colombiana de Fútbol.

Es Megan Rapinoe conquistando la igualdad salarial y protestando contra la homofobia de Trump y la sentencia prohibicionista sobre el aborto de la Corte estadounidense, mientras Pelé aplaudía a Havelange y Platini delinquía junto a Blatter.

Son los soldados conservadores jugando con las cabezas de campesinos durante La Violencia en Colombia -dantesco espectáculo que las AUC repetirían en Urabá al final del siglo XX-, mientras, para acallar el Bogotazo, se inauguraba una liga pirata, incluso para la FIFA.

La pelota que no se mancha es la del Diego Maradona encabezando las marchas para hundir el ALCA en Mar del Plata en las narices de Bush; la pelota de tachas imborrables es la de los nazis de la Falange y la División Azul, inventándose el Atlético Aviación y apoderándose de toda la jerarquía del fútbol español durante el franquismo.

El fútbol es Kissinger sirviendo a Videla, intimidando en el camerino al equipo peruano en plena semifinal del Mundial 1978, pero también el Kaiser Rojo, Paul Breitner quien, llamado a capitanear a la RFA entonces campeona del mundo, se negó públicamente a ser un “eunuco político” según sus términos y cohonestar con el lavado de imagen de la dictadura.

El balompié es el Derry F.C. saliéndose de la liga del Ulster para jugar en Irlanda en medio de los “Troubles”, burlándose de las fronteras oficiales, mientras que el Sheriff Tiraspol como buen representante de Transnistria independiente, no reconoce la autoridad del estado de Moldavia, pero sí campea en su liga de fútbol.

Es la pasión del anarquista Alejandro Finisterre ingeniándose el fútbol en plena Guerra Civil Española para los republicanos sin piernas que no podían patear un balón, y la dignidad de la patada antifascista de Éric Cantona por la que se negó a pedir perdón; es el veto de la Federación colombiana a nuestra “10” Yoreli Rincón por las denuncias de acoso y manejos turbios en la selección, pero también la Balón de Oro noruega Ada Hegerberg vetando a su Federación nacional y a la FIFA en el Mundial de 2019 por las desigualdades estructurales con el fútbol masculino, más allá de los sueldos.



<https://files.winsports.co/cms/2025/12/22172945/Asi-le-fue-a-la-seleccion-Colombia-Femenina-en-2025.jpg>

Es Di Stefano raptado por Santiago Bernabéu con el guiño de las autoridades de Franco para que no cumpliera su contrato con el Barcelona, sino que liderara el Real Madrid convertido en embajada andante del régimen; y también Di Stefano retenido por la guerrilla venezolana de las FALN para publicitar su lucha.

El fútbol es la Francia negra y musulmana que deslumbra desde el 98, gracias a alinear esencialmente migrantes e hijos de sus excolonias a cantar La Marsellesa, revaluando el mito del Estado nacional europeo y generando las rabietas de los Le Pen y la derecha xenófoba, pero también son las selecciones de Marruecos o Senegal de “europeos”, hijos de la diáspora de sus pueblos que sostiene la producción de las economías del llamado Norte global, y que aunque hayan nacido, crecido y jugado fuera de su territorio, se ponen la camiseta de África.

La selección alemana multiétnica desde inicios de este siglo, que humilla el mito nazi de la raza aria, echada a pito de Qatar por salir a la cancha tapándose la boca en protesta a la monarquía liberticida. El balompié son las barras de los equipos colombianos participando del Paro Nacional para repudiar al gobierno uribista de Duque -¡nombrado en la fundación social de la FIFA!-, y los jugadores de la selección Colombia coqueteando con la derecha criolla, tanto como el fascismo pretende instrumentalizar su camiseta.

Se nos tornaría inacabable enumerar exhaustivamente la indisoluble unión de política y balompié. El fútbol está preñado de contradicción, porque no es ajeno a la dialéctica.

En este Mundial de Trump habrá más imágenes icónicas de opresión y resistencia, como ya empezaron a darse con las humillantes requisas y retención del goleador iraquí Aymen Hussein, o cuando salte a la cancha la República Democrática del Congo y su hinchas Michel Kuka Mboladinga, -quien tuvo que ser incluido en la delegación oficial de su selección para que le dieran la visa- se pose en la tribuna representando a Patrice Lumumba, para recordarle a los imperialistas sus crímenes.

## En la cancha del poder

Presenciamos el último Mundial en un califato medieval, gracias a las coimas en las que está involucrada hasta la diplomacia de la Unión Europea. Una Copa que implicó la tumba para 6.500 trabajadores migrantes, en medio de la validación con presencia de mandatarios mundiales de un régimen autoritario, sexista, homófobo y antidemocrático. Ahora se jugará un Mundial para la propaganda global de un imperio en decadencia cuyas políticas xenófobas impiden incluso el normal desarrollo del espectáculo. Como todo tirano, se verá a Trump entregando su propio trofeo deportivo en medio de un silencio cómplice de cualquier autoridad internacional.

La indignación es válida, la sorpresa no. Es la misma mafia de la FIFA que le dio un Mundial a Mussolini en el 34, a la dictadura perfecta del PRI en el 70 tras la Masacre de Tlatelolco, a la Junta Militar argentina en el 78 y que le había dado su mundial al III Reich -en lo que hubiese sido Alemania 42- si el nazismo no hubiese precipitado la II Guerra. La FIFA es una transnacional del crimen con legislación paralela y vendida al mejor postor, que le otorgó la sede del Mundial del 86 a Colombia en la época más tenebrosa de ascenso de los carteles del narcotráfico, el estatuto de seguridad y la guerra sucia, mientras el Ejército masacraba hinchas en el Estadio Alfonso López de Bucaramanga. La Mafia del fútbol que todo lo corrompe y nada la toca. La que le quitó el Mundial Juvenil a Indonesia por no recibir a Israel, pero que le permite a este país seguir compitiendo en la UEFA en pleno genocidio en Gaza. Que nadie olvide que al directivo del modesto club Progreso de Montevideo, el socialista Tabaré Vázquez, le quedó más fácil ser presidente de su país, que de la AUF por las presiones de estos usurpadores del balón. Pero también recordemos que el abusador presidente de la RFEF, Luis Rubiales, fue derrocado y suspendido después de la agresión a la futbolista Jeni Hermoso, gracias a la campaña en su contra dirigida por las campeonas del mundo.

Los posicionamientos políticos no son buenos para un régimen mercantil que castra el juego y el deporte como espectáculo venal. Hoy se ataca a Pep Guardiola y Lamine Yamal por su apoyo solidario a Palestina. Pero quepa recordar a Kelme censurando al jugador independentista del FC Barcelona, Oleguer Presas, por apoyar la huelga de hambre del preso político Iñaki de Juana Chaos. Sin embargo, cada vez son más comunes las y los futbolistas profesionales que, sensibles a las problemáticas sociales o políticas, no temen opinar a contracorriente, como el Búfalo Ovelar, el alemán Goretzka, la argentina Macarena Sánchez o la norteamericana Alex Morgan, o entrenadores como Klop o Bielsa. Además -y sobre todo- cada vez más irrumpen experiencias futbolísticas alternativas: el llamado "fútbol popular"; corrientes de democratización de los clubes; barrismo social y militancia revolucionaria en las tribunas; asociaciones deportivas con principios rebeldes; escuelas, equipos y torneos incluyentes hacia los sectores marginados del gran fútbol capitalista oficial; campañas y prácticas contra el aún hegemónico machismo futbolero; lucha por garantías y derechos de las y los deportistas, entre tantas otras. Afortunadamente el fútbol no es solo el Mundial de la FIFA.

Pero justamente por todo lo anterior, el fútbol ha sido y seguirá siendo un terreno en disputa. Negocio ingente del gran capital en un mercado más especulativo que el sector financiero. Apropiación y subversión popular, que de cada cuando en cuando desborda y redimensiona la institucionalidad oficial de este deporte. Campo de dignidades y de concurrencia de resistencias, dentro y fuera de la cancha. El fútbol espectáculo instrumento de alienación y herramienta de dominación política. El fútbol pasión popular, diversión, deporte, salud y punto de encuentro de las barriadas, de la juventud, de las amistades, de las y los trabajadores, y de naciones y pueblos. El balompié -como cualquier actividad humana- está determinado por la política, la economía y la ideología, que constituyen auténticos campos de batalla. Del mismo modo en que el fútbol termina entrecruzado por todas estas dimensiones de la lucha social y política, la pelota también salta y rueda por esas otras canchas de la experiencia humana, influyendo en cada una de ellas.

Ni futbolistas ni hinchadas -por lo menos no sus mayorías- tienen responsabilidad alguna en los retorcidos manejos de la mafia del balompié o del uso abusivo del orden social vigente de la pasión de multitudes. Puede haber fútbol sin directivos, nunca sin jugadores ni jugadoras; tampoco sin fanaticada; hinchas y deportistas son la esencia del juego, no los mercachifles ni los politiqueros. Quienes nos emocionamos pateando un balón o viéndolo correr, inicialmente solo buscábamos recreación que eclipsara el hambre en medio de una sociedad excluyente, salud física ante el trabajo enajenado y repetitivo, o libertad en medio del adoctrinamiento ideológico del sistema educativo. Hoy es válido soñar con que otro juego es posible: el fútbol para quienes lo crean y lo transpiran en canchas y tribunas. La pelota como derecho y disfrute, y no como opio del pueblo.

# Bolivia en llamas: La rebelión de lo comunitario contra el fraude político

🕒 junio 15, 2026

📖 128



**Pilar Lizárraga Aranibar**

Miembro Comité Directivo CLACSO

**Carlos Vacaflares R.**

Director Académico JAINA

Miembro del GT Estudios Críticos del Desarrollo Rural CLACSO

La historia de la lucha social en Bolivia no se inicia con las movilizaciones que hoy sacuden los cimientos de un frágil pacto social, pero sí tienen antecedentes recientes que explican el desborde de la convivencia pacífica en la sociedad boliviana. El golpe de Estado de 2019, que derrocó al gobierno electo de Evo Morales, constituye un hecho relevante en la memoria reciente, pues trastocó la gráfía del poder en la Bolivia Plurinacional e impuso un tiempo marcado por el retorno de la violencia colonial y por una crisis política, económica y social que ha conducido al quiebre de las bases del Estado y de la sociedad. Como continuidad de este desfalco institucional, se encuentra el gobierno de Luis Arce que, desde el momento en que asumió la presidencia en 2020, generó una fractura con la estructura política del bloque popular comunitario e inició un camino orientado a proscribirlo y a anclar su representación mediante estructuras prebendales. Sus acciones configuraron un campo minado que imposibilita el ejercicio de los derechos políticos de las representaciones propias del MAS-IPSP con la candidatura de Evo Morales. De este modo, se materializó el asalto al instrumento político MAS-IPSP mediante la apropiación de su estructura a través de un golpe institucional, concretado por medio del manejo de la burocracia estatal y de la manipulación de los órganos del Estado para proscribir del campo político al bloque popular.

En los siete años transcurridos desde el golpe de Estado de 2019, se ha configurado una nueva grafía del poder, resultado de la proscripción premeditada del bloque popular y de la apertura de canales para el retorno de grupos fascistas a las arenas políticas. Esto se ha materializado en representaciones dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional, las asambleas departamentales y diversos cargos de las estructuras ejecutivas en los niveles nacional y subnacional de gobierno. Todo ello ocurre en un contexto de policrisis que se expresa en el deterioro de la institucionalidad democrática, la corrupción estatal, el deterioro de la economía y la vulneración de los derechos de las y los bolivianos.

En este contexto, las elecciones generales de 2025 abren un tercer ciclo reciente de despojo y violencia colonial contra el núcleo de lo comunitario. El bloque popular, proscrito de las elecciones nacionales, visualizó en Edman Lara, candidato a la vicepresidencia de Rodrigo Paz, una posibilidad para instalar un gobierno de transición que respetara la Constitución Política del Estado y las conquistas sociales logradas en los últimos 20 años. Rodrigo Paz, quien era el candidato “nuevo” a la presidencia, vio en la proscripción del candidato del bloque popular una oportunidad histórica para canalizar el respaldo popular que le permitiera avanzar un peldaño más en su carrera política de varias décadas. La articulación del voto popular se materializó a partir de la oposición a la agenda del candidato conservador, mediante una campaña de a pie que construyó una identidad vinculada a las estructuras comunitarias que le brindaron respaldo popular. Al mismo tiempo, mantuvo encubiertos los acuerdos subterráneos con el gobierno de Trump para subastar Bolivia y convertirla en el epicentro de las operaciones del Escudo de las Américas. De esta manera, se configuró un fraude electoral que encumbraría a un régimen entreguista y servil al imperio, cuyo único obstáculo era el tejido comunitario que sustenta la transformación radical de la sociedad y del Estado colonial. Con estos sujetos había establecido un pacto político para ganar las elecciones de 2025, al que traicionó inmediatamente después de asumir la Presidencia.

La gestión del gobierno de Paz se caracteriza por un giro hacia la derecha, así como por alianzas y estrategias de articulación con el denominado Escudo de las Américas, que desata una feroz ola de agresión contra los gobiernos populares del continente, expresada en hechos como el secuestro de Maduro y la criminalización de Castro y Evo Morales. A nivel nacional, ha primado un pacto con los grupos fascistas de 2019, los cuales se han beneficiado de la parcelación de los espacios de representación dentro del poder ejecutivo. Esto ha permitido el establecimiento de una hegemonía de grupos empresariales del Oriente en dichas instancias, abriendo las vías para el despojo de las riquezas estratégicas del territorio.

Durante el inicio del conflicto, la injerencia extranjera en Bolivia se hizo pública a través de la tutela política ejercida por el asesor argentino Fernando Cerimedo sobre el presidente Paz y del sospechoso envío de supuesta “ayuda humanitaria” por vía aérea por parte del gobierno de Javier Milei, así como de posteriores ayudas provenientes de Paraguay, Chile y del gobierno de Trump. Estas acciones “solidarias” despertaron alarmas inmediatas ante el riesgo inminente de que dichos vuelos encubrieran material bélico y gases lacrimógenos destinados a la represión, repitiendo el nefasto antecedente de 2019, cuando se camufló armamento extranjero para consolidar masacres contra el pueblo. Asimismo, se temía que estos dispositivos fueran utilizados para el secuestro y asesinato de Evo Morales, quien se encuentra en el trópico de Cochabamba. Ante este atropello al pacto político y a la soberanía nacional, autoridades electas y organizaciones sociales repudiaron enérgicamente esta intromisión colonialista, exigiendo total transparencia sobre los cargamentos y el cese inmediato de la tutela y la injerencia internacional.

**En los siete años transcurridos desde el golpe de Estado de 2019, se ha configurado una nueva grafía del poder, resultado de la proscripción premeditada del bloque popular y de la apertura de canales para el retorno de grupos fascistas a las arenas políticas. Esto se ha materializado en representaciones dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional, las asambleas departamentales y diversos cargos de las estructuras ejecutivas en los niveles nacional y subnacional de gobierno. Todo ello ocurre en un contexto de policrisis que se expresa en el deterioro de la institucionalidad democrática, la corrupción estatal, el deterioro de la economía y la vulneración de los derechos de las y los bolivianos.**



<https://www.elperiodista.cl/wp-content/uploads/2020/08/WhatsApp-Image-2020-08-11-at-12.59.13.jpeg>

Con una narrativa basada en el “Estado tranca”, una “Bolivia del futuro” y el “narcoterrorismo”, Rodrigo Paz instala una estrategia de criminalización del bloque popular y de desmantelamiento del Estado Plurinacional, mediante alianzas con sectores empresariales del Oriente para impulsar acciones orientadas a reducir la capacidad de acción del tejido comunitario y de la institucionalidad estatal. Avanza, además, con una maquinaria mediática que va instalando en la sociedad la noción del narcoterrorismo y la criminalización de Evo Morales, así como de un movimiento campesino, indígena y popular que se encuentra en resistencia. Durante su gestión gubernamental se ha recortado la representación vicepresidencial y se ha gobernado mediante decretos presidenciales, prescindiendo de la Asamblea Plurinacional. Estas acciones han acumulado un creciente malestar en la población, exacerbado por los inaceptables niveles de corrupción, como los casos de las narco-maletas y la gasolina basura; por una crisis económica cuya resolución no es clara, y por la polarización y exclusión de los sectores populares y comunitarios.

En este esquema de poder, la restitución del poder oligárquico del Oriente del país se sustenta en el tratamiento de los derechos agrarios para garantizar la rearticulación material de los latifundios -afectados durante el ciclo de gobierno de Evo Morales- e intentar nuevamente anclar la proyección de un nuevo ciclo de despojo de la tierra contra lo comunitario. Asimismo, se apoya en el retorno de las élites a la estructura del poder ejecutivo para implementar la agenda de la denominada Nueva Bolivia.

La promulgación del Decreto 5503, en diciembre de 2025, desencadenó una protesta encabezada por la COB que obligó al gobierno a abrogarlo. Posteriormente, esta orientación se expresó en un conjunto de decretos y leyes en el mismo sentido, generando nuevos escenarios de movilización que exigían el respeto a la CPE y a los acuerdos suscritos con las organizaciones.

La promulgación de la Ley 1720, en abril de 2026, desató una profunda polémica y movilización en el seno del movimiento campesino e indígena, dando paso a la Marcha Campesina Indígena, que partió el 8 de abril desde Porvenir, Pando, recorriendo más de 1.000 kilómetros hasta llegar a La Paz. En el trayecto se fueron sumando diversos actores que respaldaban la demanda de abrogación de la Ley 1720, así como la atención de reivindicaciones sectoriales y sociales que terminaron confluyendo en una exigencia generalizada del campo nacional-popular: la renuncia del presidente Paz. Inicialmente, esta demanda se justificó por la incapacidad del gobierno para resolver la problemática social y económica, así como por la traición a la base electoral con la que había establecido un pacto político. Sin embargo, con la agudización de la violencia derivada de las medidas represivas empleadas para desbloquear las rutas y afrontar la crisis, el conflicto podría transformarse en una confrontación de naturaleza más clasista o incluso racista.

La movilización social, en un contexto de violencia estatal contra el pueblo, va desplegando una diversidad de dispositivos de resistencia, como las marchas, los bloqueos y los cabildos. Las marchas son organizadas por los sectores sociales movilizados, como la denominada Por la Vida para Salvar Bolivia, que parte de Caracollo el 12 de mayo con destino a la ciudad de La Paz para sumarse a los sectores que realizan movilizaciones entre las ciudades de El Alto y La Paz, llegando a esta última con una agenda en defensa de Bolivia. A ello se agregan marchas cotidianas protagonizadas por diversos sectores, como el magisterio, los gremiales, el transporte y los campesinos, que van expresando la inviabilidad del ejercicio político del gobierno de Paz, el cual, ante la ausencia de estructuras sociales que lo respalden, se ve reducido a recurrir a la fuerza represiva para poder gobernar. Asimismo, marchas campesinas provenientes de las entrañas de los valles andinos altos y bajos se dirigen hacia la ciudad, siendo violentamente reprimidas por las fuerzas policiales.

Los medios de comunicación oficialistas van tejiendo explicaciones políticas orientadas a descalificar estas movilizaciones. Inicialmente, afirman que se trata de minorías que tienen secuestrado a todo un país, a las que acusan de vandalismo y delincuencia, respondiendo supuestamente a una agenda del narcoterrorismo que busca destituir a un presidente electo. El propio presidente Paz declara que no negociará con “vándalos”, en alusión a los excesos cometidos durante las marchas, probablemente montados y ampliamente difundidos por la prensa oficialista. Con ello, justifica la emisión de órdenes de detención contra los dirigentes de los sectores movilizadas, a quienes se intentó suplantar mediante la firma de acuerdos de entendimiento con supuestos representantes, desconocidos de manera inmediata por la población movilizada.

Con la experiencia de la frustrada movilización de diciembre de 2025, las organizaciones aplican estrategias internas de control de la dirigencia para impedir que firmen ningún acuerdo sin consulta y aprobación de los sectores movilizadas, de manera que los dirigentes manifiestan en declaraciones públicas que han sido “sobrepasados” por las bases, y que se convierten solo en portavoces de las decisiones colectivas, con lo cual su capacidad de acordar algo con el gobierno queda supeditada a la consulta con las bases.

Asimismo, se activan los pactos y acuerdos entre las estructuras organizativas matrices, los cuales se dan a conocer en espacios ampliados y masivos, como los cabildos, que se constituyen en mecanismos de deliberación y presión social. En estos escenarios se rechaza el diálogo con el gobierno y se exige la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

La estrategia operativa de las marchas por las calles paceñas es acompañada por la instalación de bloqueos de carreteras, de los cuales existen reportes diarios de agencias oficiales que registran más de 100 puntos de bloqueo en las principales rutas troncales, desde el Oriente hasta el Occidente del país. En algunos de estos puntos se acumulan más de 35 días de movilización continua para exigir la renuncia del presidente.

Desde el inicio de los bloqueos, el bloque oficialista aplica una medida judicial dictaminada por un juez y camuflada como una iniciativa ciudadana para obligar a los bloqueadores a levantar sus medidas. Esta disposición deriva en la criminalización de la protesta, el secuestro y la detención de dirigentes -que, según informes de derechos humanos, alcanza la cifra de 365 detenidos y 10 fallecidos-, al personalizar en ellos la responsabilidad legal por la infracción tipificada en dicha medida. Lejos de amedrentar o desanimar a los movilizadas, estas acciones provocan, por el contrario, una masificación e intensificación de la protesta. Como respuesta, el gobierno recurre al uso de la fuerza pública para retomar el control de un país que se encuentra deliberando y que ha definido que la única vía para alcanzar la pacificación es la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

**Con una narrativa basada en el “Estado tranca”, una “Bolivia del futuro” y el “narcoterrorismo”, Rodrigo Paz instala una estrategia de criminalización del bloque popular y de desmantelamiento del Estado Plurinacional, mediante alianzas con sectores empresariales del Oriente para impulsar acciones orientadas a reducir la capacidad de acción del tejido comunitario y de la institucionalidad estatal. Avanza, además, con una maquinaria mediática que va instalando en la sociedad la noción del narcoterrorismo y la criminalización de Evo Morales, así como de un movimiento campesino, indígena y popular que se encuentra en resistencia. Durante su gestión gubernamental se ha recortado la representación vicepresidencial y se ha gobernado mediante decretos presidenciales, prescindiendo de la Asamblea Plurinacional.**



Este tema resultó ser un aspecto fundamental en el tratamiento del conflicto ante la ausencia de una voluntad clara de diálogo y la existencia de una agenda orientada hacia una salida violenta, liderada por los sectores de derecha con los que el gobierno había establecido una alianza. Estos sectores exigían airadamente que el presidente “gobierne” haciendo uso de la fuerza, mediante la declaración de un estado de excepción que facultara a las Fuerzas Armadas a salir de los cuarteles y apoyar a la Policía en el restablecimiento del orden. En un cálculo político bastante improvisado, la Asamblea, dominada por el bloque oficialista, abrogó el 26 de mayo la Ley 1341 por considerarla demasiado restrictiva para el accionar de la Policía y de los militares, sin advertir que, sin dicha ley, no era constitucionalmente posible decretar el estado de excepción. Como consecuencia, el gobierno de Paz se vio obligado a actuar bajo la normativa ordinaria mientras se elaboraba y aprobaba una nueva ley, la cual finalmente fue sancionada el 8 de junio, dos semanas después de la abrogación de la norma anterior. Durante ese lapso, el desarrollo de la conflictividad tomó derroteros imprevistos.

En casi toda la geografía nacional se han instalado puntos de bloqueo que se han masificado como respuesta a la violencia desplegada por el gobierno. En la ciudad de La Paz se han establecido bloqueos que han generado problemas de abastecimiento alimentario, situación que es utilizada por el gobierno para profundizar el conflicto y criminalizar a los sectores movilizados, construyendo el argumento de los corredores humanitarios como mecanismo para iniciar un proceso de desmantelamiento de la resistencia. En el departamento de Cochabamba se desarrollan movilizaciones que parten desde diversas regiones, como el Cono Sur, las mancomunidades y distintos distritos, donde se han realizado cabildos para sumarse a la resistencia y a la defensa del proceso. Se estima la existencia de al menos 27 puntos de bloqueo ubicados en los diferentes accesos a la ciudad, acompañados por un proceso continuo de movilización proveniente de diversas zonas del departamento.

El municipio de San Julián (departamento de Santa Cruz) se constituye en un campo de resistencia emblemático de esta confrontación debido a los intentos de desbloqueo desplegados por el gobierno nacional mediante el uso de la Policía y de grupos irregulares, los cuales fueron rechazados por la población que mantiene las carreteras bloqueadas. El municipio de San Julián se vio sorprendido en la madrugada del 5 de junio con la llegada de más de un centenar de vehículos que transportaban efectivos policiales. La caravana estaba encabezada por grupos civiles irregulares identificados como la Unión Juvenil Cruceñista, cuyos integrantes declararon públicamente que apoyaban a la Policía en las labores de desbloqueo y convocaron al uso de bazucas caseras para atacar a los pobladores de San Julián. Estas acciones contaron con el respaldo de efectivos policiales y militares, mientras civiles movilizados en vehículos particulares realizaron disparos contra la población.

Las acciones de “desbloqueo” son lideradas por grupos irregulares bajo resguardo policial, mientras los efectivos observan de manera complaciente los actos cometidos contra los pobladores de los municipios. Las imágenes y los testimonios muestran a estos civiles, presuntamente bajo los efectos de estupefacientes, actuando en primera línea, armados con bazucas caseras y armas blancas, como machetes, escoltados y respaldados por la Policía. Registros captados por medios alternativos en el lugar muestran acciones vandálicas atribuidas a esta facción paramilitar, entre ellas la quema de motocicletas, el asalto a viviendas y el robo de equipos y mercancías en establecimientos comerciales. Estos hechos derivaron en la detención de familias que intentaban defender sus bienes frente a tales agresiones, situación que fue denunciada por distintas autoridades.

Una situación similar se vive en la ruta que conecta La Paz con el municipio de Mecapaca, la cual fue objeto de una incursión de las fuerzas represivas del Estado con el propósito de retomar el control territorial, mediante el despliegue de armamento, la realización de arrestos y el secuestro de dirigentes con el fin de escarmentar al pueblo sublevado. Como consecuencia de este operativo, se produjo además el robo de cultivos pertenecientes a campesinos por parte de civiles que acompañaban la intervención, en una actitud que parecía responder a una lógica de venganza contra el indio sublevado.

**A estas alturas, la incertidumbre política en el país, lejos de acercarse a una solución, es aún mayor. Con un gobierno golpeado por la corrupción, el descrédito, las acusaciones de fraude político y el desborde de los acontecimientos, y dotado, además, desde el 8 de junio, de un instrumento legal como la Ley de Excepción, que genera zozobra e indignación, la sociedad está en llamas. En este contexto, la polarización continúa intensificándose, mientras amplios sectores del mundo comunitario boliviano mantienen una firme determinación de defender las conquistas históricas y la dignidad colectiva, definiendo como demanda única la renuncia de Rodrigo Paz.**

Estas situaciones generan procesos de autoconvocatoria y de alerta frente a una estrategia conducida por grupos irregulares y resguardada por la Policía. En todas estas incursiones realizadas por el gobierno se han presentado denuncias por maltratos, abusos, uso excesivo de la fuerza, asesinatos y destrucción deliberada de bienes privados que, lejos de amedrentar a los sectores movilizados, rearticulan los tejidos de resistencia frente a las acciones represivas del Estado, ejecutadas a través de grupos irregulares como la Unión Juvenil Cruceñista.



[https://ichef.bbci.co.uk/news/976/cpsprodpb/16813/production/\\_109597129\\_a4744513-1f78-4cc4-a182-845f03a0ee09.jpg](https://ichef.bbci.co.uk/news/976/cpsprodpb/16813/production/_109597129_a4744513-1f78-4cc4-a182-845f03a0ee09.jpg)

En un escenario en el que el presidente Paz se ve sobrepasado por la realidad, convoca a través de redes sociales a la sociedad civil para que se sume a las movilizaciones en las calles y ayude a las fuerzas policiales y militares a resguardar la denominada Bolivia del futuro. Esta convocatoria, que posteriormente se intentó eliminar, resultó contraproducente, ya que promovía un enfrentamiento entre civiles, exacerbando los ánimos tanto de bloqueadores como de bloqueados y propiciando el afloramiento de viejas heridas vinculadas a la compleja formación social boliviana.

La criminalización del derecho a la protesta es utilizada por el gobierno para justificar el uso de una fuerza "ejemplarizadora" contra los movilizados, apostando a obtener la aprobación de la población urbana, presentada como una supuesta "gran mayoría" agredida por unos "cuantos delincuentes". Bajo esta lógica, se han ejecutado diversos operativos policiales de desbloqueo que terminaron constituyendo sendas derrotas para el gobierno.

A más de 38 días del inicio de las movilizaciones, el 1 de mayo, los sectores movilizados continúan sumando adhesiones, masificando la protesta y manifestando que su lucha tiene como objetivo la defensa de las conquistas colectivas, las cuales no están dispuestos a ceder por considerar que ello representaría un grave retroceso en la construcción democrática del Estado Plurinacional de Bolivia.

En este escenario, el gobierno de Paz se atrinchera para mantenerse en el poder bajo el argumento de la "defensa de la democracia" y mediante una estrategia de desacreditación del sujeto comunitario y popular que se encuentra en franca rebelión frente a un sistema que considera depredador y violento.

Las demandas de esta rebelión sitúan en el centro el cuestionamiento al modelo capitalista a partir de una diversidad de perspectivas e intereses complejos, que abarcan desde el reclamo por aumentos salariales y el respeto a los derechos agrarios, hasta las denuncias relacionadas con la gasolina basura, el abastecimiento de carburantes en general, la extranjerización de los recursos naturales y el sometimiento a la agenda imperial estadounidense.

Sin embargo, ante la estrategia gubernamental de apostar al desgaste y al cansancio de la movilización social, en la que el diálogo es utilizado como un mecanismo de distracción y desmovilización, las distintas demandas terminan confluyendo en una agenda común de rechazo al diálogo, exigencia de renuncia del presidente Paz y convocatoria a nuevas elecciones generales. Esta agenda adquiere tal fuerza que incluso en sectores no movilizados de clase media y alta comienza a considerarse como una salida política real al conflicto social.

Lo cierto es que, a estas alturas, la incertidumbre política en el país, lejos de acercarse a una solución, es aún mayor. Con un gobierno golpeado por la corrupción, el descrédito, las acusaciones de fraude político y el desborde de los acontecimientos, y dotado, además, desde el 8 de junio, de un instrumento legal como la Ley de Excepción, que genera zozobra e indignación, la sociedad está en llamas. En este contexto, la polarización continúa intensificándose, mientras amplios sectores del mundo comunitario boliviano mantienen una firme determinación de defender las conquistas históricas y la dignidad colectiva, definiendo como demanda única la renuncia de Rodrigo Paz.

# Compartiendo la derrota

## Balance preliminar de siete meses de gobierno y conflictos en Bolivia

🕒 junio 15, 2026

📄 128



### Hugo Moldiz Mercado

Escritor e investigador boliviano

El bloqueo de caminos y la huelga general indefinida de campesinos y obreros está por concluir, como se esperaba: en una derrota. No se alcanzó la meta de la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira; no era posible. El gobierno tampoco saldrá bien parado, lo cual constituye otra derrota, porque una suma de hechos le ha quitado credibilidad tanto entre quienes votaron por su candidatura, de raíz indígena-popular, como entre quienes lo respaldaron -pequeña burguesía y fracciones hegemónicas de la burguesía- apenas juramentó como jefe de Estado.

En términos políticos podríamos decir que, tras dos conflictos de gran escala en Bolivia, en enero y desde mayo, el gobierno y el campo nacional-popular terminan en una suerte de frágil equilibrio inestable de fuerzas, que no concluyó, a la vez, en una de las derivaciones del empate catastrófico advertidas por Gramsci: el choque de dos bloques que se anulan mutuamente y en el que sale ganando un tercero. Esta es una semana decisiva tanto para los sectores movilizados como para el Gobierno. Entre los primeros se encuentran Evo Morales y su sector, que no habían participado activamente al inicio de las movilizaciones y que hoy afirman que no abandonarán su objetivo de lograr la renuncia del presidente. La tendencia apunta hacia otro desenlace, pero no conviene subestimar al líder cocalero, más aún cuando están en juego sus propios intereses.

En términos estratégicos, nadie saldrá ganando de un conflicto social que lleva más de 44 días hasta la publicación de este artículo<sup>1</sup>. El heterogéneo bloque del campo popular no logró consumir el objetivo maximalista de que Paz Pereira renuncie a la presidencia, y su anunciado "repliegue", un término con el cual se busca maquillar la situación, sin haber logrado las reivindicaciones que en un inicio justificaron las protestas, va a provocar un gran torbellino en las organizaciones sociales y sus dirigentes, así como en el estado de ánimo. De hecho, nunca hubo condiciones para derrocar al gobierno, particularmente por dos razones: la mayor parte de la población, principalmente urbana, no iba a sumarse a la idea de elecciones generales o presidenciales anticipadas, y la relación de fuerzas militares no era favorable para los movilizados.

El gobierno sufrió varios golpes, pero no lo suficientemente fuertes como para renunciar o adelantar las elecciones generales. El temor a otro momento de inestabilidad o al regreso del fantasma del MAS fueron sus grandes aliados. La táctica empleada durante el conflicto, más próxima en su desarrollo a la de un gobierno bonapartista<sup>2</sup> de derecha, ha sido apostar al cansancio de los sectores movilizados y al repliegue de algunos de ellos, como ocurrió con los transportistas y los cooperativistas mineros, dos sectores tradicionalmente conservadores y "oficialistas por convicción". También ha apostado por establecer acuerdos parciales con sectores menos radicalizados y alianzas con autoridades subnacionales, principalmente de derecha.

En el número 124 de la *Revista Izquierda*, del 18 de octubre de 2025, un artículo titulado *Balance preliminar: la derrota de la izquierda y la amenaza fascistoide en Bolivia* advertía que el gobierno que iba a surgir de la segunda vuelta -fuera Rodrigo Paz o Tuto Quiroga, ambos de derecha- enfrentaría la continuación de la crisis política e ideológica que data de antes de las elecciones generales de octubre de 2019, cuando un golpe de Estado forzó la renuncia de Evo Morales, y que no fue resuelta durante los cinco años del gobierno popular de Luis Arce. Es obvio que el gobierno *de facto* de Jeanine Añez empeoró la crisis.

En esa misma publicación se planteaban algunas hipótesis a manera de grandes preguntas: ¿el gobierno que entre será la prolongación de la transición, como manifestación de esa crisis general, o el que inicie una nueva etapa en la historia de Bolivia? ¿Y la izquierda está enfrentando una derrota táctica (solo electoral) o más bien una derrota estratégica? Ambas preguntas no han sido respondidas del todo por el único laboratorio capaz de hacerlo: la realidad.

Existen, sin embargo, algunos elementos que conducen a ciertas conclusiones, también preliminares. Si la tendencia se mantiene, el gobierno de Paz Pereira será de transición, no tanto por no cumplir su mandato, sino por no tener la fuerza ni la capacidad suficientes para construir un proyecto distinto al que Bolivia ha conocido durante el llamado Proceso de Cambio. Es decir, cuando se habla de prolongación de la crisis se hace referencia, más que a la interrupción del período constitucional de un gobierno, a la no resolución de la crisis estructural.

Desde el punto de vista de lo nacional-popular, el panorama es mucho más sombrío para la izquierda y para el progresismo, que son dos categorías y prácticas distintas, aunque a veces convergentes. Los acontecimientos nacionales e internacionales abren la hipótesis, ciertamente dura, de que ha sido el progresismo, conservador al menos durante los últimos diez años, el que ha conducido el Estado Plurinacional. Ello conduce a otra conclusión desprendida de la primera: la izquierda no solo no tuvo la capacidad de incidir predominantemente en la orientación de lo que se bautizó como Revolución Democrática y Cultural, sino que fue renunciando a su horizonte estratégico.

Veamos por partes.

**En términos estratégicos, nadie saldrá ganando de un conflicto social que lleva más de 44 días hasta la publicación de este artículo. El heterogéneo bloque del campo popular no logró consumir el objetivo maximalista de que Paz Pereira renuncie a la presidencia, y su anunciado "repliegue", un término con el cual se busca maquillar la situación, sin haber logrado las reivindicaciones que en un inicio justificaron las protestas, va a provocar un gran torbellino en las organizaciones sociales y sus dirigentes, así como en el estado de ánimo. De hecho, nunca hubo condiciones para derrocar al gobierno, particularmente por dos razones: la mayor parte de la población, principalmente urbana, no iba a sumarse a la idea de elecciones generales o presidenciales anticipadas, y la relación de fuerzas militares no era favorable para los movilizados.**



# Los dilemas y problemas de Paz

Si bien Paz Pereira no se ha visto forzado a renunciar, eso no quiere decir que tenga el camino expedito. Es poco probable que los problemas derivados de la acumulación de causas estructurales y coyunturales no desemboquen en nuevos conflictos con sectores sociales y empresariales en lo que resta del año. Tampoco puede descartarse que enfrente una protesta, quizá más profunda, como la que está por sortear.

La situación económica es bastante compleja. La principal fuente de generación de ingresos para el Estado sigue estancada. No se tiene información cierta de cuánto se ha avanzado en el proyecto petrolero en el norte de La Paz, donde se descubrió el campo Mayaya Centro X1 en 2024. Lo cierto es que los volúmenes de exportación de gas no registran mayor crecimiento debido a la ausencia de exploración de nuevos campos durante el gobierno de Evo Morales, cuyas consecuencias económicas ya tuvo que afrontar la administración de Luis Arce.

Los préstamos a los que accedió el gobierno, que en pocos meses superan en volumen a lo registrado durante dos décadas de Proceso de Cambio, y el levantamiento de la subvención a los hidrocarburos, que ha más que duplicado los precios de la gasolina y el diésel, no han logrado impactar positivamente en la economía real como se esperaba. La cotización oficial del tipo de cambio se mantiene, pero, en los hechos, el mercado paralelo es el único que funciona y, si no sube a niveles como los registrados en los últimos meses de la gestión de Arce, se debe a los recursos derivados de los créditos, a otro monto no significativo proveniente de los fondos que los agroindustriales sacaron del país, a la expectativa generada por el cambio de gobierno y al estancamiento de la demanda. ¿Hay otro camino distinto al de los créditos en el corto plazo? Definitivamente no. Sin embargo, la reposición del impuesto a las grandes fortunas, que fue anulado apenas comenzó esta gestión, y la obligación de que los exportadores canalicen sus dólares a través del Banco Central de Bolivia (BCB), como ya sucedió durante el gobierno neoliberal de Víctor Paz Estenssoro (1985-1989), son dos medidas aconsejables que el gobierno de Paz Pereira tiene a mano, pero que difícilmente aplicará.

**Existen, sin embargo, algunos elementos que conducen a ciertas conclusiones, también preliminares. Si la tendencia se mantiene, el gobierno de Paz Pereira será de transición, no tanto por no cumplir su mandato, sino por no tener la fuerza ni la capacidad suficientes para construir un proyecto distinto al que Bolivia ha conocido durante el llamado Proceso de Cambio. Es decir, cuando se habla de prolongación de la crisis se hace referencia, más que a la interrupción del período constitucional de un gobierno, a la no resolución de la crisis estructural.**

Pero el principal problema para el gobierno es político. De una parte, la fuente primaria de su legitimidad es el 32 % de los votos obtenidos en agosto y no el 54,96 % con el que salió victorioso en la segunda vuelta. Este segundo resultado electoral, como sucede en cualquier proceso en el cual no se elige al presidente en primera vuelta, otorga legalidad constitucional, pero no aumenta mecánicamente la legitimidad. Por lo demás, en la medida en que no es la expresión orgánica de los bloques sociales en disputa (lucha de clases), su grado de respaldo no puede ser detectado claramente.

Los dos mayores conflictos que ha enfrentado en seis meses -uno en enero y otro desde el 1 de mayo- marcan una ruptura con los sectores sociales que le dieron un amplio respaldo en la primera vuelta en las veinte provincias de La Paz y la ciudad de El Alto, así como con aquellos que contribuyeron a consolidar su triunfo electoral en la segunda vuelta (el voto del evismo). En el primer bloque incidieron el distanciamiento con el MAS de un grueso de la población campesina y urbana de El Alto y la propuesta del "capitalismo para todos" de Paz Pereira, particularmente atractiva en la ciudad alteña. En el segundo influyeron la "teoría del mal menor" y la caracterización del otro candidato, Jorge Tuto Quiroga, quien no solo triunfó en el departamento de Santa Cruz, bastión de las fracciones hegemónicas de la burguesía boliviana y de los partidos de derecha, sino que además mantiene una posición firme en amplias capas urbanas.

Paz Pereira cambió rápidamente de base social de apoyo apenas juró como presidente, y eso tiene factura. Es poco probable que el gobierno pueda reconciliarse con los sectores que le dieron la mayor parte de su votación. Los primeros sienten que no cumplió los compromisos de campaña; los segundos, tras haber contribuido a derrotar a Tuto Quiroga, consideran urgente retomar una estrategia política en torno al expresidente y líder de los cocaleros del Chapare. Empero, las mayores trabas para que el gobierno recupere la credibilidad perdida entre los sectores sociales populares que le dieron su apoyo electoral son su prematura y rápida alianza con las fracciones hegemónicas de la burguesía boliviana y el error de criminalizar al sujeto histórico, diverso y plural, que hizo posible el nacimiento y desarrollo del Proceso de Cambio. Descalificar los veinte años de gobiernos del MAS equivale, en los hechos, a desprestigiar el papel del bloque social, particularmente indígena-campesino, que participó en la conducción del Estado durante cerca de dos décadas. Grave error de sus estrategias políticas.

Un segundo grupo de problemas se encuentra en el campo de la representación política. Paz Pereira llegó al gobierno sin partido propio y, como hemos señalado, sin base social propia. El Partido Demócrata Cristiano (PDC) le prestó su sigla, mientras que Unidad Nacional (UN), de Samuel Doria Medina, y NFR, de Manfred Reyes Villa, son aliados circunstanciales que no van a renunciar a sus propias estrategias político-electorales. UN se sumó para la segunda vuelta y NFR después de producido el cambio de gobierno. Por tanto, no cuenta con una estructura política propia y autónoma con la cual discutir los temas de la coyuntura, ni mucho menos con la que operar en la realidad concreta.

Esta realidad, ubicada en el campo de la superestructura y de la que pudo sacar provecho gracias a su aparente condición de gobierno bonapartista de derecha (aunque no se reconoce como tal), lo ha empujado a depender en extremo del uso del aparato estatal -burocracia, policías, militares y judicatura-, lo que constituye una debilidad manifiesta que no pasa desapercibida. Más aún si se considera un dato central de la historia boliviana, que no es positivo ni negativo en sí mismo: la sociedad civil es mucho más fuerte que el Estado, como sostenía el intelectual René Zavaleta.

Tercero, como consecuencia de lo anterior, su incidencia en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no se produce por la vía de una fuerza parlamentaria propia, por lo que está obligado a pactar permanentemente con los partidos de la derecha. Además, su ruptura con el vicepresidente Edman Lara, presidente nato de la ALP, incrementa sus debilidades y riesgos. Esta realidad lo ha empujado desde el principio a encontrar en los decretos supremos la forma jurídico-institucional de gobernar o de impulsar alianzas y acuerdos temporales en función de cada coyuntura política.

Ese es el origen del Decreto Supremo 5503, que pretendía ser una reedición del Decreto Supremo 21060, con el cual el gobierno de Víctor Paz Estenssoro inauguró dos décadas de neoliberalismo. La resistencia de los sectores populares inviabilizó la medida gubernamental y el proyecto de reorganización estructural de la economía por la vía rápida de la privatización y transnacionalización de los recursos naturales y de las empresas públicas (*fast track*) permanece paralizado, a la espera de que la ALP apruebe leyes económicas en esa dirección.

La última vez que se vio obligado a buscar acuerdos fue para abrogar la llamada "Ley Copa"<sup>3</sup>, que regulaba la declaración de un estado de excepción, y para aprobar otra ley con el mismo objetivo. Esta última ha sido cuestionada incluso por diputados de la propia coalición oficialista, al establecer en su artículo 26 el criterio de que se presume la legalidad del accionar de policías y militares mientras dure el estado de excepción. No pocos juristas, que nada tienen de izquierda o progresismo, han señalado que esa ley otorga impunidad a las fuerzas de seguridad y constituye una invitación a la violación de los derechos humanos establecidos en la CPE.

En descargo del gobierno hay que señalar que, hasta este momento, no ha tomado la decisión de declarar el estado de excepción que le reclaman dirigentes cívicos y analistas de extrema derecha. Sin embargo, cometió la torpeza de llamar a los "ciudadanos" a colaborar con las fuerzas del orden para despejar las vías bloqueadas. Ello impulsó al grupo Unión Juvenil Cruceñista (UJC) a desplegar acciones violentas en la zona de San Julián, que conduce a la región del Chapare. Que no se haya decretado un estado de excepción no significa que el Estado no esté haciendo uso de la fuerza pública, con los excesos que habitualmente se denuncian en este tipo de situaciones.

Cuarto, está la conformación de un bloque de poder con la totalidad o una parte de los empresarios. Tal como sostienen varios actores políticos, aunque desde perspectivas distintas, el gobierno ha privilegiado las alianzas con las fracciones hegemónicas de la burguesía del departamento de Santa Cruz y con las élites políticas de esa región y del departamento de Tarija, de donde es oriundo el jefe de Estado. De esta manera, su mayor proximidad y trabajo se da con la Cainco y la CAO de la región oriental, y no con la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB).

Quinto, se encuentra la extrema dependencia de la política exterior de los Estados Unidos. De hecho, los principales respaldos al gobierno durante los dos conflictos mayores -enero y desde el 1 de mayo en adelante- han procedido del Departamento de Estado y del Departamento de Guerra de la administración Trump, así como de los países que forman parte del Escudo de las Américas<sup>4</sup>. Resultan particularmente llamativas las declaraciones del secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien sostuvo el 4 de junio pasado que Estados Unidos "está atento" al desarrollo de la crisis boliviana.

Este dato de la realidad, que expresa una "ideologización" de las relaciones internacionales que la derecha criticó en los gobiernos del MAS, se ha traducido en el restablecimiento de las relaciones con Israel, que el gobierno de Luis Arce había roto en rechazo al genocidio del pueblo palestino, y en una fluida relación con el gobierno de Trump, aunque sin alcanzar el nivel de apoyo económico esperado. Hay que reconocer, sin embargo, que no ha roto, aunque sí enfriado, sus relaciones con Estados actualmente dirigidos por gobiernos progresistas, salvo con Colombia, tras una lectura errónea de un pronunciamiento de Gustavo Petro. Mantiene, además, relaciones con Rusia, Irán, China y la República de Cuba.

Más aún, esta raquítica política exterior se expresa, por ejemplo, en la ausencia de designación de embajadores o, al menos, de encargados de negocios en todos los países con los que Bolivia mantiene relaciones bilaterales, incluidos los Estados Unidos, así como en la falta de impulso a relevos en los organismos multilaterales. Ello no es percibido como una buena señal en el mundo de la diplomacia, particularmente sensible a este tipo de actitudes.

Finalmente, el gobierno muestra una actitud raquítica frente a algunos casos de corrupción que requieren esclarecimiento y el procesamiento de los responsables: la compra de la "gasolina basura", el caso de las 32 "narcomaletas", la desaparición del contenido de las cajas fuertes del narcotraficante Maset y la incautación de 108 toneladas de droga ocultas en cargamentos de madera, valoradas en 8.000 millones de dólares, entre enero y abril de este año. Sus asesores omiten que todos son fusibles, excepto el presidente.



[https://www.clarin.com/img/2026/05/22/fhY9AM5sm\\_720x0\\_\\_1.jpg](https://www.clarin.com/img/2026/05/22/fhY9AM5sm_720x0__1.jpg)

## Los dilemas y problemas del campo popular

Los problemas y dilemas en el campo popular no son menores. Lo que ha puesto de manifiesto el carácter de la protesta social, a diferencia de lo que sostienen el gobierno y los aparatos ideológicos del Estado, como los medios de comunicación hegemónicos y las redes sociales, es la marcada ausencia de la izquierda, incluso de las fuerzas progresistas, así como una falta de orientación estratégica.

El primer conflicto, que arrancó el 22 de diciembre de 2025 -a pesar de las fiestas de fin de año- con marchas y luego con huelga general indefinida y bloqueo de caminos desde el 1 de enero de este año, concluyó con el compromiso gubernamental de abrogar el decreto supremo 5503 que, además de levantar la subvención a los combustibles, apuntaba en realidad a un reordenamiento de la economía desde una perspectiva neoliberal.

El dato más importante de esa movilización es el resurgimiento de la histórica Central Obrera Boliviana (COB), que desde 1985 en adelante se vio debilitada y reducida a una presencia simbólica. Por un lado, por la pérdida de centralidad del proletariado (minero y fabril), que el modelo neoliberal ocasionó al echar a la calle a miles de trabajadores, particularmente del sector estatal, como paso previo a la transnacionalización. Por otro lado, debido a la centralidad campesina e indígena que, en su insurgencia a fines del siglo XX, dio lugar al Proceso de Cambio y a los gobiernos del MAS, desplazando a la COB y a la FSTMB a una presencia testimonial.

El segundo conflicto arrancó el 1 de mayo en un cabildo realizado en la ciudad de El Alto, donde se decidió la huelga general indefinida, que solo ganó fuerza con el bloqueo de caminos a partir del 6 del mismo mes, en lo que hasta ahora constituye la protesta social más larga que enfrenta Bolivia en toda su historia. Empezó con un pliego de 16 puntos, entre los que destacaban demandas sectoriales, el pedido de incremento salarial como compensación por la elevación del costo de vida producida por el aumento de los precios del combustible y la abrogación de la Ley 1720, que contemplaba la mercantilización de la tierra. En la segunda semana de mayo se logró la abrogación de la ley impulsada por los agroindustriales, pero el conflicto mutó hacia otro de carácter político.

Atrás quedó la heterogénea demanda reivindicativa, y una alianza entre la COB y la Federación Campesina Tupac Katari de La Paz puso en el centro de la disputa política la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Una poderosa marcha en torno a ambas organizaciones se produjo el lunes 18 de mayo, a la que se sumó un grupo de marchistas alineados con Evo Morales, procedentes principal -aunque no únicamente- del trópico de Cochabamba. La movilización apuntó a la toma de la Plaza Murillo, donde se encuentran la Casa Grande y el Palacio Quemado, sede del Órgano Ejecutivo, así como el Palacio Legislativo, donde trabajan diputados y senadores.

Hay que apuntar que, a pesar de la convergencia de protestas, huelgas indefinidas y bloqueos de caminos, dos factores objetivos anticipaban la gran dificultad de alcanzar el objetivo de destituir al presidente: la ausencia de un mando o dirección única de los movilizadores, cuyas agendas eran distintas, y la imposibilidad de que un cerco a La Paz ganara a su favor a la mayor parte de la población urbana, sin la cual cualquier estrategia está destinada al fracaso.

Los sectores sociales de la protesta eran los campesinos de La Paz, los más radicales; los campesinos del Chapare (evistas), que se sumaron dos semanas después con una marcha y posteriormente a los bloqueos de caminos; los maestros urbanos y rurales, por cuerda separada; el proletariado minero y los fabriles; y, finalmente, los cooperativistas mineros y los transportistas, cuyo principal reclamo era la falta de gasolina y la demora en la indemnización a los propietarios de los vehículos dañados por el combustible basura, al que las autoridades del sector hidrocarburífero estatal llamaron “gasolina dispensada”.

La orientación ideológica predominante entre quienes protestaban estaba lejos de poder considerarse de izquierda y, peor aún, de estar influida por cualquiera de las fracciones del Movimiento Al Socialismo. De hecho, tanto los campesinos de La Paz como los dirigentes de la COB advertían, incluso mediante comunicados, que no iban a permitir que exautoridades y expresidentes utilizaran la movilización contra el gobierno para fines particulares. No se trataba de ninguna argucia política para desviar la atención del gobierno actual, sino de la constatación de una derrota política coronada en las elecciones generales pasadas, cuando Evo Morales llamó al voto nulo en la primera vuelta para “castigar la traición y a los corruptos”, en clara alusión a Luis Arce y Andrónico Rodríguez, y en la segunda vuelta impulsó el voto por el actual presidente Paz Pereira bajo la tesis del “mal menor”. Basta ver lo que posteó en su cuenta X el domingo 20 de octubre y un día después del triunfo del actual jefe de Estado para darse cuenta de su posición.

Salvo pequeñas fracciones trotskistas con incidencia en los maestros urbanos y algunos dirigentes de la COB, lo que se observaba era la presencia activa de un indianismo, también heterogéneo, cuyo eje articulador es lo identitario. No sorprendería que en las próximas elecciones prendiera la consigna: “los karas (blancos) nunca más”. La izquierda, sobre todo la marxista, es testimonial.

Un par de párrafos especiales merecen el papel de Evo y el uso que el gobierno hace de ello. El expresidente tiene un liderazgo fuerte en el Chapare, no hay duda, pero su límite visible es el voto nulo que obtuvo en agosto de 2025 (16 de 19 %), y su capacidad de irradiar su presencia al resto del país tropieza con grandes dificultades para alcanzar los niveles registrados en sus mejores momentos. Las causas van desde su rechazo en las zonas urbanas por su obsesión de ser candidato, a pesar de los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016, hasta el duro cuestionamiento en el movimiento campesino indígena, particularmente aimara, por no respetar el principio de renovación.

El gobierno conoce ese dato, a pesar de que su discurso y accionar revelan un desconocimiento del comportamiento de las organizaciones y movimientos sociales. Sin embargo, se percibe cierto asesoramiento efectivo cuando responsabiliza de todo lo que ocurre a Evo Morales, con el supuesto real de que el expresidente cuenta con un rechazo superior al 60 % en la población urbana, particularmente en el eje La Paz-Santa Cruz-Cochabamba-El Alto, según el promedio de varias encuestas.

**Desde el punto de vista de lo nacional-popular, el panorama es mucho más sombrío para la izquierda y para el progresismo, que son dos categorías y prácticas distintas, aunque a veces convergentes. Los acontecimientos nacionales e internacionales abren la hipótesis, ciertamente dura, de que ha sido el progresismo, conservador al menos durante los últimos diez años, el que ha conducido el Estado Plurinacional. Ello conduce a otra conclusión desprendida de la primera: la izquierda no solo no tuvo la capacidad de incidir predominantemente en la orientación de lo que se bautizó como Revolución Democrática y Cultural, sino que fue renunciando a su horizonte estratégico.**



# A manera de cierre

El gobierno de Paz Pereira y el movimiento social subalterno organizado encaran la segunda parte de este 2026 en un contexto de equilibrio inestable de fuerzas. Ambos bloques tienen más debilidades que fortalezas.

El gobierno tiene el desafío de recuperar credibilidad y de ofrecer la certeza de que cuenta con un proyecto para iniciar un nuevo período estatal y social en Bolivia, lo que implica un nuevo modelo económico. Para lograrlo, hablar mal del modelo del MAS durante veinte años no solo no le otorga crédito, sino que le resta expectativas. Todos saben que la economía del país creció y la gente vivió mejor. La gente espera resultados, no críticas.

El campo nacional-popular tiene el enorme desafío de impulsar una crítica y una autocrítica serenas, maduras y profundas; de reapropiarse de la democracia como autodeterminación, requisito fundamental para obtener una amplia ventaja electoral; y, finalmente, de volver a tejer acuerdos y alianzas a partir del respeto a la diversidad.

La izquierda, sobre todo la marxista, debe emprender un camino que no será corto para rectificar los errores cometidos, resignificar horizontes y no perder la cabeza ni los sueños cuando participa del gobierno.

---

<sup>1</sup> Al momento del cierre de esta edición, la COB llamó a un ampliado nacional para decidir si continuaba o no con la huelga general y el bloqueo de caminos. El pronunciamiento de varias centrales departamentales anticipaba que no se iba a continuar con la medida. Los campesinos del Chapare sí decidieron seguir, pero nada muestra que el resultado será el derrocamiento de Paz Pereira.

<sup>2</sup> Bolivia ha conocido dos gobiernos militares de derecha: Alfredo Ovando en 1969-70 y Juan José Torres 1970-71. El primero de rasgos bonapartistas, pero a la derecha; el segundo, de igual carácter, pero más a la izquierda. El corto gobierno de Carlos Mesa (2003-2005) también podría ser catalogado como bonapartista.

<sup>3</sup> A pesar de la dura represión en el gobierno de facto de Añez, el MAS, con mayoría en la ALP, aprobó una ley de excepción que regulaba la participación de los militares y policías para evitar excesos.

<sup>4</sup> El 7 de marzo pasado, a iniciativa de Trump, se conformó esta alianza con la participación de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.

# La resistencia a la política de Milei y la ultraderecha

🕒 junio 15, 2026

📄 128



## Julio C. Gambina

Doctor en Ciencias Sociales

Profesor de Economía Política

Integrante de la Junta Directiva de la Sociedad Latinoamericana y caribeña de Economía Política y Pensamiento Crítico (SEPLA)

Militante de la Corriente Política de Izquierda (CPI) en Argentina

## I. La resistencia como una constante en la práctica política

La tradición de organización y lucha del pueblo argentino tiene una importante historia, y es visible en la coyuntura contra la política de la ultraderecha, especialmente en las grandes ciudades del país y en los nuevos territorios de la acumulación capitalista, asociados al desarrollo minero, de la energía y las nuevas tecnologías. Los espacios de la concentración urbana sufren las consecuencias de la ofensiva por el ajuste fiscal y la reaccionaria reestructuración del capitalismo local, convocando a desconformidades, protestas y resistencias varias. Al mismo tiempo, crecen las confrontaciones a las políticas públicas en localidades de menor peso relativo de asentamiento poblacional, pero de enorme significado en la ampliación de la explotación de la fuerza de trabajo y el saqueo de los bienes comunes. Este es un tema asociado a las protestas en defensa del medio ambiente y en contra del extractivismo exacerbado que promueve el saqueo y la destrucción del hábitat. El problema es quién representa políticamente esta resistencia.

Cualquier visitante extranjero que ingrese por Buenos Aires al país se encontrará todos los miércoles con la “marchas de las jubiladas y los jubilados”, que hace más de tres décadas pueblan la geografía a las puertas del Congreso de la Nación, una dinámica exacerbada desde la asunción de Milei en diciembre de 2023 y que se generaliza federalmente en todo el territorio nacional. En simultáneo, podrán observarse fortísimos operativos de seguridad que, al reprimir, son destacados por el morbo de los medios de comunicación. La represión incluyó la agresión a un fotoperiodista, quien recibió un impacto directo en la cabeza que lo mantuvo durante meses en terapia intensiva. Aún hoy, más de un año después del episodio, continúa en proceso de recuperación, mientras avanzan las investigaciones judiciales sobre las responsabilidades derivadas del operativo. Vale mencionar que se trató de un episodio que convocó la más amplia solidaridad social en repudio al accionar represivo de la política oficial de la ultraderecha. Interesa más el “desorden” que la difusión de los reclamos de las y los movilizadas.

En el mismo sentido que el movimiento de jubiladas y jubilados -de hecho, el sector social más afectado por las políticas de ajuste y reducción del déficit fiscal, que impactan a cerca de ocho millones de argentinas y argentinos-, son diversas las movilizaciones que expresan la protesta y el conflicto social en el país.

Un caso especial, que acontece desde hace ya medio siglo y mantiene una notable visibilidad, es el de las “rondas de los jueves” de las Madres de Plaza de Mayo, movilizadas en torno a la Pirámide de Mayo, en un espacio emblemático de la política argentina.

De lucha específica se transformó en la bandera por los derechos humanos y la memoria contra el terrorismo de Estado, ejemplo que potencia las luchas feministas y por las diversidades, contra la discriminación y el racismo. La lucha de las madres y de jubiladas y jubilados expresa la universalidad del conflicto social en el país.

No se agota la presencia recurrente de movilizaciones en las demandas de las Madres o de jubiladas y jubilados. Destaca el movimiento obrero organizado en sindicatos y en el territorio, con paros generales y movilizaciones sociales en demandas por históricos derechos laborales, educativos, sanitarios, por la energía o la vivienda, contra la carestía de la vida y la inflación, por diversas demandas sociales, afectados por la ofensiva capitalista desde la emergencia de la dictadura genocida, incluso desde antes. Remito a la ofensiva del capital y de la derecha argentina desde 1975/76<sup>1</sup>. hasta el presente. Un proceso acelerado en tramos especiales bajo gestión cívico militar entre 1976 y fines de 1983; potenciado bajo gobiernos constitucionales en la década del 90 y más recientemente en la gestión de Mauricio Macri (2015/19) y ahora bajo presidencia de Javier Milei y cómplices desde 2023.

Claro que esa lucha popular acontece en simultáneo con una desazón social ampliada ante el descrédito del régimen político luego de décadas de gobiernos constitucionales (1983-2026) que no resolvieron las urgentes necesidades y expectativas de la sociedad, especialmente de los jóvenes. Al mismo tiempo, la ausencia de alternativa política puede explicar que, pese a la tremenda agresión del ajuste y la regresiva reestructuración tras dos años del gobierno Milei, aún no haya un levantamiento popular tal como aconteció en otros momentos, por caso, en 2001. La movilización y lucha actual recorre una experiencia que supone un debate con los afectados por la política pública, al mismo tiempo que acumula en la perspectiva de construir una alternativa política que genere entusiasmo y perspectiva de triunfo para una transformación social que apunte a satisfacer las necesidades populares.

**La tradición de organización y lucha del pueblo argentino tiene una importante historia, y es visible en la coyuntura contra la política de la ultraderecha, especialmente en las grandes ciudades del país y en los nuevos territorios de la acumulación capitalista, asociados al desarrollo minero, de la energía y las nuevas tecnologías. Los espacios de la concentración urbana sufren las consecuencias de la ofensiva por el ajuste fiscal y la reaccionaria reestructuración del capitalismo local, convocando a desconformidades, protestas y resistencias varias. Al mismo tiempo, crecen las confrontaciones a las políticas públicas en localidades de menor peso relativo de asentamiento poblacional, pero de enorme significado en la ampliación de la explotación de la fuerza de trabajo y el saqueo de los bienes comunes.**



## I. 1 Hay historia de la resistencia

No es sorpresa que exista resistencia organizada en la Argentina. La resistencia popular tiene una larga historia que se remonta a la confrontación contra el proceso de conquista y colonización de los pueblos originarios. No todo fue aceptación ni adecuación a la violencia colonial. En esa tradición se inscribe la lucha por la "independencia", que supuso la confrontación entre proyectos políticos distintos. Uno, minoritario y aún en búsqueda de su materialización, orientado hacia la emancipación y asociado a una perspectiva similar a la de la "Patria Grande" imaginada por los libertadores. Se trata de una asignatura todavía pendiente. El otro, hegemónico, buscó y busca un lugar dentro del orden capitalista mundial: un lugar dependiente y subordinado, especialmente en el contexto del desarrollo monopolista del régimen del capital y de la expansión imperialista del capitalismo.

Esta lógica de inserción subordinada en el capitalismo mundial explica la tradición de lucha y resistencia anticolonial, antiimperialista y anticapitalista. Una tradición que convive con proyectos políticos sustentados en la "conciliación de clases", hegemónicos durante períodos de "defensiva capitalista", especialmente entre 1930 y 1980.

El origen del sindicalismo argentino tiene antecedentes en la inmigración, principalmente europea, de finales del siglo XIX y comienzos del XX, que incorporó ideas y prácticas de organización y lucha provenientes del anarquismo, el socialismo y el comunismo. Se trata de una impronta de confrontación con el poder oligárquico e imperialista, asociado al gran capital de origen local, particularmente al de la clase terrateniente.

Luego de la segunda posguerra mundial y la dinámica de industrialización impulsada para toda la región latinoamericana y caribeña, se impone una cultura por el desarrollo del "capitalismo nacional", lo que supone acuerdos estratégicos que sustentan la conciliación social en la mejora de ingresos de las y los trabajadores y las patronales. Es la era de las políticas keynesianas en todo el mundo, matizada según las especificidades nacionales en cada país, que en la Argentina suponía la emergencia de una "burguesía nacional".



<https://mmedia.eluniversal.com/19964/protesta-de-jubilados-en-argentina-157154.jpg>

Remito a dos momentos en la organización y la lucha del movimiento obrero y sindical argentino. El primero, de tradición clasista, se extendió hasta mediados de la década de 1940. El segundo, hegemónico desde entonces hasta el presente, corresponde a una perspectiva asociada a la conciliación de clases, aunque no exenta de disputas internas sobre quién debe hegemonizar ese proyecto: las patronales o la clase trabajadora.

El terrorismo de Estado, iniciado en 1975 y profundizado con la dictadura genocida instaurada en 1976, se ensañó con ambas tradiciones de organización y lucha del movimiento obrero argentino. Desde entonces, la organización económico-social del capitalismo local se ha afirmado sobre un deterioro de la distribución del ingreso en favor del capital y en detrimento del trabajo, así como sobre la persistencia y recurrencia de condiciones laborales y salariales precarias en la explotación de la fuerza de trabajo.

La ofensiva del capital contra el trabajo solo fue amortiguada por algunas experiencias de gobierno que asumieron una posición crítica frente al rumbo neoliberal durante este medio siglo. Sin embargo, la esencia del proceso histórico ha sido la ofensiva capitalista contra el trabajo, lo que incluye la profundización de un modelo productivo y de desarrollo orientado a la precarización de las condiciones de producción y exportación, junto con la persistencia de una relación de dependencia respecto del orden transnacional del régimen del capital.

## II. ¿Quién representa políticamente a la resistencia?

La tradición de organización y lucha se mantuvo, al mismo tiempo que se deterioró la representación política del movimiento obrero y popular, lo que posibilitó el ascenso electoral de las derechas.

En 2015 asumió por primera vez la presidencia, mediante el voto popular, un candidato que no provenía de ninguno de los dos partidos políticos tradicionales: el radicalismo y el peronismo. Desde 1916 y hasta 2015, los presidentes constitucionales surgieron de estas dos fuerzas políticas, que expresaron durante un siglo la principal representación política del movimiento sindical y social argentino.

En la actualidad se observa un quiebre entre la legitimidad del movimiento sindical y social, por un lado, y la representación política electoral, por el otro, situación que ha favorecido la emergencia de presidentes de derecha con respaldo electoral durante la última década.

Lo que pretendo enfatizar es la importancia de la resistencia obrera y popular, al mismo tiempo que se manifiesta una crisis de la representación política, dando lugar a un proceso de reconversión de la política en la Argentina. Este es el principal dilema de la lucha de clases local. La dominación avanza con un plan histórico de reconversión regresiva del capitalismo, iniciado hace medio siglo y que se encuentra con la posibilidad de consolidar la reversión de derechos conquistados por la lucha obrera y popular durante un siglo y medio, entre 1875<sup>2</sup> y 2026.

No es falta de lucha y resistencia el problema en la Argentina, sino la ausencia de un proyecto político y de una estrategia de las organizaciones populares que asumen la perspectiva de la revolución contra el régimen del capital y por la emancipación.

Desde que asumió la presidencia, Milei ha encabezado un gobierno de minoría, sin mayorías en las Cámaras de Diputados y Senadores, sin gobernadores propios en las provincias ni intendentes en los municipios. Desde el inicio de su gestión, el gobierno ha enfrentado innumerables protestas y acciones de confrontación social. Sin embargo, ha avanzado en diversas reformas estructurales regresivas, entre ellas, especialmente en la reaccionaria reforma laboral contra los derechos sindicales, laborales, sociales, individuales y colectivos aprobada en febrero de 2026.

Eso fue posible por la complicidad del poder político, legislativo, judicial y el que se ejerce desde las provincias argentinas. Ahí aparece la contradicción entre la movilización popular, su representación política y la institucionalidad que otorga cobertura y "legalidad" a las acciones del gobierno de Milei. Toda una contradicción entre la "identidad" de la mayoría de los sujetos que protagonizan las protestas y la de quienes representan a la sociedad en los poderes del Estado. El radicalismo y el peronismo, como identidades mayoritarias de la tradición "democrática" en la Argentina y con expresión institucional en el régimen político, avalaron mayoritariamente las reaccionarias políticas de Milei, por lo que son cómplices y contradicen la identidad política mayoritaria entre quienes protagonizan la resistencia popular.

**En la actualidad se observa un quiebre entre la legitimidad del movimiento sindical y social, por un lado, y la representación política electoral, por el otro, situación que ha favorecido la emergencia de presidentes de derecha con respaldo electoral durante la última década. Lo que pretendo enfatizar es la importancia de la resistencia obrera y popular, al mismo tiempo que se manifiesta una crisis de la representación política, dando lugar a un proceso de reconversión de la política en la Argentina. No es falta de lucha y resistencia el problema en la Argentina, sino la ausencia de un proyecto político y de una estrategia de las organizaciones populares que asumen la perspectiva de la revolución contra el régimen del capital y por la emancipación. Este es el principal dilema de la lucha de clases local.**



<https://s.france24.com/media/display/b527fd42-a4df-11ee-a8c2-005056a90284/w:1280/p:16x9/AP23361551357225.jpg>

No es falta de lucha y resistencia el problema en la Argentina, sino la ausencia de un proyecto político y de una estrategia de las organizaciones populares que asumen la perspectiva de la revolución contra el régimen del capital y por la emancipación.

Desde que asumió la presidencia, Milei ha encabezado un gobierno de minoría, sin mayorías en las Cámaras de Diputados y Senadores, sin gobernadores propios en las provincias ni intendentes en los municipios. Desde el inicio de su gestión, el gobierno ha enfrentado innumerables protestas y acciones de confrontación social. Sin embargo, ha avanzado en diversas reformas estructurales regresivas, entre ellas, especialmente en la reaccionaria reforma laboral contra los derechos sindicales, laborales, sociales, individuales y colectivos aprobada en febrero de 2026.

Eso fue posible por la complicidad del poder político, legislativo, judicial y el que se ejerce desde las provincias argentinas. Ahí aparece la contradicción entre la movilización popular, su representación política y la institucionalidad que otorga cobertura y "legalidad" a las acciones del gobierno de Milei. Toda una contradicción entre la "identidad" de la mayoría de los sujetos que protagonizan las protestas y la de quienes representan a la sociedad en los poderes del Estado. El radicalismo y el peronismo, como identidades mayoritarias de la tradición "democrática" en la Argentina y con expresión institucional en el régimen político, avalaron mayoritariamente las reaccionarias políticas de Milei, por lo que son cómplices y contradicen la identidad política mayoritaria entre quienes protagonizan la resistencia popular.

De ahí nuestro interrogante sobre la representación política de la protesta y la resistencia popular. Esa contradicción es expresión de la derrota de una estrategia histórica del movimiento obrero y popular, con reivindicaciones clasistas hasta los inicios de la década del 40 del siglo pasado y luego y, especialmente, en los 60 y 70 bajo las consignas antiimperialistas por la liberación contra la dependencia. En este sentido fue emblemático el debate televisivo en febrero de 1973 entre el dirigente clasista Agustín Tosco y el representante oficialista de la CGT, José Ignacio Rucci. La esencia de la polémica se daba entre el proyecto socialista sustentado por Tosco y el del peronismo defendido por Rucci. La liberación contra la dependencia fue la consigna que hegemonizó a la diversidad de la identidad peronista, mayoritaria en el movimiento obrero y popular.

### **III. Principales resistencias y los debates estratégicos**

A la cabeza de la resistencia se encuentran los paros generales nacionales, impulsados por las centrales sindicales: la Confederación General del Trabajo (CGT), mayoritaria, y las dos CTA (Central de Trabajadores de la Argentina): la Autónoma (CTAA) y la de los Trabajadores (CTAT), junto con sus respectivas organizaciones afiliadas en todo el territorio nacional. Destacamos la figura del "paro nacional" porque constituye una medida que arrastra al conjunto de la conflictividad social, paralizando en buena medida la actividad económico-social y expresando una posición de confrontación política frente al rumbo impulsado desde el poder político. Más aún, ante la reticencia de las centrales sindicales, en especial de la CGT, a convocar paros y movilizaciones, esa demanda se ha convertido en la principal consigna de los sujetos que protagonizan la resistencia cotidiana frente a la política de ajuste y de regresiva reestructuración promovida por Milei y sus aliados en el poder del Estado.

La política pública ha generado desde diciembre del 2023, entre otras consecuencias, el cierre de más de 25.000 empresas y la pérdida de más de 300.000 empleos formales: más de 200.000 del sector privado, unos 80.000 del sector estatal y el resto de casas particulares. El desempleo se atempera por el impacto del crecimiento del trabajo informal en la economía de plataforma, repartidores, choferes, etc., engordando la irregularidad en el empleo, que involucra a más del 50 % de la población trabajadora. Todo abonado por la condicionalidad del endeudamiento externo ratificado en renegociaciones bajo la sumisión al FMI y a grandes acreedores externos hegemónizados por el capital financiero mundial.

En ese contexto es que crece la conflictividad, con acciones desarrolladas en empresas y ramas de actividad, especialmente en los sectores más afectados: el comercio, la industria y la construcción, actividades económicas que explican la mayor parte del empleo en el país y también el renovado fenómeno del desempleo. Los datos de crecimiento económico de Argentina, del 4,4 % para 2025, se explican por el impacto generado en la producción y las exportaciones tanto por la minería como por el sector energético, especialmente los hidrocarburos no convencionales -petróleo y gas-, junto con las expectativas de radicación, mediante inversión externa, de “centros de datos” y empresas vinculadas a la digitalización y la innovación tecnológica.

Un dato curioso es que el impacto regresivo de la política económica aún no genera una respuesta corporativa por parte de las principales cámaras empresariales ni de las expresiones más representativas del poder económico tradicional. Esto se explica por el acuerdo ideológico y político que mantienen con el rumbo del gobierno de Milei, en torno al objetivo común de reducir los ingresos populares, los salarios y las jubilaciones, con la perspectiva de recomponer la tasa de ganancia. Una parte del poder económico tradicional padece las consecuencias de la política oficial impulsada por la derecha en el gobierno, pero mantiene la expectativa de que los cambios estructurales en la relación entre capital y trabajo habiliten un período de recomposición de los intereses del capital.

Las pérdidas de ingresos son cuantiosas entre jubiladas/os y trabajadoras/es y, como ya se señaló, también afectan a pequeños y medianos sectores de la economía. Este fenómeno extendido de sectores perjudicados por el programa de Milei, pese a la amplitud de la protesta y la resistencia social, aún no encuentra una respuesta de síntesis política alternativa.

En ese marco, en el ámbito político, hay quienes impulsan la construcción de un “frente político” contra Milei. Otros sostienen que esa puede ser una estrategia limitada, ya que, al no confrontar la dinámica histórica de reconversión regresiva de la estructura económico-social de la Argentina, podría reiterar experiencias recientes de gobiernos que asumieron bajo rótulos “progresistas” y que, sin modificar sustancialmente el modelo productivo y de desarrollo, habilitaron el retorno de programas de derecha y ultraderecha, siendo el gobierno de Milei un caso paradigmático.

La realidad de la resistencia se amplía con las masivas protestas de la comunidad educativa, especialmente en defensa de la universidad pública y del ámbito de la salud. Son protestas dinamizadas por las organizaciones sindicales de la educación y la salud, pero que involucran al amplio espectro de la sociedad en defensa de la educación y la salud pública. La ofensiva capitalista contra los derechos a la educación o la salud tiene historia y se agravan en el presente con las privatizaciones que se arrastran desde los 90 y las políticas de ajuste fiscal gubernamental, incluso a contramano de legislaciones específicas que se dictaron en este tiempo para el financiamiento educativo y del ámbito de la salud.

El discurso oficial ataca consensos históricos contruidos a través de luchas centenarias, entre las que destacan, en los últimos años, las impulsadas por los feminismos populares y el ambientalismo. En efecto, la prédica contra la cultura “woke” encontró una respuesta masiva del movimiento LGBT+, expresada en marchas contra el fascismo que tuvieron lugar en 2024 y 2025, con una masiva participación social en rechazo al discurso oficialista de carácter racista y discriminatorio.

En las luchas ambientales destaca la defensa del agua, especialmente a través de la organización popular contra la minería en la provincia de Mendoza, así como frente a las concesiones vinculadas a la circulación por el río Paraná y otros territorios donde la contaminación aparece como una consecuencia previsible de un modelo productivo que exacerba el productivismo y el saqueo de los bienes comunes.

**La inestabilidad constituye una característica central del orden económico y político en la Argentina, marcada por una ofensiva del gran capital contra la mayoría de la población, especialmente contra la masa trabajadora. El proyecto de reconversión lleva ya cincuenta años y aspira a restaurar una hegemonía anterior a la consolidación de los gobiernos constitucionales, a un orden retrógrado y conservador, caracterizado por la impunidad del capital en los procesos de explotación y saqueo. Se trata de un proyecto autoritario que, mediante el consenso construido por los medios de comunicación y las redes sociales, así como a través de mecanismos ideológicos y culturales, logra obtener votaciones suficientes para otorgar legitimidad a un rumbo reaccionario y antipopular.**

## IV. Una asignatura pendiente

Interesa resaltar que las movilizaciones masivas tienen como horizonte la crítica a las políticas oficialistas y pese a la masividad y consenso sociopolítico logrado, no expresan aun una síntesis política para una nueva representación popular que levante el programa de esas múltiples protestas y movilizaciones.

Entre las principales gestas de movilización popular se encuentran las reiteradas de los “24 de marzo” en memoria y rechazo al golpe de 1976, hace 50 años. Del mismo modo se pueden citar las grandes concentraciones por el 8M que dan cuenta del aporte de las luchas feministas y de las diversidades sexuales al proyecto emancipador en su conjunto.

La ausencia de una alternativa política constituye el principal límite de la importante resistencia al programa de la derecha en el gobierno, que expresa la demanda del gran capital de disciplinar al movimiento popular para avanzar en un proyecto de reconfiguración reaccionaria del capitalismo local. En ese sentido, Milei representa una continuidad del proyecto impulsado por la dictadura genocida (1976-1983), del programa de corte neoliberal desarrollado por Menem (1989-1999) y De la Rúa (1999-2001), seguido por la presidencia de Macri (2015-2019), y ahora por el propio Milei, con la pretensión de extender su proyecto mediante un segundo período de gobierno entre 2027 y 2031.

El proyecto de la ultraderecha en el gobierno se propone cerrar el ciclo iniciado en 1975-1976 para reestructurar el capitalismo local en sintonía con las búsquedas de las clases dominantes a escala mundial. En plena crisis pandémica, el Foro Económico Mundial (FEM) convocó a “resetear” un capitalismo en crisis. Expresión de ello es la disputa por la hegemonía sobre las innovaciones tecnológicas, los mercados y la reestructuración regresiva de las relaciones laborales y previsionales en favor del capital. De ahí el desorden mundial, las sanciones unilaterales de Estados Unidos y la complicidad de sus socios globales, la creciente militarización y la expansión del gasto militar y del capitalismo delictivo, con la ampliación del comercio de drogas, de armas y de la trata de personas, agravando, además, mediante el productivismo, la dimensión ambiental de la crisis.



<https://ichef.bbci.co.uk/news/raw/cpsprodpb/c563/live/315a5350-01bb-11ef-97f7-e98b193ef1b8.jpg>

Milei no solo forma parte de este programa, sino que también ensaya modalidades propias con pretensión de proyectarlas al capitalismo global. Por ello, su política no puede caracterizarse estrictamente como “nacionalista”, a diferencia de lo que suele afirmarse respecto de otros gobiernos de derecha, como los de Trump, Bolsonaro, Kast o Bukele, por mencionar algunos liderazgos regionales; aunque, desde luego, también resulta discutible el supuesto “nacionalismo” de estos dirigentes.

El proyecto de liberalización pretende alcanzar una dimensión universal y se sustenta en la crítica al socialismo y al reformismo, a Marx y su tradición, así como a Keynes e incluso a la tradición neoclásica, corrientes que, según el cultor de la escuela austríaca, privilegian la intervención directa del Estado en la vida económica y social. Milei se define como liberal libertario y anarco-capitalista, lo que supone una orientación liberalizadora extrema como vía para reimpulsar el régimen del capital a escala global.

La resistencia popular en la Argentina constituye, por lo tanto, una búsqueda de estrategias para confrontar el proyecto más reaccionario de la ofensiva capitalista global. Forma parte de una perspectiva que la izquierda y el movimiento revolucionario mundial necesitan reinstalar en el imaginario social contemporáneo. Ello supone la reorganización del movimiento obrero y popular.

El proyecto revolucionario, así como la estrategia orientada a la revolución, encontró límites en la ofensiva capitalista desplegada tras la crisis de las décadas de 1960 y 1970. A ese proceso se lo ha denominado “neoliberalismo”, aunque no se trata de un fenómeno nuevo ni estrictamente liberal, pues se sustenta en una fuerte intervención estatal que potencia el gasto y la acción militar, de seguridad y defensa -es decir, la guerra-, al tiempo que estimula la especulación basada en el capital ficticio.

Por ello es que las clases subalternas y la potencia del proyecto revolucionario requieren de nuevas experiencias que habiliten la emergencia de una estrategia con posibilidad de triunfo, en contra del capitalismo y por el socialismo.

La experiencia de la lucha en la Argentina es parte de las búsquedas en el ámbito mundial por recrear una teoría y práctica de la revolución. Una búsqueda que tiene historia en las expectativas de cambio político en la primera década de este siglo en la región latinoamericana y caribeña, en el empecinamiento cubano pese a la profundización del bloqueo; en las luchas anticoloniales africanas o las expectativas de sostener un proyecto socialista en el mundo para la preservación del medio ambiente y de la humanidad.

Por eso, los límites de la resistencia en Argentina o en otros territorios pasa por su alcance nacional. Requieren de una mirada más amplia, regional y mundial, en el horizonte imaginado por Martí de un territorio de Nuestra América, a contramano de la concentración hemisférica que propone Donald Trump en su disputa por sostener la hegemonía estadounidense.

La inestabilidad constituye una característica central del orden económico y político en la Argentina, marcada por una ofensiva del gran capital contra la mayoría de la población, especialmente contra la masa trabajadora. El proyecto de reconversión lleva ya cincuenta años y aspira a restaurar una hegemonía anterior a la consolidación de los gobiernos constitucionales, a un orden retrógrado y conservador, caracterizado por la impunidad del capital en los procesos de explotación y saqueo. Se trata de un proyecto autoritario que, mediante el consenso construido por los medios de comunicación y las redes sociales, así como a través de mecanismos ideológicos y culturales, logra obtener votaciones suficientes -más allá del descreimiento ciudadano y del ausentismo electoral- para otorgar legitimidad a un rumbo reaccionario y antipopular.

Frente a esa perspectiva se sitúan las experiencias actuales de lucha y resistencia, junto con el desafío de renovar en el imaginario mayoritario el sueño eterno de la emancipación y la revolución.

---

<sup>1</sup> Antes del golpe de Estado, y con aval gubernamental, actuaban bandas parapoliciales y paramilitares, como la AAA (Alianza Anticomunista Argentina), anticipando el terrorismo de Estado instaurado a partir de marzo de 1976. Incluso, el plan económico implementado en junio y julio de 1975 anticipó las reformas reaccionarias derivadas del programa económico de la dictadura genocida.

<sup>2</sup> Momento de aparición de las primeras organizaciones sindicales y populares que definen una historia contemporánea de luchas y conquistas socioeconómicas y políticas.

# Neoliberalismo y neoconservadurismo en Brasil: Implicaciones para la educación pública

🕒 junio 15, 2026

📖 128



## **Maria de Fátima Cossio**

Profesora de la Universidade Federal de Pelotas/RS/Brasil  
cossiofatimal3@gmail.com

## **Vera Maria Vidal Peroni**

Profesora de la Universidade Federal do Rio Grande do Sul/RS/Brasil  
veraperoni@gmail.com

## **Leonardo Dorneles Gonçalves**

Profesor de la Universidade Federal do Rio Grande/RS/Brasil  
dorneles05@gmail.com

## **Introducción**

La escuela pública brasileña ha experimentado profundas transformaciones durante las últimas décadas. Para comprenderlas es necesario analizar la articulación entre neoliberalismo y neoconservadurismo. El primero constituye una racionalidad política que reorganiza el Estado, las instituciones y la vida social según la lógica del mercado, la competencia y el desempeño. El segundo se expresa en la reafirmación de jerarquías morales, religiosas y culturales, así como en la defensa de formas autoritarias de regulación social. Aunque poseen orígenes distintos, ambos proyectos convergen en la redefinición del papel del Estado, en la reducción de derechos sociales y en la reconfiguración del carácter público de la educación.

La literatura crítica internacional ha señalado desde hace tiempo esta convergencia. En Brasil, sin embargo, ella adquirió características particulares debido a una transición democrática incompleta, a las reformas estatales de la década de 1990 y a la radicalización política observada después de 2016. En este contexto, la educación pública pasó a ser simultáneamente objeto de reformas gerenciales, de disputas morales y de estrategias de recomposición del poder de clase. El argumento central de este texto es que la articulación entre neoliberalismo y neoconservadurismo contribuye al debilitamiento de la educación pública como derecho social y como espacio de formación democrática.



<https://www.ucr.ac.cr/medios/fotos/2019/bolsononaro5ce46495121a1.jpg>

## El neoliberalismo y la redefinición del Estado

El neoliberalismo suele ser asociado a medidas económicas como privatización, apertura comercial, austeridad fiscal y desregulación. No obstante, su alcance es más amplio. Como sostienen Dardot y Laval (2016), se trata de una racionalidad que orienta la organización de la sociedad a partir de criterios empresariales. El objetivo no consiste simplemente en reducir el Estado, sino en transformarlo para que promueva comportamientos competitivos y mecanismos permanentes de evaluación y control.

Harvey (2008) sitúa el surgimiento del neoliberalismo en la crisis capitalista de la década de 1970. Desde esta perspectiva, el neoliberalismo constituyó una estrategia destinada a restaurar el poder económico y político de las élites frente al avance de derechos sociales y de mecanismos de regulación estatal. Su difusión internacional estuvo asociada al Consenso de Washington y a reformas administrativas inspiradas en la Nueva Gestión Pública.

La Nueva Gestión Pública (NGP) reorganizó el aparato estatal según principios derivados de la gestión empresarial. Entre ellos destacan la profesionalización de la administración, la adopción de indicadores de desempeño, el control por resultados, la competencia entre unidades, la incorporación de métodos del sector privado y la disciplina fiscal. En Brasil, estos principios orientaron el Plan Director de la Reforma del Aparato del Estado de 1995.

Dicha reforma distinguió funciones estatales estratégicas de servicios considerados no exclusivos, entre ellos la educación. Para estos últimos se promovieron mecanismos de transferencia de responsabilidades hacia organizaciones privadas y entidades del denominado sector público no estatal. El resultado fue la ampliación de asociaciones entre gobiernos y organizaciones privadas en la ejecución de políticas públicas.

En el campo educativo, Freitas (2018) muestra que la NGP fue difundida mediante fundaciones, institutos y movimientos empresariales que pasaron a influir crecientemente en la formulación de políticas. La defensa de metas, evaluaciones estandarizadas y modelos de gestión basados en resultados desplazó parte importante de las decisiones desde los espacios democráticos hacia redes privadas legitimadas por un discurso técnico. Aunque la educación continuó siendo formalmente pública, su funcionamiento comenzó a alinearse con principios de mercado.

Durante los años 2000 se hicieron evidentes diversas limitaciones de la NGP. La fragmentación administrativa, las dificultades de coordinación y la subordinación de políticas sociales a criterios gerenciales generaron nuevas críticas. Como respuesta surgieron reformas agrupadas bajo la denominación de Pos-Nueva Gestión Pública.

Autores como Ball (2014), Barroso (2005), Lima (2011), Dale (2004) y Robertson (2012) sostienen que la Pos-NGP no representa una ruptura con el neoliberalismo. Más bien, reorganiza y sofisticada sus mecanismos. Conceptos como gobernanza, colaboración, redes y coproducción permiten presentar las reformas como más participativas, aunque se mantienen instrumentos centrales tales como la evaluación por resultados, la contractualización, la responsabilización y la apertura al mercado.

La gobernanza adquiere un papel central en este proceso. Bajo esta lógica, la formulación de políticas involucra gobiernos, organismos internacionales, empresas, organizaciones sociales y especialistas. Aunque presentada como una forma eficiente de coordinación, la gobernanza suele desplazar conflictos políticos hacia espacios técnicos, reduciendo la capacidad de deliberación democrática.

En educación, la gobernanza se expresa en tres dimensiones principales. La primera corresponde a la gobernanza global, impulsada por organismos internacionales como el Banco Mundial, la OCDE y la UNESCO, que difunden indicadores, evaluaciones comparativas y modelos de política educativa. La segunda es la gobernanza privada, caracterizada por la creciente influencia de fundaciones e institutos empresariales en áreas como currículo, formación docente y gestión escolar. La tercera es la gobernanza digital, basada en plataformas, sistemas de información y algoritmos que median la gestión educativa y amplían la participación de empresas tecnológicas.

La gobernanza digital implica transformaciones profundas en los espacios institucionales. La gestión de datos educativos pasa a depender cada vez más de herramientas desarrolladas por grandes corporaciones tecnológicas, capaces de influir en prioridades gubernamentales y de apropiarse de información producida por usuarios, instituciones y el propio Estado. De este modo, mecanismos de coordinación aparentemente neutros pueden reforzar formas sofisticadas de control y dependencia.

**Las relaciones entre lo público y lo privado en educación deben comprenderse en el marco de disputas entre proyectos de sociedad. Lo público se vincula a la igualdad, a los derechos sociales y a la democracia; lo privado, a la competencia, al individualismo y a la meritocracia. Analizar la privatización educativa exige identificar a los actores que la promueven, sus intereses y sus formas de intervención en las políticas públicas. Desde esta perspectiva, fortalecer el carácter público de la educación significa afirmar la responsabilidad estatal en la garantía de derechos. La democracia no constituye un estado acabado, sino un proceso permanente de construcción colectiva, atravesado por conflictos y disputas entre grupos con proyectos distintos. Los derechos sociales forman parte esencial de ese proceso.**



## Neoliberalismo, neoconservadurismo y educación

Las relaciones entre lo público y lo privado en educación deben comprenderse en el marco de disputas entre proyectos de sociedad. Lo público se vincula a la igualdad, a los derechos sociales y a la democracia; lo privado, a la competencia, al individualismo y a la meritocracia. Analizar la privatización educativa exige identificar a los actores que la promueven, sus intereses y sus formas de intervención en las políticas públicas.

Desde esta perspectiva, fortalecer el carácter público de la educación significa afirmar la responsabilidad estatal en la garantía de derechos. La democracia no constituye un estado acabado, sino un proceso permanente de construcción colectiva, atravesado por conflictos y disputas entre grupos con proyectos distintos. Los derechos sociales forman parte esencial de ese proceso.

En América Latina, la expansión de derechos sociales ocurrió simultáneamente a la consolidación internacional del neoliberalismo. Tras la crisis económica de 2008, las estrategias orientadas a recomponer la rentabilidad del capital intensificaron la presión sobre las políticas sociales. En consecuencia, el mercado pasó a ser presentado como referencia de eficiencia, mientras que el Estado fue responsabilizado por problemas económicos y fiscales.

La austeridad ocupa una posición central en este escenario. Como argumenta Mattei (2023), la austeridad no constituye una respuesta técnica y neutral a las crisis, sino una decisión política que define quiénes serán protegidos y quiénes asumirán los costos del ajuste. En Brasil, reformas laborales, restricciones fiscales y elevadas tasas de interés reflejan una orientación que preserva intereses del capital mientras limita la expansión de derechos sociales.

Es precisamente en este contexto donde se fortalece la articulación entre neoliberalismo y neoconservadurismo. Las consecuencias sociales de la austeridad, el desempleo y la precarización generan condiciones favorables para discursos autoritarios que combinan defensa radical del mercado con moralismo, nacionalismo y rechazo a políticas de igualdad.

Brown (2019) sostiene que el neoliberalismo erosiona las bases de la democracia al transformar todos los ámbitos de la vida en espacios de competencia. Paralelamente, el neoconservadurismo ofrece referencias morales y culturales que legitiman jerarquías sociales y justifican restricciones a derechos. Familia, tradición y autoridad son presentadas como alternativas a la acción estatal y a las políticas públicas orientadas a la igualdad.

En Brasil, esta convergencia se manifestó en el fortalecimiento de sectores empresariales, religiosos, militares y agroexportadores que difundieron discursos antisistema mientras defendían la reducción del Estado social. El neoconservadurismo se volvió funcional al neoliberalismo al canalizar tensiones sociales hacia agendas morales y culturales, evitando cuestionamientos más profundos a las desigualdades estructurales.

En educación, esta convergencia no se limita a cuestiones de gestión. También involucra disputas sobre contenidos curriculares, autonomía docente y finalidades de la escuela. Iniciativas inspiradas en Escola sem Partido, propuestas de educación domiciliaria y proyectos de militarización escolar expresan intentos de redefinir quién puede enseñar, qué puede enseñarse y cuáles valores deben orientar la formación de los estudiantes.

La educación domiciliaria ha sido defendida por redes que combinan argumentos vinculados a la libertad de elección familiar con intereses privados asociados a materiales educativos y servicios especializados. Las escuelas cívico-militares, impulsadas especialmente durante el gobierno de Jair Bolsonaro, introdujeron estructuras jerárquicas de control y disciplina que tensionan los principios de gestión democrática y pluralismo característicos de la educación pública.

**En educación, sus efectos se manifiestan mediante reformas gerenciales, mecanismos de gobernanza, expansión de actores privados, control de contenidos curriculares y cuestionamientos a la autonomía docente. Aunque la educación básica permanezca mayoritariamente en manos del Estado, crecen las formas indirectas de privatización que disputan recursos, orientaciones y procesos decisorios. Defender el carácter público de la educación implica, por tanto, reafirmar la responsabilidad estatal, fortalecer la gestión democrática y preservar la escuela como espacio de formación crítica, igualdad de derechos y participación colectiva. Más que una discusión administrativa, se trata de una disputa sobre el tipo de sociedad que se pretende construir.**

## Privatización y control de la educación pública

Aunque aproximadamente cuatro quintas partes de las matrículas de educación básica continúan en la red pública, la privatización avanza mediante mecanismos distintos de la transferencia directa de escuelas al sector privado. Siguiendo a Rikowski (2017), puede entenderse este proceso como una disputa por el fondo público y por el control de las políticas educativas.

Una primera modalidad corresponde a la privatización por dirección. En ella, grupos empresariales y conservadores influyen en la definición de agendas, prioridades y reformas educativas. Movimientos como Todos Pela Educação, el Movimento pela Base y organizaciones vinculadas a Escola sem Partido o al homeschooling participan activamente en la formulación de políticas públicas.

La segunda modalidad se refiere a la privatización por ejecución. En este caso, entidades privadas asumen directamente la prestación de servicios educativos en áreas como educación infantil, educación profesional, educación especial y programas específicos de gestión.

La tercera modalidad combina dirección y ejecución. Instituciones privadas participan simultáneamente en la definición de políticas y en su implementación. Fundaciones e institutos empresariales desarrollan materiales didácticos, programas de formación docente, sistemas de evaluación, plataformas digitales y mecanismos de monitoreo que orientan el trabajo escolar. Tales instrumentos amplían la capacidad de actores privados para influir en el cotidiano de las escuelas y en las decisiones pedagógicas.



<https://prensacomunitaria.org/wp-content/uploads/2022/10/FfZTmHmX0AUHTX9-1024x681-1.jpg>

## Conclusión

La articulación entre neoliberalismo y neoconservadurismo constituye uno de los principales desafíos para la educación pública brasileña contemporánea. Mientras el neoliberalismo reorganiza el Estado con base en criterios de mercado, eficiencia y competencia, el neoconservadurismo impulsa agendas moralizantes y formas autoritarias de regulación social. En conjunto, ambos proyectos contribuyen al debilitamiento de la democracia, la restricción de derechos y la redefinición del sentido de lo público.

En educación, sus efectos se manifiestan mediante reformas gerenciales, mecanismos de gobernanza, expansión de actores privados, control de contenidos curriculares y cuestionamientos a la autonomía docente. Aunque la educación básica permanezca mayoritariamente en manos del Estado, crecen las formas indirectas de privatización que disputan recursos, orientaciones y procesos decisorios.

Defender el carácter público de la educación implica, por tanto, reafirmar la responsabilidad estatal, fortalecer la gestión democrática y preservar la escuela como espacio de formación crítica, igualdad de derechos y participación colectiva. Más que una discusión administrativa, se trata de una disputa sobre el tipo de sociedad que se pretende construir.

## Referencias bibliográficas

BALL, Stephen. **Educação global S.A.:** novas redes políticas e o imaginário neoliberal. Ponta Grossa: Editora UEPG, 2014.

BARROSO, João. O Estado, a educação e a regulação das políticas públicas. **Educação & Sociedade**, Campinas, v. 26, n. 92, p. 725-751, 2005.

BROWN, Wendy. **Nas ruínas do neoliberalismo:** a ascensão da política antidemocrática no Ocidente. São Paulo: Politeia, 2019.

DALE, Roger. Globalização e educação: demonstrando a existência de uma “cultura educacional mundial comum” ou localizando uma “agenda globalmente estruturada para a educação”? **Educação & Sociedade**, Campinas, v. 25, n. 87, p. 423-460, 2004.

DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. **A nova razão do mundo:** ensaio sobre a sociedade neoliberal. São Paulo: Boitempo, 2016.

FREITAS, Luiz Carlos de. **A reforma empresarial da educação:** nova direita, velhas ideias. São Paulo: Expressão Popular, 2018.

HARVEY, David. **O neoliberalismo:** história e implicações. São Paulo: Loyola, 2008.

LIMA, Licínio. **A escola como organização educativa:** uma abordagem sociológica. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2011.

MATTEI, Clara. **A ordem do capital:** como economistas inventaram a austeridade e abriram caminho para o fascismo. São Paulo: Boitempo, 2023.

RIKOWSKI, Gleen. Privatização em educação e formas de mercadoria. **Retratos da Escola**, Brasília, v. 11, n. 21, p. 393-413, jul./dez. 2017.

ROBERTSON, Suzan. A estranha não-morte do neoliberalismo na educação. **Educação & Sociedade**, Campinas, v. 33, n. 121, p. 1133-1153, 2012.